

Periferias

Revista de Ciencias Sociales

Año 11 • N° 14

Primer semestre 2007

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES
SOCIALES Y POLÍTICAS

<http://fisyp.rcc.com.ar>

Revista Periferias
FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales
y Políticas.
Av. Corrientes 1543, 5to. Piso.
(CP1042AAB) Buenos Aires, Argentina.
Tel./Fax 5077-8000 internos 8384 / 8039
Mail: fisyp@rcc.com.ar
periferias@rcc.com.ar
<http://fisyp.rcc.com.ar>

Producción editorial:
Darío Stukalsky

Corrección:
Julián Sánchez

Periferias es una publicación semestral.

Precio del ejemplar: \$ 15.

Impreso en C&S Impresiones Offset
Pueyrredón 2011, (1650) Villa Maipú,
Pdo. San Martín - Pcia. Buenos Aires - Argentina.

La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas es una entidad sin fines de lucro, dedicada a la actividad de investigación, docencia y difusión en diversas áreas de Ciencias Sociales. Promover la edición de **Periferias**, Revista de Ciencias Sociales, es una iniciativa asumida como parte integrante de su actividad académica.

ISSN: 1514-559X

COMITÉ EDITORIAL

Daniel Campione
Alberto Fortunato
Julio Gambina
Oscar Martínez
Miguel Mazzeo
Beatriz Rajland

COLECTIVO DE REDACCIÓN

Mariana Carroli
Florencia Martínez
Alexia Massholder
Rodrigo Pascual
Tamara Perelmuter
Carla Poth

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Giorgio Baratta
(Universidad de Urbino, Italia)
Javier Arzuaga
(Universidad Autónoma del Estado de México)
Manuel Monereo
(Fund. de Investigaciones Marxistas-España)

Raúl Zibecchi
(Revista Brecha-Uruguay)
Georges Labica
(Universidad París X-Francia)
Tomás Moulian
(Universidad Arcis-Chile)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente: Julio Gambina

Daniel Campione
Beatriz Rajland
Oscar Yankilevich
Secretario Ejecutivo: Santiago Lizuain

SUMARIO

Del comité editorial

Diez años de *Periferias* 7

Dossier: Diez años de *Periferias*

La economía argentina entre 1996-2006
Julio C. Gambina 11

A diez años (¿de qué?)
Beatriz Rajland 35

Historia Oral y repensar la historia
Pablo Pozzi 53

Artículos

A un año de gobierno de Evo Morales. Los desafíos de la revolución boliviana
Pablo Stefanoni 63

Fernando Martínez Heredia. La coherencia del pensamiento crítico,
la pasión de la revolución
Claudia Korol 73

Palabras al recibir el premio nacional de Ciencias Sociales
Fernando Martínez Heredia 77

Dudas y precauciones: ¿desde cuándo hubo clase obrera en la Argentina?
Adrián López 83

Kirchnerismo: el populismo como farsa
Alberto R. Bonnet 97

Comentarios de libros

| | |
|--|-----|
| La escuela pública sitiada, de Pablo Imen <i>Carla Poth</i> | 115 |
| La sociedad excluyente. La argentina bajo el signo del neoliberalismo, de Maristella Svampa <i>Ariel Fontecoba</i> | 119 |
| Concurso <i>Periferias</i> | 124 |

DEL COMITÉ EDITORIAL

Diez años de *Periferias*

Hace 10 años surgía *Periferias*; desde la protesta, la resistencia y la necesidad de pronunciarse desde el margen, desde los bordes, desde una lucha de clases presente, aunque no siempre visible. Era una convocatoria intelectual y militante en el campo de las Ciencias Sociales, pero con la pretensión de articularse con el movimiento popular. Un aporte intelectual para el desarrollo de síntesis teóricas en la dificultosa constitución del sujeto de la transformación social, contra el capitalismo y por la emergencia de nuevas relaciones sociales sin explotación.

Se puede hacer un balance cuantitativo de *Periferias*; sucintamente, podemos destacar: una década; 13 números; 114 artículos, notas o comentarios; 80 autores, 50 de los cuales son argentinos, y 30 colaboraciones de otros países; 10 dosieres. Más de 10.000 ejemplares.

Un poco más complejo resulta comentar el aporte cualitativo de *Periferias*. Es que la revista emerge en un momento de hegemonía neoliberal, que ofreció justificación teórica a la ofensiva del capital. Una hegemonía que se expresaba con claridad en la política en curso, en la Argentina y en el sistema mundial. Un sistema capitalista que puede asociarse, en la coyuntura, con las categorías de neoliberalismo y terrorismo como las claves de identidad del pensamiento y la práctica del poder de las clases dominantes, en la encrucijada del cambio de milenio.

A poco de andar surge el movimiento de desocupados (piqueteros), y se extienden las expresiones de lucha popular, mientras que la Central de Trabajadores Argentinos ampliaba su propuesta y se articulaba en un gran movimiento, en demanda de la distribución del ingreso. De esa forma, la movilización se transformó en pueblada y se puso en discusión la política. Se abrieron expectativas de cambios

en la Argentina, las que contactaban con procesos en el mismo sentido en todo el continente.

A diez años la situación es otra. La hegemonía del capital está siendo disputada por los pueblos movilizadas, en especial en el continente latinoamericano y en el Caribe. La idea de otro mundo posible se extendió desde los márgenes, expresando la voluntad diversa de millones de movilizadas de transformar la realidad. La nueva realidad pasó por nuestras páginas, no solo por los autores contenidos en cada número, sino por las temáticas abordadas, tanto en los dosieres como en los artículos regulares.

Los contenidos divulgados en los distintos dosieres nos devuelven algo de lo que antes señalamos. Comenzamos poniendo el acento en debates esenciales, y por ello se consideró al “Marxismo y el Estado”, para luego abordar las “Ciencias Sociales y el Marxismo”, o el “Imperialismo, Globalización y cambios de época”, dando cuenta de la necesidad de búsqueda en los clásicos junto a las actualizaciones correspondientes de un conjunto de aspectos, puestos en discusión a fines del Siglo XX y comienzos del XXI.

Se trataba de discutir y reivindicar al marxismo, al tiempo que de contribuir al desarrollo de una teoría del Estado desde ese paradigma, que asumimos en la diversidad como nuestra referencia teórica. Hace 150 años Carlos Marx retomaba sus estudios de Economía Política, para la crítica, y en sus borradores anunciaba futuros desarrollos que nunca abordaría sistemáticamente, y menos para su publicación. Entre otros aparecía el tema del Estado y el Mercado Mundial. Este último concepto nos llevó a discutir los cambios derivados por el proceso de transnacionalización de la economía y globalización del poder, con nuevas superestructuras mundiales para la liberalización, como se puede ver en la OMC y en los siempre vigentes Organismos Financieros Internacionales.

Sobre el final de nuestra década, la iniciativa política del movimiento popular, principalmente en América Latina y el Caribe, nos llevó a insistir centralmente en la discusión e interrogantes sobre la Argentina, y si, en efecto, había cambios en su orientación de gobierno. Del mismo modo lo hacíamos sobre las distintas visiones que genera la América Latina actual.

El balance nos dice que, desde un análisis más abstracto, la realidad nos convoca a consideraciones más concretas, que nos permitan retomar nuevas abstracciones que puedan dar cuenta de los fenómenos de la época actual. Se trató de un paso que estuvo mediado por análisis históricos, de necesaria recuperación de la memoria de la izquierda argentina y de discusión sobre la representación política, su crisis y el papel de los movimientos sociales. El escenario había mutado y en el cambio de siglo emergían nuevos actores, que ahora eran visibles en la disputa por el orden local y global. La representación política era puesta en cuestión por el movimiento popular movilizad y nos animaba a opinar, discutir y generar nuevas síntesis.

Esa disputa política es también teórica, y *Periferias* ha contribuido a su desarrollo, desde un enfoque plural, por las firmas incluidas y la variedad de temas y asuntos en debate. Es el punto de partida para el futuro, en unas Ciencias Sociales que están desafiadas por el movimiento popular en lucha. Son muchos los interrogantes abiertos y nos sentimos parte de las nuevas camadas de intelectuales que funden su práctica teórica con la contestación cotidiana y en la búsqueda de alternativas de organización social. Bajo nuevas circunstancias vuelve a criticarse masivamente al capitalismo, y se arriesgan propuestas civilizatorias allí donde el socialismo disputa su lugar. Es un tema teórico y práctico de la política contemporánea donde nos involucramos de forma militante.

En *Periferias* sentimos la satisfacción del deber cumplido y el desafío de ir por más. “Utopía y Praxis” decíamos en el primer número, aludiendo a las utopías históricamente determinadas, que convocan a pensar y actuar; por eso Praxis, en tanto aporte intelectual para la revolución.

Hace diez años nos lanzamos a la aventura de una revista teórica para el debate y la construcción de movimiento por la transformación. Hoy tenemos una nueva situación, con expectativa de cambios por la dinámica social que pone en discusión el poder y que, en algunos casos, con expresión en gobiernos, disputa la institucionalidad del régimen político. Damos cuenta de luchas por el poder, que en algunos casos se materializan en la esfera de los gobiernos. Ambas situaciones generan expectativas y debates, a los que *Periferias* pretende abordar creativamente y en polémica, asumiendo una perspectiva construida desde la lucha de clases y la crítica, invariables en la tradición de Marx y los clásicos.

Se hace también necesario relevar cambios discursivos recientes, que en nada afectan las relaciones sociales vigentes y la impronta reaccionaria y regresiva de las mutaciones instrumentadas a fines del siglo XX. Es un desafío para la confrontación de ideas, para que las clases dominantes no se apropien del lenguaje a favor de los cambios. Hace más de una década se produjo una apropiación de la categoría “reforma”, ya que de su connotación por modificaciones progresistas en la tenencia de la tierra, el gobierno universitario, o un cambio progresivo en el régimen tributario o financiero, pasaron a connotar las políticas regresivas de los organismos internacionales, tales como la reforma de la Educación, de la Salud, del Estado o de la Justicia. Ahora pretenden destacar el combate contra la desigualdad, ocultando la responsabilidad de la política hegemónica y su teoría apologética.

De lo que se trata es de asumir el desafío, sobre la base de esta década de experiencia, para profundizar la crítica al capitalismo realmente existente y a sus teóricos justificadores, tanto a aquellos que lo hacen explícitamente como a los que escamotean su referencia ideológica con críticas discursivas, para continuar, por otros medios, la misma política. Desde la crítica pretendemos aportar, en este nuevo tiempo, a la construcción del socialismo.

LA ECONOMÍA ARGENTINA ENTRE 1996-2006

*Julio C. Gambina**

I. Introducción

El inicio de nuestro comentario parte del final del auge del menemismo, luego de la reelección presidencial (1995-1999), y aunque atravesando un periodo recesivo de la actividad económica, producto del impacto de la crisis mexicana (devaluación del peso en México en diciembre de 1994, conocido como efecto tequila), nadie en el poder ponía en duda la continuidad de la política económica y el modelo de acumulación de capitales. Como se podrá ver en el Cuadro II, el PIB había caído en 1995 y retomado un ciclo alcista hasta el comienzo de la prolongada recesión iniciada en 1998. En la elección presidencial de 1999, ni la fórmula oficial encabezada por Eduardo Duhalde, ni la opositora liderada por Fernando De la Rúa, ponían en cuestión la política económica o el régimen convertible (abril de 1991 a enero de 2002).

A diez años vista (1996-2006), devaluación mediante en enero de 2002, asistimos otra vez a un auge del consenso político hacia el gobierno (también del Partido Justicialista), fenómeno a materializarse electoralmente en la renovación presidencial de octubre de 2007. Es un dato de la realidad sustentado en la performance de la economía (crecimiento del PIB, superávit fiscal y comercial, aumento sos-

* Profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP (entidad adherida al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO). Integrante del Comité Directivo de CLACSO.

tenido de las reservas internacionales, entre otros guarismos de la contabilidad nacional), con renovación del ciclo de los negocios (ampliación de la facturación total de las empresas) y mejoras en las cuentas de ganancias de los capitales dominantes. Existe la imagen de que la economía funciona, y eso allana los consensos políticos. Es 1996 un tiempo de consenso político mayoritario hacia el accionar del gobierno. El fenómeno, bajo nuevas circunstancias, vuelve a repetirse una década después. Aclaremos que no sostenemos la inevitabilidad de una crisis a corto plazo, pero, pensando en los ciclos económicos, ella no puede descartarse.

El ciclo que pretendemos analizar transcurre entre dos momentos de auge en el consenso hacia las políticas hegemónicas, mediados por una profunda crisis con eclosión en la rebelión popular de fines del 2001. En ciertas miradas de la realidad se ha leído que el modelo convertible (1991/2001) entró en crisis (recesión 1998/2002) y, por lo tanto, emerge desde comienzos del 2002 un nuevo modelo de acumulación. Se adiciona que el primero tenía epicentro en la valorización financiera y el actual (2002/2006) en la productiva. Desde nuestra óptica, privilegiando el análisis de los beneficiarios y los perjudicados por la política económica en la década, sostenemos la continuidad de la variación de las relaciones sociales de producción, reestructuradas desde mediados de los años '70 y especialmente confirmadas en los '90. Que los privilegiados del régimen de convertibilidad hayan sido las empresas privatizadas de servicios públicos, los bancos transnacionales y los acreedores externos, y que luego de la devaluación el polo beneficiado sea liderado por los sectores productivos monopólicos y los acreedores externos privilegiados (preferentemente los organismos financieros internacionales), no quita que, en conjunto, constituyen el bloque de clases sociales en el poder en todo el periodo, y que, con matices en uno u otro de los tiempos, constituyeron la dirección del proceso de acumulación de capitales, de ganancias, de riqueza y de poder. En el otro polo, la mayoría de la población, los trabajadores y los sectores pequeños y medianos de la economía sufrieron las consecuencias de las modificaciones al interior del modo capitalista de producción.

¿De qué reformas en las relaciones de producción hablamos? Aludimos, en primer lugar, a las modificaciones en la relación entre el capital y el trabajo. Nada agregamos si se remite a la explotación o a su acrecentamiento, fenómeno esencial del capitalismo en cualquiera de sus formas y etapas, pero sí vale mencionar las variaciones derivadas de la flexibilidad salarial y laboral, cuanto de la emergencia del desempleo y subempleo estructural; de la pobreza e indigencia, como de la expansión de la desigualdad entre las franjas de mayores y menores ingresos relativos. El cambio de funciones del Estado, con epicentro en las privatizaciones, constituye un segundo tipo de reestructuraciones, las que se completan con la nueva inserción del capitalismo local en el sistema mundial.

II. Análisis de algunos datos y procesos en un ciclo de mediano y largo plazo

a) El problema del empleo

Como apreciamos en el Cuadro I, desde mediados de los años '70, y hasta comienzos de los '90, la tasa de desempleo osciló entre 2,3% (octubre de 1978) y 7,0% (octubre de 1992), con algunos picos del 7,1% (octubre 1989) y 8,1% (mayo 1989). Sobre fines de los '80 el problema del empleo comienza a presentarse como un fenómeno no coyuntural. En mayo y octubre de 1993 se registrarán los últimos indicadores de un dígito en la tasa de desempleo, del 9,9% y 9,3% respectivamente. Luego, la serie indica una expansión de dos dígitos hasta fines de 2006, con picos de 18,4% en mayo de 1995 (efecto tequila) y de 21,5% en mayo de 2002, luego de la devaluación de enero de ese año.¹ Ya tenemos constituido el fenómeno como un problema estructural y de largo aliento.

A partir de mediados de los '70, el capital hegemónico traslada sobre los trabajadores el costo de la crisis (de valorización del capital), tanto con la caída como con la fragmentación de los salarios, con el desempleo y subempleo, para transformarse, en forma creciente, en un problema estructural potenciado en la década del '90. Es un fenómeno que se mantiene en la actualidad. El último registro revelado por el INDEC marca 10,1% de desempleo para la medición de diciembre de 2006, la que se difunde con un valor menor, que sin computar los planes jefes y jefas de hogar² registra un índice de 8,7%.

El subempleo reconoce valores de 11,3% en el pico de mayo de 1995 y de 18,6 en mayo de 2002, alcanzando, en diciembre de 2006, un 10,8. La suma de ambos guarismos (empleo y desempleo) destaca un 29,7 en mayo de 1995; 40,1 en mayo de 2002, y 20,9 en diciembre de 2006. Para obtener un valor de un dígito en la suma del desempleo y el subempleo, debe irse hasta octubre del '83 (9,8%), o aún más atrás, hasta mayo de 1981, con 9,2%. Estamos sugiriendo que el desempleo y subempleo actuales son producto del modelo de acumulación de capitales que emerge a la salida de la crisis de los '70, y que pasa de una escala de entre el 6 y el 10% en los fines de los años '70, para incrementarse al 30% en mediados de los '90 y alcanzar el 40% en el epicentro de la crisis de 2001/2002.

La situación actual, aún con tendencia a la baja, se encuentra en valores que duplican los registros de fines de los '70 y comienzos de los '80. Estar mejor que en el momento más crudo de la crisis no debe ocultar que el punto de partida para las

1 Datos obtenidos de las series históricas del INDEC, en <http://www.indec.mecon.ar/>

2 Subsidios de \$150 mensuales (equivalentes a 50 dólares), siendo el salario mínimo a marzo 2007 de \$800 y de \$900 la línea de pobreza.

modificaciones estructurales (modos de estructuración de las relaciones de producción) surge en la crisis de valorización del capital (de rentabilidad) de mediados de los años '70. Se trata de un largo ciclo de más de tres décadas en el que se opera una fortísima transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los grandes propietarios de capital que actúan en el capitalismo local.

Sostenemos que este elemento actuó para disciplinar al movimiento de los trabajadores en todo el periodo desde 1975/6, claro que como resultado de la represión ejercida sobre sindicatos, movimientos sociales y políticos que, de una u otra forma, representaban los intereses de los asalariados. Tanto la dictadura militar y el genocidio, la tortura y la represión, como las tendencias inflacionarias de los últimos treinta años (gobiernos dictatoriales y constitucionales), fueron elementos constitutivos del temor acrecentado con los problemas de empleo, base de la impunidad empresarial para inducir la subordinación de los trabajadores al capital. Son políticas de desarme de la resistencia y la organización de los trabajadores. Es una estrategia del capital contra los trabajadores y con una asignación de funciones específicas al Estado para la materialización de dichas políticas.

Vale recordar que esta estrategia es respuesta directa al poder de los trabajadores construido en el ciclo de ascenso de sus luchas entre 1969 y 1974, desde el rosario y cordobazo a la Ley de Contratos de Trabajo; o, si se quiere, de la resistencia peronista en 1955 a las movilizaciones de junio y julio de 1975, expresión de la última movilización popular ante la escalada represiva de las Tres A (Alianza Anticomunista Argentina), y del terrorismo de Estado emergente con el golpe de marzo de 1976.

Cuadro I (años y meses seleccionados, utilizados en el texto)

| Año (mes) | Tasa desempleo | Tasa subempleo | Total | Promedio |
|------------------|-------------------|-------------------|-------|---|
| 1974 (mayo) | 5 | 5,4 | 10,4 | 6 al 10% |
| 1978 (octubre) | 2,3 | 3,8 | 6,1 | |
| 1981 (mayo) | 4,2 | 5 | 9,2 | Fin de tasas de un dígito |
| 1983 (octubre) | 3,9 | 5,9 | 9,8 | |
| 1989 (mayo) | 8,1 | 8,6 | 16,7 | Crece hasta llegar prácticamente al nivel del 30% |
| 1989 (octubre) | 7,1 | 8,6 | 15,7 | |
| 1992 (octubre) | 7 | 8,1 | 15,1 | |
| 1993 (mayo) | 9,9 | 8,8 | 18,7 | |
| 1993 (octubre) | 9,3 | 9,3 | 18,6 | |
| 1995 (mayo) | 18,4 | 11,3 | 29,7 | |
| 2002 (mayo) | 21,5 | 18,6 | 40,1 | Máximo |
| 2006 (diciembre) | 10,1 (a) | 10,8 | 20,9 | Duplica fines de los '70 |

(a) La cifra difundida es 8,7% sin contar los Planes Jefes y Jefas de Hogar. Fuente: INDEC.

Concentramos el comentario en los datos del desempleo y subempleo por constituirse ellos en un factor relevante para disciplinar a los trabajadores. El miedo a la pérdida del empleo (regular o irregular, estimado éste por el Ministerio de Trabajo en más del 40% de los trabajadores) condiciona a la baja el ingreso obtenido por la venta de la fuerza de trabajo. La tendencia de punta a punta, entre mediados de los '70 y la actualidad, aún en la última década (motivo específico de nuestro interés), es de pérdida del valor de compra del ingreso de los trabajadores. Lo perdido por los trabajadores en estos periodos debe computarse como transferencia de ingresos desde los trabajadores a los capitales hegemónicos que actúan en el capitalismo local. La crisis de rentabilidad (valorización del capital) se resuelve en la medida en que la renta socialmente generada tenga destino en la ganancia y a costa del pago de la fuerza de trabajo.

El fenómeno del desempleo consolidó, en la década del '90, una nueva situación en la respuesta de los trabajadores, y generó, desde 1997, un corrimiento de la protesta de los trabajadores. Por un lado, puede destacarse el surgimiento, en los '90, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que privilegió la adhesión de los trabajadores con independencia de su inserción sindical y su carácter de activo o pasivo, regular o irregular. A diferencia de la CGT, incluyó en su seno la problemática del desempleo, y especialmente a los desempleados. Se terminaba un ciclo histórico de privilegio a una Central única de trabajadores, aunque es cierto que en varias ocasiones ésta se encontraba dividida. Pero debemos resaltar la voluntad, en este periodo, de conformar una Central alternativa a la burocrática expresada en la CGT. En la CTA confluían distintas vertientes de un peronismo disidente y corrientes diversas de la izquierda, todos en la búsqueda de una nueva representación sindical y política de los trabajadores.

El otro fenómeno a destacar es la aparición del movimiento piquetero, adquiriendo amplia visibilidad en el ciclo de luchas que se proyecta entre 1997 y hasta fines del 2003. Al inicio del proceso, es la CTA la que intenta articular el movimiento de trabajadores desocupados, y protagoniza el primer congreso piquetero en momentos previos a la rebelión popular de fines del 2001. A partir del 2002 se producirá un conjunto de divisiones y reagrupamientos, entre las que deben incluirse aquellas motivadas por la cooptación de dirigentes y organizaciones por parte del gobierno que emerge de las elecciones presidenciales en el 2003.

Desde la asunción de Néstor Kirchner en la presidencia (mayo 2003), se procesa una política de acumulación de consenso que incluye privilegiadamente la captación de dirigentes y organizaciones del movimiento social y político, protagonistas del ciclo ascendente de luchas entre 1997 y 2002/3. Este movimiento de desempleados (piqueteros) incluía como principal reivindicación el trabajo y el ingreso. Recordemos que, unos pocos días antes de la puéblada del 19 y 20 de

diciembre del 2001, más de tres millones de personas se pronunciaron a favor de un seguro de empleo y formación para jefes y jefas de hogares desempleados, y de un ingreso universal para menores de 18 años y para mayores de 65 años sin cobertura previsional. Era una iniciativa convocada por un abanico muy importante de organizaciones sociales y políticas, entre las que se destacaba la CTA. Desde la política estatal se contestó (en todo el periodo que comentamos) con política social de asistencia, históricamente expresado en los planes trabajar y, luego de la pueblada del 2001 y de la extensión de la pobreza (56% de la población a comienzos del 2002), con el Plan Jefes y Jefas, que abarcó a casi dos millones de personas. Este último plan se mantiene en valores constantes por más de cinco años, pese a una inflación del 80% del Índice de Precios Minoristas, y el consecuente deterioro de la capacidad de compra de los receptores del subsidio.

Recientemente, en su mensaje de inauguración de las sesiones parlamentarias de 2007, el presidente Kirchner manifestó con satisfacción la creación de 3,4 millones de puestos de trabajo entre 2002 y 2006. Es un dato real que oculta el deterioro de la capacidad de compra del salario del conjunto de los trabajadores, y de su capacidad organizativa y de protesta. La ofensiva del capital sobre los trabajadores se inicia con la crisis de fines de los '60 y comienzos de los '70, coincidiendo con la importante acumulación de poder sindical y político de los trabajadores en el ciclo de lucha de esos años. Es una ofensiva que se acelera y llega al máximo deseado en los '90, especialmente entre 1996 y 1998 (aparición de los primeros números de *Periferias*). Es importante recordar que, a escala global, el gobierno argentino fue destacado como el "modelo a seguir" en la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial de 1998, realizada en Washington. Una hipótesis a verificar en el tiempo es el fin de ese ciclo ofensivo desde lo acumulado por la resistencia de los trabajadores con las luchas que llevan a la pueblada del 2001. El límite a la capacidad de revertir la situación puede estudiarse desde la ausencia de una alternativa política más allá de la resistencia y la organicidad logradas por el movimiento popular en aquellas movilizaciones masivas de 2001/2002.

b) Subas y bajas del ciclo económico

Entre la disputa del consenso por el gobierno, incluida la captación de dirigentes y organizaciones, junto con una política económica de reversión del ciclo recesivo, acompañada de un momento de expansión de las relaciones capitalistas a escala global y un ciclo ascendente de la economía mundial, el capitalismo, en la Argentina, aparece con datos macroeconómicos que potencian una imagen de salida de la crisis. Así lo confirman 36.000 millones de dólares acumulados en reservas internacionales a marzo de 2007; aunque resulta de interés interrogarse el porqué de tantos recursos acumulados en paralelo con la inmensa deuda social incorporada en el ciclo regresivo de reestructuración de la economía.

La Argentina crece a tasas del 9% acumulativo entre 2003 y 2006, con superávit fiscal primario superior al 3% del PIB, y una población bajo la línea de la pobreza del 31,8%. ¿Es racional registrar superávit fiscal con un tercio de la población bajo la pobreza? El argumento presidencial es que el superávit se destina a la genuina acumulación de reservas internacionales para evitar la vulnerabilidad externa de la economía local. Lo de genuina es una crítica al crecimiento de reservas con endeudamiento, propio de la política de los gobiernos en los '90. ¿Pero, sobre la vulnerabilidad, por qué privilegiar la externa, relativa a los mercados de capital (especulativo), por encima de las vulnerabilidades derivadas de las necesidades populares insatisfechas? ¿Cuál es la racionalidad de estos razonamientos? Obviamente que la respuesta debe buscarse en el objetivo de "reconstruir el capitalismo nacional" formulado en la asunción de Néstor Kirchner en mayo de 2003.

La ofensiva del capital se transformó en consenso social (por lo menos mayoritario, hegemónico) en torno a la reelección de Carlos Menem en 1995. Esa hegemonía fue disputada entre 1997 y 2002. Desde distintas fracciones de la clase dominante se expresó en la discusión entre el proyecto de dolarización, sustentado por Carlos Menem y el establishment intelectual asociado al interés de las empresas privatizadas, la banca transnacional y los organismos internacionales, y el proyecto devaluacionista, impulsado por productores y exportadores, grandes fabricantes y empresarios del campo. El gobierno emergente de Eduardo Duhalde en 2002 resolvió la discusión a favor de la propuesta por la devaluación, y se propuso recomponer el poder de gobernar que se transformó, desde mayo de 2003 con Néstor Kirchner, en el objetivo de "reconstruir el capitalismo nacional". Esta última apelación remite a un imaginario capitalista a comienzos de los años '70, y más especialmente a la constitución de un bloque político que, desde fines de los años '60, imaginaba la construcción de una sociedad anticapitalista, incluso socialista. Era un imaginario sostenido en el ascenso del ciclo de luchas populares ya comentado (1969/1974). La apuesta presidencial en 2003 trataba de recuperar la imagen de "aquel proyecto", que articulaba a la burguesía local (CGE con Gelbard, Bronner, entre otros), especialmente orientada a la acumulación en el mercado interno, con el movimiento de trabajadores (CGT y la importante y extendida sindicalización) y diversas organizaciones sociales (territoriales, culturales) y movimientos y partidos políticos con proyectos encontrados en una perspectiva por las reformas sociales y la revolución. Un arco político diverso alimentado por un sistema mundial en crisis, con dificultades para ejercitar la hegemonía disputada por las luchas de emancipación que recorrían el mundo, desde el mayo francés o la primavera de Praga, ambos en 1968, al triunfo de Vietnam en 1973; incluso la declaración del Nuevo Orden Económico Internacional, NOEI, en Naciones Unidas, en 1974, votado negativamente solo por 12 naciones del capitalismo desarrollado. Remitimos a una acumulación de poder emergente de un ciclo de lucha de clases surgido de las

luchas por el socialismo en Rusia, China y Cuba. Un ciclo que será puesto en duda ante la caída del muro de Berlín (1989) y la desarticulación de la URSS (1991).

Pero, además, pretendía obturar un proyecto político de las clases subalternas para la emergencia de una perspectiva alternativa, e incluso de emancipación humana. De un lado, dolarización o devaluación, y del otro, la posibilidad de construir “alternativa política” para una sociedad emancipada. El sueño eterno de la emancipación –parodiando al sueño eterno de la revolución, de Andrés Rivera– volvía a escurrirse en el escenario de la lucha de clases, sustentado en el ciclo de ascenso de la protesta popular a fines del ‘90 y comienzos del nuevo siglo.

La base material del consenso actual del gobierno de Néstor Kirchner se asienta en los datos que ilustra su presentación ante los legisladores el pasado 1/03/07³. Pero esa base permite la construcción de un imaginario, presente en la memoria de una parte del activismo social, e incluso de generaciones nuevas que arrastran aquel “pasado mejor” (1973/1975), y que forma parte de la épica recordada durante 31 años como la “mejor camada de luchadores argentinos”. No en vano es desde los derechos humanos desde donde se disputó el consenso hasta tanto surtieran efectos, en la contabilidad nacional, los resultados derivados de la devaluación. El efecto inmediato de la devaluación apuntó a recomponer la capacidad del aparato productivo local, y a restablecer el funcionamiento del mercado laboral, aún en las condiciones precarias que ya hemos definido. Es la devaluación –política instrumentada por Duhalde y sus ministros Remes Lenicov (Economía) y De Mendiguren (Producción), luego mantenida en torno a 3 pesos por dólar con Lavagna ministro de Economía de Duhalde y luego de Kirchner, y actualmente con Felisa Miceli desde diciembre de 2005– el eje sobre el que se afirma la salida de la recesión (1998/2002) y la recuperación y reactivación de la actual actividad económica, el consumo, la inversión y el comercio internacional.

Vale la pena insistir en que el debate entre las clases dominantes era entre la dolarización y la devaluación y que, por lo tanto, la salida con modificación del tipo de cambio tuvo, entre los principales beneficiarios, a una fracción del capital hegemónico. Además, ese relanzamiento del ciclo económico se potenció desde la “modernización” operada durante el periodo inmediato anterior. Las inversiones de los ‘90 explican buena parte de la expansión pos devaluación.

3 Disponible en www.presidencia.gov.ar

Cuadro II (evolución de la economía en Argentina)

| Años | Evolución del PIB | Evolución del consumo | Evolución de la inversión (bruta interna fija) | Saldo del comercio internacional (X – M) |
|-------------|--------------------------|------------------------------|---|---|
| 1993 | 236.505 | 195.628 | 45.069 | -5.687 |
| 1994 | 250.308 | 205.703 | 51.231 | -7.842 |
| 1995 | 243.186 | 198.347 | 44.528 | -981 |
| 1996 | 256.626 | 208.236 | 48.484 | -3.434 |
| 1997 | 277.441 | 225.027 | 57.047 | -8.008 |
| 1998 | 288.123 | 232.806 | 60.781 | -8.066 |
| 1999 | 278.369 | 229.783 | 53.116 | -4.072 |
| 2000 | 276.173 | 228.715 | 49.502 | -3.194 |
| 2001 | 263.997 | 216.919 | 41.750 | 2.470 |
| 2002 | 235.236 | 189.087 | 26.533 | 18.311 |
| 2003 | 256.023 | 202.265 | 36.659 | 14.732 |
| 2004 | 279.141 | 219.152 | 49.280 | 9.406 |
| 2005 | 304.764 | 237.719 | 60.458 | 8.782 |
| 2006* | 324.810 | 251.171 | 68.615 | 6.825 |

Miles de pesos. Valores constantes. Año base 1993.

* Incluye los dos primeros trimestres (faltan los datos del cuarto trimestre).

Consumo privado + consumo público

Fuente: INDEC

El crecimiento de la economía entre 1992 y 1994 explica el sustento material del consenso político e ideológico al programa de transformaciones regresivas con el que se votó el segundo periodo de Menem en 1995, que al poco tiempo se mutara en recesión prolongada (1998/2002). El crecimiento entre 2003 y 2006 lubrica el consenso de un segundo periodo de la actual gestión, con independencia de quién la lidere.

En materia de economía resulta imposible pronosticar el momento del fin del ciclo ascendente, pero existen algunas incertidumbres sobre las que conviene interrogarnos. ¿Cuánto durará el ciclo ascendente del sistema mundial? ¿Puede EEUU sostener indefinidamente su doble déficit, fiscal y comercial? ¿Hasta cuánto puede crecer el endeudamiento externo estadounidense? ¿Es sostenible el crecimiento que China acumula ya por treinta años? El ciclo global sugiere que el crecimiento de China se sustenta sobre una fuerte corriente inversora de capitales originarios del capitalismo desarrollado, que a su vez es una fuerte demandadora de recursos naturales provenientes del sur del mundo, conformando así un círculo virtuoso global, donde EEUU incide en el crecimiento chino, quienes financian, con su exce-

dente de liquidez, al imperialismo estadounidense, a la vez que inducen una expansión bajo nuevas condiciones del capitalismo en el sur.

Existe un clima favorable de los negocios en el sistema mundial y con impacto sobre Argentina y otros países con potencialidad en la oferta de los recursos naturales. Es un tema que revierte el clásico análisis del deterioro de los términos del intercambio. ¿Es previsible su mantenimiento? En síntesis, ¿Cuál es el nuevo modelo de desarrollo que emerge desde la crisis del 2001 y más precisamente desde 2003?

c) Consolidación de un sistema de relaciones de producción

Nuestra hipótesis sostiene que en los '90 se consolidaron modificaciones en las relaciones sociales de producción, en la forma de organización económica del capitalismo argentino, que hoy mantienen su estructura. Son formas que comenzaron a desarrollarse desde mediados de los '70 y bajo mecanismos extraeconómicos, con terrorismo paraestatal y del propio Estado. Hicimos especial referencia al tema del desempleo por ser el organizador de las relaciones sociales a nivel de la empresa; por ser el lugar en que se expresa la dominación del capital y desde donde parte la producción y reproducción de la vida social en su conjunto. Es ese el lugar que da origen al Estado como creación del capital para la subordinación de la sociedad a su mando. Es cierto que el Estado constituye parte de la lucha de clases, que es espacio en disputa, tanto como lo es la propia relación entre el capital y el trabajo. La puja distributiva se organiza por el reparto del producto social del trabajo, y se expresa en la lucha por la apropiación de la renta nacional, a nivel de las empresas, en las negociaciones por salarios y por las condiciones laborales, y en la disputa por el gasto del Estado.

Pero es también sobre el propio Estado y sus funciones que se concentra el problema para nuestro análisis. En 1996 era claro el programa y el discurso sobre el Estado. Desde los despidos de estatales a las descentralizaciones educativas y hospitalarias, pasando por la consolidación del proceso de privatizaciones, de empresas y de funciones (la seguridad por ejemplo). En 2006 asistimos a una crítica hacia aquellas políticas que no se manifiestan como reversión estructural. Las reestatizaciones ocurridas se vinculan más a procesos de empresas con serios problemas de gestión y capacidad de obtener ganancias, tales como el correo, la empresa de aguas, el servicio radioeléctrico o alguna de las concesiones ferroviarias. Incluso con Enarsa, que es una nueva empresa estatal mixta, no parece observarse una voluntad política de reversión de una definición de modelo instalado favorable a la iniciativa privada.

Ocurre algo similar con la cuestión de la inserción internacional de la Argentina, claro que con los matices del cambio de época en el capitalismo global, y especialmente en América Latina. Con Carlos Menem existía la lógica de total subordi-

nación a la estrategia de EEUU, en la que el ALCA ocupaba un lugar central. Las reuniones de presidentes americanos realizadas desde 1994 tuvieron el eje de discusión centrado en el librecomercio, ocurriendo el primer traspie en la reunión de Mar del Plata de noviembre de 2005⁴, en la que el MERCOSUR más Venezuela obstaculizaron la inclusión de la agenda por el área de librecomercio desde Alaska a Tierra del Fuego. Menem actúa en el periodo de máxima ofensiva del programa global por la liberalización de los capitales empujados por las Corporaciones Transnacionales. A fines de los '90 y comienzos del Siglo XXI se desarrollan fenómenos de resistencia que en América Latina suponen cambios profundos en la correlación de fuerzas, y que inducen modificaciones en los gobiernos que cuestionan, aún discursivamente, la hegemonía neoliberal del periodo inmediato anterior. En ese marco se inscribe la presidencia de Néstor Kirchner. Con Menem surge el MERCOSUR (1991) y se transforma en el modelo institucional que asumen todos los protocolos de integración regional en los '90, y que marca el rumbo de la integración neoliberal. En la actualidad el mapa es muy distinto. Los procesos de cambio en Venezuela, especialmente la opción socialista asumida por este país en el tercer mandato de Hugo Chávez a partir de enero de 2007, y su asociación, en el ALBA, con Cuba desde 2005, con Bolivia desde el 2006, y su inserción como asociado al MERCOSUR desde el mismo año, modifican sustancialmente el tablero de la política exterior de los países en Latinoamérica. El gobierno argentino define su múltiple adhesión a escenarios diversos que lo acercan alternativamente a Venezuela, a Brasil o al propio EEUU. Un interrogante alude a cuál de esas opciones es la prevaleciente, y define las principales diferencias con la inserción internacional de Menem, quien no dudaba de las necesarias "relaciones carnales" con el imperialismo estadounidense.

III. El gobierno de Néstor Kirchner

a) Problemas de caracterización

Siempre es un problema cuando a un argentino lo consultan, en el exterior, sobre el gobierno de Néstor Kirchner. Para algunos sectores del poder económico mundial es el "señor antimercado"⁵. Así lo calificó la prensa estadounidense en la

4 La primera reunión fue en Miami (EEUU) en 1994, la segunda en Santiago (Chile) en 1998, la tercera en Québec (Canadá) en 2001, y la cuarta en Mar del Plata (Argentina) en 2005.

5 Los diarios argentinos del 27/09/06 (La Nación o Clarín) recogían las críticas al Presidente argentino del Editorial del periódico estadounidense The Wall Street Journal, quien denominó a Kirchner como "el señor antimercado".

reciente visita a New York, para participar de la Asamblea anual de la ONU, ocasión que sirvió para realizar variadas entrevistas con inversores, actuales y potenciales. Es un calificativo, a pesar de las declaraciones del imputado, que, a minutos de iniciar la rueda de negociaciones en Wall Street, con el simbólico campanazo, manifestó agradecer el “gesto del mercado” por la invitación, destacando que “la Argentina está volviendo al lugar del que nunca debió haber salido”⁶. Es una aseveración concordante con lo manifestado en su intervención original para “reconstruir el capitalismo nacional”⁷. Más directa fue la Senadora Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que “la lógica del gobierno es volver viable a la Argentina dentro de la lógica del capitalismo”.⁸

Sin embargo, en buena parte de la “opinión progresista (incluso de izquierda mundial)” –categoría difusa, por cierto, pero existente entre intelectuales, dirigentes políticos y sociales, aunque también entre sectores menos informados de la población mundial–, lo que aparece son las opiniones del Presidente de la Argentina sobre los Organismos Financieros Internacionales⁹, e incluso confrontaciones con algunos de los empresarios más poderosos que actúan en la Argentina¹⁰. Recientemente, ante la Asamblea de la ONU, dijo que “existe suficiente constatación empírica en cuanto a que los aportes de los organismos financieros internacionales a la promoción del desarrollo de los países menos adelantados, no ha tenido éxito y, en muchos casos, en función de sus condicionalidades, han actuado en sentido contrario, obstaculizando el desarrollo.” Son críticas sostenidas al mismo tiempo que un cumplimiento estricto de los pagos por vencimiento de deuda pública, que con el FMI llegaron al pago anticipado de casi 9.500 millones de dólares¹¹ en enero del 2006.

El gobierno argentino se jacta de cierta heterodoxia, que incluye una fuerte crítica a la corriente de pensamiento que fuera hegemónica en los ‘90 y que estuvie-

6 Diario La Nación del 20/9/06.

7 Página de la presidencia de la Nación Argentina, sección discursos. Intervención del 25/5/03. Disponible en www.presidencia.gov.ar

8 Diario La Nación del 19/9/06.

9 Ver el Discurso pronunciado el 20/8/06 ante la Asamblea de la ONU. Sitio de la Presidencia en Internet.

10 En marzo de 2005 llegó a plantear un boicot a la petrolera Shell por aumentar el precio de los combustibles, logrando el éxito mediante el acuerdo de no incrementar los precios con otras petroleras de mayor peso en la Argentina, caso de Repsol y Petrobras, con la ventaja de ser éstas refinadoras.

11 Más de diez veces el costo del principal programa de asistencia social, y que involucra a un millón setecientos mil personas en el “Plan de Jefes y Jefas de Hogar desempleados”, quienes reciben todos los meses una asignación de 150 pesos, equivalentes a poco menos de 50 dólares.

ra inspirada en el Consenso de Washington. A pesar de ello, ninguna de las reformas estructurales generadas en ese tiempo ha sido revertida en los tres años de gobierno (2003/2006), y que el proyecto de Presupuesto para el 2007, presentado el 26/9/06 ante el Parlamento, no ofrece ninguna señal de modificaciones en ese sentido. No aparecen propuestas que indiquen señales en la distribución progresiva del ingreso –y mucho menos de la riqueza– mediante reformas tributarias progresivas, o propuestas radicales que sugieran una reforma agraria, financiera o productiva sustentada en un bloque social de las clases subalternas. La tónica apunta a la continuidad esencial de la gestión desplegada en este turno presidencial (2003/2007).

Es común que se escuche la calificación de “progresistas” para varios de los nuevos gobiernos surgidos en la región latinoamericana y caribeña, e incluso se habla de “giro a la izquierda”¹². Son denominaciones no aceptadas por el oficialismo argentino, que prefiere remitir al “peronismo”, fenómeno político y social complejo de definir bajo los clásicos parámetros de “izquierda” o “derecha”, e incluso de “centro”. No es el objeto de estas notas, pero el peronismo lleva más de 60 años en la vida política de la Argentina, concentrando en su seno el abanico posible de izquierda a derecha. Un interrogante recurrente para los estudiosos de la sociedad y la política en la Argentina es la posibilidad de la emergencia de una nueva representación política de las clases subalternas, algo de lo cual podía vislumbrarse en la crisis del 2001, que sin embargo no pudo materializarse y continúa siendo una asignatura pendiente.

De hecho, por el propio accionar del gobierno, o por la inercia subsistente de la dinámica popular del ciclo de protestas sociales con epicentro en 2001 y 2002, la dinámica de la evolución de la Argentina se asocia a las expectativas generadas por los cambios de gobierno en la región, especialmente en Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Argentina era una incógnita, ya que su gobierno es producto de la crisis del 2001, pero no es una construcción derivada del movimiento de protesta popular. Es una diferencia con el resto de los países mencionados. En todos los otros casos se accede al gobierno tras un periodo de movilización y construcción de referencia, liderazgo e instrumento político para un gobierno con pretensión transformadora. Nadie podía imaginar el accionar en la Administración Nacional de Néstor Kirchner, asumido en las elecciones presidenciales del 2003 (27/04/03), en las que obtuvo el segundo lugar con el 22% de los votos, aunque las encuestas lo daban por seguro ganador en la segunda vuelta¹³. El

12 Expresión que con variantes usan la prensa especializada, tal como *The Economist*, *The Wall Street Journal*, e incluso comentaristas mediáticos de amplia difusión en la prensa de la región, como Andrés Oppenheimer o Mario Vargas Llosa.

13 El régimen electoral de la Argentina establece que “resultará electa la fórmula que obtenga más del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de los votos afirmativos

retiro de la segunda vuelta de quien había obtenido el primer lugar, con el 24% de los votos¹⁴, permitió que asumiera un gobierno considerado débil por el escaso apoyo obtenido. La imagen del nuevo presidente era sospechada de ser “dependiente” de Eduardo Duhalde¹⁵, presidente de la transición entre enero del 2002 y mayo del 2003, a la sazón, el elector del candidato oficial del Partido Justicialista (PJ), el partido del gobierno. La primera tarea del nuevo gobernante fue la de construir “poder propio”, y puede afirmarse que, habiendo ya transitado más de tres años de gobierno, esa meta ha sido lograda. Es más: en los análisis políticos de la coyuntura argentina se sostiene la ausencia de una oposición con posibilidades de disputar el gobierno en la próxima renovación presidencial de octubre de 2007.

b) Dos etapas de la gestión económica entre 2003 y 2007

En la gestión de Néstor Kirchner, y desde el punto de vista de la política económica, pueden señalarse dos etapas muy claras, vinculadas a los dos ministros que ocuparon la cartera de economía. Roberto Lavagna, que venía siendo el Ministro de Economía de Eduardo Duhalde desde abril del 2002 (fecha de inicio de la recuperación de la economía Argentina, luego de una larga recesión entre 1998 y 2002), continuó en su función, en la nueva gestión, hasta diciembre del 2005. Fue reemplazado en su cargo por Felisa Miceli, entre cuyos antecedentes figuraba haber trabajado en la “consultora” particular de Lavagna, y el ser llevada por éste a las esferas de gobierno, primero como expresión del ministro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego al frente del Banco de la Nación Argentina (BNA).

La primera etapa se caracteriza por la recuperación de la economía y la negociación del endeudamiento público en default. La cesación de pagos fue transitada desde la última semana de diciembre del 2001 hasta mayo del 2005, momento en que se materializó el canje de deuda, con una considerable quita a los acreedores de

válidamente emitidos; o, en su defecto, aquella fórmula que hubiese obtenido el CUARENTA POR CIENTO (40%) por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiese una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos. Si ninguna fórmula alcanzare esas mayorías y diferencias, se realizará una segunda vuelta dentro de los TREINTA (30) días, participando solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, y resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos.” (Código Electoral Nacional)

- 14 Carlos Menem podría haber sido nuevamente presidente de no mediar el régimen electoral de “segunda vuelta”. Es un tema para adicionar complejidad al comentario anterior sobre el fenómeno del peronismo en la Argentina.
- 15 Vicepresidente de Carlos Menem (1989-1991); Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (1991-1999) y candidato a Presidente por el PJ en las elecciones de renovación presidencial de 1999, donde fue electo Fernando De la Rúa.

títulos elegibles con atraso. La segunda etapa se define por el mantenimiento de la recuperación y reactivación de la economía, con privilegio en el combate a la inflación, que había crecido considerablemente durante el año 2005, y se proyectaba en ascenso para el 2006. El futuro inmediato, ligado a la posible reelección presidencial, se asocia a la continuidad del crecimiento con un tipo de cambio elevado, para asegurar la competitividad de la producción local, la fuerte recaudación tributaria y el superávit fiscal para el cumplimiento riguroso de los compromisos externos. En ese marco es que algunos especulan con el aliento a una nueva etapa que resuelva la demanda por la distribución del ingreso —e incluso de la riqueza. Es un tema más de especulación política que de rumbo concreto que pueda derivarse de políticas concretas, y que puede verificarse en el objetivo principal del gobierno.

En el discurso inaugural (25/05/03), Néstor Kirchner definió el objetivo de su gestión y las principales medidas de acción más como un “rumbo” que como un plan concreto. En esa idea de rumbo u orientación del accionar gubernamental manifestó: “En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente.”¹⁶ En otro tramo de su discurso convocará a construir un “país normal”, aludiendo a la superación de la crónica crisis que de la economía se había proyectado a la política, y que amenazaba la institucionalidad constitucional recuperada desde fines de 1983.¹⁷

En el mensaje mencionado se suscita que “es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso”. Para afirmar la institucionalidad se sostiene que “vamos a apoyarnos en la Constitución para construir una nueva legitimidad de las leyes...”. En lo económico específicamente se plantea: “El objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable, que permita una expansión de la actividad y del empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los últimos años. El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada quince años, y una distribución tal que asegure una mayor distribución del ingreso y, muy especialmente, que fortalezca nuestra clase media, y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas.” Afirmando algunas máximas como el “equilibrio fiscal”, “más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto”, siendo el “equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, fundamental.” El propósito

16 Discurso del Presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa en el acto de asunción, del 25/05/03. Tomado de <http://www.presidencia.gov.ar>

17 El 10/12/83 asumía la Presidencia constitucional Raúl Alfonsín, luego de años de gobierno de una dictadura genocida entre 1976 y 1983, y parte de un proceso histórico que desde 1930, lo “normal” era la recurrencia de golpes militares.

general era “dotar a la República Argentina de buena administración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso social y competitividad.” Respecto de la inserción global, se planteaba que “el país debe estar abierto al mundo, pero abierto al mundo de una manera realista, dispuesto a competir en el marco de políticas de preferencia regional y, fundamentalmente, a través del MERCOSUR, y de políticas cambiarias flexibles acordes a nuestras productividades relativas y a las circunstancias del contexto internacional”, para sustentar luego relaciones adecuadas con EEUU y la Unión Europea.

Un rumbo por el “capitalismo nacional”. Una opción por la “integración regional” en un marco de privilegio a la “movilidad social ascendente” basada en el equilibrio entre el “mercado interno” y la inserción internacional. Se sostenía “que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente; debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona.” Y que la pobreza se resolvía con política económica y no con política social. El acento se pondría en resolver las demandas sociales insatisfechas en materia de educación, salud, seguridad. Las líneas generales del accionar del nuevo gobierno estaban dadas a conocer. Se criticaba el modelo anterior, especialmente la década del ‘90, tanto por las políticas como por los liderazgos. Crítica al gobierno de Carlos Menem (1989-1999) al señalar que “la medida del éxito de esa política la daban las ganancias de los grupos más concentrados de la economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones especulativas, sin que importara la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo.” También criticaba al gobierno que le sucedió al decir que “algunas fuerzas políticas, en 1999, se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses.”

En rigor, también se alejó de las transiciones luego de la crisis de fines del 2001, no avalando la fuerte devaluación del peso realizada a comienzos del 2002, que representó una fortísima transferencia de recursos desde los sectores de menores a los de más ingresos, y tampoco sostuvo la cesación de pagos al señalar, en su mensaje al Congreso en 2004, que “este no es el gobierno del default”¹⁸. Desde el primer discurso hasta la actualidad, los objetivos han sido formulados en contradicción con aquellos afines al modelo imperante en los ‘90. Las declaraciones a la prensa estadounidense antes mencionadas pueden expresar un cambio discursivo más amigable a los oídos de los inversores internacionales, máxime cuando en América Latina está en discusión el rumbo económico, social y político, y especial-

18 Mensaje inaugural de las cesiones del Parlamento del 1/5/2004. Ver en sitio en Internet de la Presidencia de la Nación Argentina.

mente cuando los resultados en materia de beneficiarios y perjudicados por la política económica no implican una ruptura con los parámetros previos.

Sostiene Atilio A. Borón¹⁹: “Cuando uno analiza los discursos del presidente Néstor Kirchner, tiene la sensación de que está en Venezuela. Si uno leyera los discursos sin saber de quiénes son, no sabría si quien habla es Hugo Chávez o el propio Kirchner. Hay en ellos una crítica muy fuerte al neoliberalismo, al imperia- lismo, al colonialismo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), a los empresarios...”; y se interroga: “¿Qué reflejo tiene esto en la gestión económica, en el día a día de la práctica concreta del Ministro de Economía, Roberto Lavagna? Y, lamentablemente, constatamos que hay un abismo que separa el discurso del presidente de la práctica concreta que lleva a cabo el Ministro de Economía, que sigue dentro de los carriles del Consenso de Washington”.

Hemos mencionado que existen dos momentos en la aplicación de la política económica. El primer momento remite a la gestión de Roberto Lavagna, quien ocupaba el cargo desde antes de la asunción del gobierno, pues había sido convocado a la función en abril del 2002, fecha coincidente con el cambio de la tendencia recesiva de la economía argentina. Fue uno de los ministros heredados y que daba la nota de continuidad con el turno anterior, aunque Lavagna se desmarcaba de la devaluación producida en enero de 2002. El éxito cosechado por Lavagna devenía de un cambio de los precios relativos que favoreció la producción local, fuertemente afectada por el régimen de convertibilidad que funcionó entre abril de 1991 y la devaluación (pesificación asimétrica). La modificación del tipo de cambio fijo por once años fue el mecanismo principal para iniciar la superación de la recesión y de la explicitada crisis del 2001. El trabajo “sucio” ya había sido realizado, y no era inocuo en términos de impacto social, puesto que se acrecentó en forma muy importante el nivel de la pobreza, el desempleo y la informalidad del mismo.

Ya en el gobierno de Néstor Kirchner se venían constatando trece meses de recuperación de la economía. Lavagna sentía eso como “atributo propio”, y será tema de disputa entre él y el Presidente hasta el momento de su retiro como ministro. Es más: ya lanzado como posible candidato para la renovación presidencial, hace gala de “padre de la recuperación de la economía”, y se permite la crítica a la gestión actual por el abandono de líneas establecidas en su gestión. El tema central de esta etapa será la “estabilización” de las cuentas macroeconómicas, junto al mantenimiento de un tipo de cambio alto con intervención estatal en el mercado de cambios; y la reinserción de la Argentina en el sistema mundial de crédito, para lo

19 Atilio Borón, en Antonio Elías (comp.), *Los gobiernos progresistas en debate. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay*, Clacso e Instituto Cuesta Duarte/PIT CNT, Buenos Aires, 2006.

que había que abandonar la cesación de pagos. Ambos aspectos (estabilización con tipo de cambio alto y reinserción internacional) caracterizan la gestión Lavagna al frente del Ministerio de Economía. Objetivos que fueron logrados y demandaron, según el discurso oficial, una nueva etapa de renovación en el gobierno. Era una conclusión coincidente con la lectura oficial del resultado de las primeras elecciones de renovación legislativa durante la administración Kirchner, en octubre del 2005. El importante triunfo electoral de carácter nacional, según la interpretación oficial, daba por terminada la etapa de gobierno apadrinado por el ex Presidente Duhalde. Kirchner aparecía con poder propio y lo ponía de manifiesto cambiando al ministro del “éxito económico” y demostrando, en la práctica, la paternidad de la recuperación –ya reactivación– de la economía.

Si bien el nuevo cargo era cubierto por Felisa Miceli, una persona de confianza de Lavagna, la lectura de los analistas era que el nuevo ocupante del Palacio de Hacienda era el propio Presidente. Empezaba una nueva etapa que se concentrará en mantener los logros en materia de estabilización e inserción internacional, y en combatir la escalada de precios que crecía con el correr de los meses. Si para el 2003 el crecimiento de los precios minoristas había sido del 3%, al año siguiente alcanzaban un incremento de 6%, y el 2005 cerró con 12,1%, con proyecciones, en esa fecha, del 15 o 16% para el 2006. Se abrió allí una discusión sobre la política antiinflacionaria, quedando Lavagna sosteniendo una propuesta considerada ortodoxa por el gobierno. Eran posiciones más cercanas a las demandadas por la ortodoxia económica, que sustentaba restricciones a la política monetaria y a la demanda de mayores ingresos salariales.

La nueva ministra asumió la misión de la “etapa” ensayando una política de negociación de precios y salarios, que se constituirá en eje central para definir sectores sociales alineados con la perspectiva de alianza social para sustentar la gestión gubernamental. El año 2006 terminó con una inflación menor al 2005, del orden del 9,8% para todo el año, y una tasa de crecimiento del 8,5%, algo menor a 2005. Más allá de quién dirige la política económica, el recambio ministerial aparece exitoso en el control de la evolución de los precios, con iniciativas de concertación de precios que se proyectan para todo el 2007, principalmente en los productos que inciden en el consumo popular. Las distorsiones en el sistema de precios relativos es un fenómeno que se traslada para el futuro, y que puede generar serios problemas en el corto plazo, con un gobierno que aspira a renovar el turno presidencial en las elecciones de octubre del 2007.

c) Normalización del capitalismo local

En la primera etapa se destacan las relaciones con el FMI a los efectos de definir el marco de negociación con los acreedores externos en default. Será una relación de confrontación discursiva y de riguroso pago de los vencimientos, con

ese y con otros organismos internacionales, como el Banco Mundial y el BID. Luego de la cesación de pagos (enero del 2002) se suscribirán acuerdos con el FMI previos a la administración Kirchner (enero '03), y ya con éste en el gobierno habrá un nuevo acuerdo en septiembre del 2003. La relación entre el gobierno y el FMI será una de las claves de la política económica del gobierno en la primera de las etapas que hemos indicado. Durante la gestión Lavagna se cancelarán deudas con los Organismos Financieros Internacionales por 15.000 millones de dólares. Inmediatamente después del cambio ministerial se anuncia la cancelación anticipada de la deuda con el FMI por casi 9.500 millones de dólares, operación concretada en la gestión Miceli en los primeros días del 2006. Fue una política saludada por el ex ministro.

No hay duda de que el tema del endeudamiento público es uno de los grandes condicionantes de la economía argentina en los últimos treinta años, y el volumen de la deuda en cesación de pagos, como la quita resultante hacia el canje de deuda en 2005, es demostrativo de la importancia que el tema tiene. Un dato relevante es que el FMI estaba fuertemente asociado a la estrategia global en curso en Argentina, validando el “modelo” en la Asamblea conjunta del FMI y el BM del '98, invitando al presidente del país para brindar el mensaje y asociar a la Argentina al “deber hacer” por el resto de la comunidad mundial. Argentina era el modelo a imitar. Ante las dificultades manifiestas del 2000, el FMI salió a sostener la política económica con el “blindaje financiero”, una política de crédito a disposición de las autoridades por 40.000 millones de dólares, que fue impulsada durante el 2001 con el desembolso de recursos por el FMI, que postergó el hecho “casi evidente” de la cesación de pagos por venir. Durante el 2001 se realizaron dos operaciones de canje²⁰ de deuda para aliviar plazos de vencimiento de la misma con aval del FMI. Esa asociación del FMI llevó a que la propia Oficina de Evaluación Independiente del FMI estudiara críticamente esa relación y, aún más allá de ello, la comunidad internacional dudó de la efectividad del papel del FMI ante la crisis Argentina y otras concomitantes en un ciclo de crisis entre 1994 (tequila), 1997 (Asia), 1998 (Rusia), 1999 (Brasil) y 2001 (Argentina). Esa crítica instalada globalmente es la base de justificación de las críticas emanadas de la administración Kirchner, quien tiene el mérito de denunciar la corresponsabilidad del organismo en la crisis argentina.

A tal punto se desarrolló la crítica que el FMI fue marginado del debate por el canje de la deuda en default. La política del gobierno significó “denunciar” los

20 Por esta operación existe sentencia en primera instancia para 4 funcionarios públicos, entre ellos el ex Presidente De la Rúa y el ex Ministro Cavallo. El peritaje técnico estimó en más de 40.000 millones de dólares el mayor endeudamiento derivado de esa operación de canje, con un costo en comisiones a los bancos que la realizaron por 1.500.000 dólares; razón por la cual la Justicia también inició una causa judicial.

acuerdos establecidos con el FMI, cancelar en tiempo los vencimientos con éste y otros organismos internacionales, y manejar la relación con los acreedores, tenedores de títulos en default por unos 100.000 millones de dólares, 20.000 de ellos por atrasos que finalmente no se reconocieron. El FMI, por primera vez, no se involucraba en la negociación de la mayor cesación de pagos contemporánea en el mundo. De hecho, se había transformado en acreedor privilegiado, pues cobraba rigurosamente, al mismo tiempo que era dejado de lado al momento de las negociaciones, desoyéndose sus comentarios y consejos en materia de política económica.

En septiembre del 2003 se anuncian en Dubai las características del canje de una deuda elegible de 81.800 millones de dólares, y se desconocían los intereses impagos. Se anunciaba una quita del 75% para la emisión de los nuevos títulos. En junio del 2004, ya en Buenos Aires, se flexibilizará la propuesta, mejorando las condiciones del canje ante la presión internacional. Entre enero y marzo del 2005 se materializará el canje con una elevada aceptación entre los acreedores, del 76,15% de los títulos elegibles. Se retiraron así 62.300 millones de dólares de viejos bonos por nuevos a un valor de 35.300 millones de dólares. Casi 20.000 millones de dólares quedaron sin canjearse, y constituyen una asignatura pendiente que el gobierno por ahora desconoce, aunque en los tribunales estadounidenses ya existen sentencias que obligan a la cancelación al Estado argentino. Del 75% de quita se bajó al 43,39% (Cuadro III). Es una quita considerable, y que fue soportada sin crisis por el sistema financiero mundial, con la aclaración necesaria de que la mitad de los acreedores en default eran inversores argentinos, y que la mitad de ellos –un cuarto del total– eran inversiones generadas por el sistema previsional de capitalización, afectando, por cierto, a los adherentes a ese sistema de pensiones y jubilaciones.

Cuadro III
Canje de Deuda Pública en default

| | |
|---|----------------------------|
| Deuda elegible en default | 81.800 millones de dólares |
| Títulos que continúan en default (1) | 19.500 millones de dólares |
| Títulos en default presentados al canje | 62.300 millones de dólares |
| Nuevos títulos entregados en canje | 35.300 millones de dólares |
| Quita de la deuda | 27.000 millones (43,39 %) |

(1) El gobierno no los reconoce y existe una fuerte presión internacional para una nueva propuesta de reestructuración. Fuente: Ministerio de Economía. www.mecon.gov.ar

Un dato curioso es que la política argentina de no involucrar al FMI en la negociación fue coincidente con la nueva actitud asumida por los republicanos en el gobierno de EEUU, que modificaron la forma de intervención del organismo ante las crisis financieras, retirando los apoyos que se sostuvieron en la gestión

anterior. De hecho, más allá de las voluntades coincidentes –si las hubo–, EEUU avaló la política de negociación encarada por la Argentina y que no afectaba principalmente a acreedores de ese país de origen.

El año de la asunción de Kirchner había sido previsto para realizar en Argentina la IV Cumbre de Presidentes de las Américas²¹, y continuar con el cronograma hacia el establecimiento del ALCA en el 2005. El discurso presidencial privilegió, desde el primer momento, las relaciones con los vecinos, especialmente con el MERCOSUR y su socio mayor, Brasil. El dato interesante era la convergencia de dos nuevos presidentes en el gobierno de Brasil y Argentina para ese año, desde enero Lula y desde mayo Kirchner. La cotización en dólares de las respectivas monedas era convergente, y se presagiaba, por los discursos de ambos, la potencialidad de profundizar la integración regional. Es un tema que se fue diluyendo con el transcurrir del tiempo, con Brasil más proclive a sustentar las recomendaciones del FMI en materia cambiaria y con Argentina más orientada a sostener un tipo de cambio elevado para privilegiar el crecimiento de la producción local. El comercio bilateral se deterioró, profundizando la dependencia argentina de las importaciones de bienes de capital originados en Brasil. Si bien Argentina diversificó sus relaciones comerciales en el período, se destaca la pérdida relativa de las relaciones con los países limítrofes.

Producto de la crisis en la Argentina, la reunión de Presidentes americanos que estaba prevista realizarse en el 2003, se terminó realizando en noviembre del 2005 en la ciudad de Mar del Plata. Allí también funcionó una Cumbre de los Pueblos organizada por la campaña continental de lucha contra el ALCA. En la reunión de los Presidentes el ALCA no figuraba en la agenda de discusión, y la insistencia de la diplomacia de EEUU y algunos de sus aliados por incorporar el tema motivó una votación dividida, en la que el MERCOSUR y Venezuela expresaron la posición contraria por avanzar en el tema ALCA sin antes discutir la baja de subsidios agrícolas, en tratamiento en la OMC. Quince días después, en Hong Kong, Brasil y Argentina flexibilizaron la posición para facilitar un acuerdo y documento final en el cónclave de la OMC.

La política exterior de la Argentina en materia económica ha tenido varias aristas, que pueden sintetizarse en el mejoramiento de las relaciones con las grandes potencias, especialmente luego del canje de títulos de la deuda pública en default. Las relaciones con EEUU fueron de empatía y coincidencia con relación al tratamiento de la deuda, y especialmente en la disputa discursiva con el FMI. Con Europa fueron creciendo, aunque con conflictos con las empresas privatizadas de servicios públicos, las que interpusieron demandas contra el gobierno argentino ante el

21 La primera fue en Miami, EEUU, en 1994; la segunda en Santiago de Chile, en 1998; la tercera en Québec, Canadá, en 2001.

CIADI por 16.000 millones de dólares, de los cuales ya existe sentencia por unos 400 millones que la Argentina está recusando, aunque comprometiéndose al pago si el segundo fallo fuera coincidente con el primero. El motivo de las demandas era el cambio de las reglas de juego, pues la devaluación modificaba once años de convertibilidad, en los que la facturación en pesos favorecía una transferencia de utilidades al exterior en divisas equivalentes (un dólar igual a un peso), y bajo las nuevas condiciones esa facturación debía triplicarse en pesos para mantener el mismo nivel de rentabilidad en divisas. De un comienzo conflictivo, especialmente en las entrevistas del presidente Kirchner con esos empresarios, en España y Francia específicamente, se pasó a una relación más aceiteada producto de la mejora en la rentabilidad, en algunos casos sostenidas con subsidios oficiales, para demorar incrementos de tarifas. Pese a las mejoras, las demandas, en muchos casos, siguen en pie.

Resulta más complejo analizar las relaciones en la región, especialmente con Brasil y el Uruguay. Con este último se llegó a instalar una demanda en los tribunales de La Haya, con resultados negativos para la Argentina. El tema del conflicto se deriva de inversiones de dos plantas productoras de pasta de papel en la costa compartida del Río Uruguay. Con Brasil los conflictos remiten a cuotas de comercio y, en rigor, a políticas macroeconómicas no convergentes, diluyendo la potencialidad de proyectos comunes de desarrollo y asociación virtuosa para una estrategia compartida. La novedad vino más allá del MERCOSUR, y se debe al ingreso de Venezuela. Las relaciones entre Buenos Aires y Caracas se potenciaron, especialmente en temas económicos. Venezuela es actualmente el prestamista internacional que tiene la Argentina, más allá de los organismos internacionales, con compras de títulos en los últimos dos años por 2.800 millones de dólares, y se encara una licitación de títulos (Bono del Sur) en el mundo, a suscribir por Venezuela y con destino a la Argentina, por la mejor tasa que obtiene un país avalado con crecientes ingresos derivados del aumento del precio del petróleo. Ese Bono del Sur puede ser el inicio de una renovada expectativa por un Banco del Sur y otros mecanismos de relanzamiento de la integración regional, fortalecido con la reciente incorporación de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR. Este acercamiento al gobierno de Chávez ha sido fuertemente criticado por Roberto Lavagna²² (luego de su salida del ministerio) y diversas expresiones de las clases dominantes, al tiempo que constituye parte inescindible del actual momento de la economía en Argentina, tanto por sus necesidades financieras como energéticas.

Este privilegio a las relaciones con el mercado mundial, tanto por el “arreglo” de la deuda en cesación de pagos como por los vínculos comerciales y la política de seducción de inversiones, se explica por el peso dominante de las Corporaciones

22 Diario Clarín del 6/05/06.

Transnacionales (CTN) en la Argentina, las que potenciaron su papel de dominación en la estructura económica en la década del '90. Para el año 2000²³, sobre las 500 más grandes empresas en la Argentina, 258 (51,6%) eran extranjeras, y 56 (11,2%) eran asociaciones entre empresas de capital local y externo, totalizando el 62,8% bajo el dominio del capital foráneo. Ese conjunto participa del 79,5% de la producción total de esas 500 empresas, y del 94,2% de las utilidades. Son el 98,1% de la producción en Minas y canteras, el 83,6% de la industria manufacturera, el 81,9% de electricidad, gas y agua, el 92% de comunicaciones, y el 57,4% del resto de las actividades que actúan en la construcción, comercio y transporte. En un breve racconto histórico de ese proceso y de la disputa entre CTN de EEUU y Europa, puede sintetizarse que, al comienzo de las privatizaciones en la década del '90, los capitales europeos aventajaban a los de EEUU en la apropiación y concesiones de empresas y negocios del Estado argentino. Desde 1993, con la privatización de YPF, hecha a medida por Cavallo y Menem, los capitales originarios de los Estados Unidos acapararon el 47% de los desembolsos, seguidos en segundo término por España y Chile con el 11% cada uno, más 8% de Italia, Francia y Gran Bretaña, respectivamente. EEUU 47%, contra un 35% de la suma de esos países de Europa. Para 1999 la proporción había variado: 33% para empresas originarias de EEUU, 17% de España, 15% de Chile, Francia e Italia con 10%. Esos países europeos suman 37%, contra el 33% de EEUU. Ese mismo año, Repsol compra YPF y adquiere las acciones remanentes en manos del Estado. La situación quedó así a comienzos del 2000: 42% en manos del capital externo proveniente de España, 26% de EEUU, 10% de Chile, 7% de Francia y 6% de Italia; con lo que Europa más que duplicaba a EEUU en la batalla por las privatizaciones que había ganado Europa.²⁴ La CEPAL²⁵ informa que entre 1992 y el 2000, la Inversión Extranjera Directa de la Unión Europea alcanzaba al 59,9%, contra el 25,3% de EEUU. No hay duda, entonces, sobre la ventaja, en los años '90, de los capitales europeos sobre los estadounidenses en la apropiación de medios de producción para la disputa del plusvalor generado en la Argentina. El default decretado en la crisis de fines del 2001 afectó, entre los inversores externos, principalmente a europeos y japoneses. La "normalización" capitalista, organizada por Duhalde primero y luego por Kirchner, incluyó recomponer relaciones con el capitalismo desarrollado, especialmente con EEUU.

23 Briner, María Agustina y Schorr, Martín, *Principales características e impactos de la "extranjerización" reciente de la economía argentina. Un análisis del desempeño de las grandes empresas transnacionales durante la década de los noventa*, Revista Realidad Económica n° 189, del 1 de julio al 15 de agosto de 2002. Buenos Aires, Argentina

24 Campione, Daniel y Gambina, Julio C., *Los años de Menem. Cirugía mayor*. Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2003.

25 La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2001. Tomado del sitio en Internet de la CEPAL.

La administración Bush favoreció la política de “arreglo” de la deuda pública, aún con las diatribas discursivas contra el FMI. Con la normalización de un “capitalismo serio” se busca atraer inversores, los que se buscaron en mayo pasado en Viena (Cumbre Europa y América Latina), y en septiembre en EEUU, convalidando un tipo de inserción de la economía local en el sistema mundial, profundizando el papel de las inversiones externas y la dependencia económica y política.

IV. A modo de conclusión

A diez años del consenso menemista, expresión del momento de mayor ofensiva del proyecto liberalizador global, emerge un nuevo consenso capitalista detrás del gobierno kirchnerista. Nuestra hipótesis conclusiva se asienta en los cambios de época que median en estos diez años. La ofensiva del capital encuentra ahora resistencias, especialmente en la región latinoamericana, que habilitan expectativas de cambios importantes. No es menor mencionar la perspectiva socialista sustentada desde Caracas, que, aún remitiendo al discurso, supone la reinstalación de un debate extirpado de la mano del terrorismo de Estado. Es una propuesta emergente en el marco de una creciente lucha popular, que pone en cuestión el rumbo de la región y legítima nuevamente la posibilidad del socialismo.

El ciclo de luchas en la Argentina, que llevó a las jornadas de diciembre del 2001, nos hace pensar en un fin de la resistencia defensiva y la potencialidad de la construcción de alternativa política para no solo ir contra el discurso hegemónico de hace una década, sino por instalar una posibilidad política de transformación. Pero somos conscientes de que la posibilidad no alcanza y que la tarea intelectual y práctica demanda su materialización. Ese es el desafío para las clases subalternas en este tiempo, y allí debe ubicarse el lugar de aquellos que seguimos reivindicando la necesidad de estudiar y conocer el mundo para transformarlo, tal como en su momento nos convocó Carlos Marx.

Buenos Aires, marzo de 2007

A DIEZ AÑOS (¿DE QUÉ?)

*Beatriz Rajland**

Introducción

Una mirada de los últimos diez años, dirigida al nivel de movilizaciones, resistencia y lucha, planteada en apretada síntesis, nos lleva, sin ninguna duda, a detenernos en las experiencias vividas en diciembre de 2001, y en su profundo significado y proyección.

Diciembre de 2001 representó un punto de inflexión indiscutido, la expresión de una resistencia popular convertida en ofensiva. Los millares de personas que salieron a las calles se pronunciaron inequívocamente por el rechazo a las prácticas de la política hegemónica, culminando una etapa del amplio y profundo proceso de *deslegitimación socio-institucional generalizada*.

El resultado fáctico se tradujo en el repudio y “renuncia-huída” del Presidente Fernando de la Rúa.

No fue una manifestación espontánea, como algunos analistas o comentaristas afirmaran entusiastamente, sino con cierto grado de espontaneísmo, porque, en realidad, fue parte de la eclosión de las tensiones y las luchas de resistencia, acumuladas en el contexto socio-económico-político de las consecuencias de la aplicación de los programas neoliberales en la Argentina, particularmente –pero no sólo– del período de la década de los ‘90.

Decimos particularmente, pero no sólo en los ‘90, ya que, como es sabido, la

* Profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP), Argentina.

estrategia del bloque dominante de implementación del modelo de acumulación neoliberal constituyó la base político-económica del golpe cívico-militar genocida del '76.

Dicho modelo de acumulación se continuó con los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín –tras el breve interregno de Bernardo Grinspun–, y fue especialmente profundizado por el presidente Carlos Menem en los '90, no habiendo habido cambios con el gobierno de De la Rúa, ni –con respecto a su base sustancial– con los posteriores, hasta la actualidad.

Ello a pesar de la retórica empleada por el presidente Kirchner contra el neoliberalismo, la que es hoy común a todos los espacios económicos y políticos. Lamentablemente, los cambios que se registran –que los hay– son cosméticos para la profundidad de la situación socio-económica, ya que no encaran el problema fundamental de la desigualdad.

La proyección

La experiencia, los reclamos, la lucha de las jornadas de diciembre de 2001, no alcanzaron para producir los cambios necesarios para terminar con el neoliberalismo, fundamentalmente por imperio de sus propias limitaciones –la principal de las cuales fue la de no haberse plasmado en alternativa política.

No obstante, la fuerza de su significado se proyectó hasta la actualidad, determinando procederes y conductas al interior tanto del bloque dominante como en cuanto a los sectores subalternos¹, y signando –sin duda hasta hoy– escenario, acciones y discursos sociales y políticos en la Argentina.

Un poco de historia reciente

Desde la asunción del primer gobierno constitucional después de la dictadura, o sea, a fines de 1983, y en adelante, con los sucesivos gobiernos, también constitucionales, hubo una sistemática apropiación del consenso del pueblo por parte de los gobernantes, puesto que –también sistemáticamente– incumplieron sus promesas y violaron la confianza en ellos depositada, todo lo cual condujo a una profunda crisis de representación política o, en verdad, a la acentuación de la crisis política o crisis del sistema de dominación en la Argentina.

1 Imposible pensar que cualquiera que hubiera resultado electo presidente en 2003 pudiera ignorar el 2001.

Las elecciones a diputados nacionales del 14 de octubre de 2001 ya constituyeron un fuerte rechazo a la política tradicional, que se expresó en un alto porcentaje de votos en blanco, nulos o directamente en la no concurrencia a votar. Esas elecciones fueron la manifestación institucional más relevante de la aludida crisis de representación política en el país. A ellas le siguió la eclosión política, pero ya no sólo institucional, que significaron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de ese mismo año.

Para esa época ya se registraban signos de que las luchas y resistencias del movimiento social en nuestro país no estaban aisladas, sino que eran parte de la ola de crecimiento de las mismas en toda América Latina².

De las Jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 emergieron y/o se potenciaron formas organizativas y de lucha novedosas que enriquecieron particularmente el movimiento social desarrollado en la década.

La característica general de lucha pasaba hasta el 2001 por la resistencia a la aplicación de los programas neoliberales, que fueron de especial “*cumplimiento*” en la Argentina, país que se convirtió tristemente en “*modelo*” y “*ejemplo*” de la implementación de las políticas diseñadas y aprobadas en el “*Consenso de Washington*”, ejecutadas a través de los organismos financieros internacionales.

En 2001, a la resistencia se une la práctica de la lucha por combatir esos programas y las consecuencias directas de hambre, miseria, desocupación.

“... fueron surgiendo nuevas expresiones políticas relacionadas con los sectores sociales (mayoritarios) que padecieron más severamente los efectos de estas políticas y crisis combinadas, que se fueron expandiendo y consolidando”³.

Se avanza en la conformación de variadas identidades y representaciones sociales⁴, en un camino no lineal, con avances y retrocesos, que más tarde va a mostrar también fragmentaciones y cooptaciones varias desde el aparato estatal.

Los nuevos emergentes sociales, ante la gravedad de la situación económico-social, frecuentemente tenían claridad en cuanto a contra qué luchaban, pero no la

2 Recordemos, como un primer impulso respecto al desarrollo de las luchas en América Latina, la aparición del movimiento zapatista el 1º de enero de 1994.

3 Ainstein, Luis; Pastrana, Ernesto; Rajland, Beatriz y Scheinsohn, Mariano (2005): “*Construyendo desde un movimiento social: la autogestión de grandes emprendimientos*” (www.naerus.net/sat/workshops/2005/papers.htm). Editado por el Dipartimento di Pianificazione, Università IUAV, Venecia, Italia, 2006.

4 Movimiento de asambleas barriales, movimientos “*piqueteros*”, de trabajadores desocupados, aumento de las denominadas “*fábricas recuperadas*”, institucionalización social de los “*cartoneros*” o “*recicladores*”.

alternativa a construir. Se fueron constituyendo o fortaleciendo en la lucha. Los trabajadores desocupados, las capas medias, los sectores “empobrecidos” del trabajo, “sintieron”, en carne propia, que el programa neoliberal había destruido el aparato productivo nacional, mientras que algunos fueron más allá, visualizando que el neoliberalismo es en realidad un modelo del sistema capitalista, o sea, que es el capitalismo en sí, y no meramente un modelo de capitalismo, el que –en un todo acorde con su esencia– generó esa miseria y destrucción en beneficio de elevar su tasa de ganancia, centralizando y concentrando cada vez más profundamente el capital, y naturalizando la desigualdad social⁵.

El poder político en ejercicio “aseguró” la implementación de los planes económicos programados, diseñados desde el centro hacia las periferias, pero aplicados por los que en la periferia justamente son los titulares del poder político. ¡Nunca estuvo tan clara la correspondencia entre lo económico y lo político!

La experiencia

Desarrollaremos aspectos del proceso que algunas de esas organizaciones – particularmente las de los “piqueteros” – han transitado desde el 2001, para ubicarnos en el panorama actual.

En un contexto de alto grado de fragmentación de las organizaciones, se puede hablar del “éxito” parcial de las políticas “desde arriba” –por lo menos respecto de algunos sectores del movimiento social– tendientes a desarmar la movilización popular, especialmente por medio de mecanismos de cooptación (sea por medio de instrumentos de asistencia social, o por la colocación de algunos dirigentes en puestos estatales, o por la combinación de estos con conformidades básicas de tipo ideológico-político por parte de las organizaciones “cooptadas”).

Pero también se han registrado otras experiencias que evolucionaron del mero reclamo de subsidios a la promoción de iniciativas de desarrollo de “trabajo genuino”, lo que ayudó a neutralizar el componente “clientelista” y el asistencialismo tradicional de la política hegemónica.

Esto abrió mayores posibilidades a la convergencia de ese sector de trabajadores desocupados con las luchas de los trabajadores ocupados.

5 Rajland, Beatriz (2004): “Nuevos emergentes sociales. De luchadores a ‘criminalizados’, en Reforma del Estado-Reforma de la Justicia: ¿De qué reforma hablamos? Buenos Aires, Universidad de Quilmes, en prensa.

Antecedentes y consecuentes.

Si es verdad que los hechos sociales no son fruto de la generación espontánea sino resultados de acumulación que por momentos se van transformando en saltos cualitativos, también acumulativos, es importante rastrear en los antecedentes que es necesario reconocer como parte del proceso que tuvo eclosión en diciembre de 2001. Incluso las formas de organización que emergieron no fueron inéditas, tanto dentro de la historia del movimiento social y político de Argentina como de otras partes del mundo. Ello no significa ignorar las particularidades, sino, por el contrario, reforzarlas por su inclusión dentro de una historia más extensa.

En tal sentido, las particularidades que se observan en las luchas de resistencia y organización de las demandas sociales a comienzos de la década del '80, generalizadas y en algunos casos consolidadas en el período que va de mediados a fines de los años '90, refieren al carácter "territorializado" que asumen las formas de efectuarse los reclamos.

Ello es así porque los conflictos sociales tendieron a producirse y manifestarse, preponderantemente, en ámbitos como el territorio, donde aun se podían encontrar espacios de negociación, conflicto y socialización, francamente debilitados, en cambio, en lo concerniente a lo sindical.

Para estas consideraciones es importante tener en cuenta el alto grado de desocupación de los trabajadores formales que dejó como saldo el modelo neoliberal, verdadero tendal de víctimas del proceso de desindustrialización creciente iniciado en los años '70 –especialmente bajo la dictadura cívico-militar–, que fueron no sólo los desocupados fabriles sino también la clase media, fundamentalmente la clase media baja, empobrecida como consecuencia de esas políticas. También hay que tener en cuenta el impacto de la llamada flexibilización laboral, y el desarrollo de importantes ámbitos de trabajo precario.

Los despidos tuvieron un efecto dominó, avanzando hacia la mayor flexibilización y precarización del trabajo a lo largo de todos los '90. Se aplicaron nuevas formas de contratación (por ejemplo, los contratos de "prestación de servicios" y la terciarización), desvinculando a los que *trabajaban* de la sindicalización, en un proceso tan acelerado como el del continuado recorte de los derechos y la seguridad social, que habían sido conquistados en largos años de lucha.

"...estas transformaciones, operadas en un contexto de ajuste del gasto público y de desindustrialización, aceleraron notablemente el proceso de quiebre del poder sindical, reorientando sus fines y limitando su peso específico dentro de la sociedad, y acentuaron el proceso de territorialización de las

clases populares, visible en el empobrecimiento y la tendencia a la segregación socio-espacial”⁶

El antecedente directo de las formas de lucha que podemos visualizar en los ’90, en relación con las particularidades ya señaladas, han sido las ocupaciones de tierras urbanas en la periferia de Buenos Aires, asumidas en la forma de *asentamientos* a comienzos de la década del ’80, en plena dictadura militar⁷.

Esas luchas tuvieron en común que interpelaban –en muchos casos aun no siendo concientes de ello– la propiedad privada de la tierra y el difícil acceso a su uso, al mismo tiempo que organizaban parte de la vida del barrio alrededor de la defensa y reivindicación de servicios básicos (que va a tener su expresión máxima en los *tarifazos* y los *impuestazos*⁸). Estas experiencias van a constituirse en parte de la historia de las luchas territoriales.

Los protagonistas de esas acciones conformaron, especialmente después de 2001, y en buena medida, distintas vertientes –en cuanto a sus componentes– de los más tarde constituidos como “piqueteros”.

Pero a nuestro juicio, la vertiente que en realidad da origen a la forma de lucha “piquetera” propiamente dicha (nos referimos a la de los cortes de rutas) es la que tuvo su expresión a partir de las protestas, movilizaciones y luchas de los trabajadores despedidos de una de las empresas claves del Estado, como lo fue YPF (petróleo). Esos despidos eran parte de la política de privatizaciones que en forma acelerada afectó al conjunto de empresas públicas estatales que produjo esas consecuencias en los años ’90.

Ya desde 1996-97, en Cutral-Co y Plaza Huincul, las carreteras se habían comenzado a convertir en ámbito legítimo de denuncia y lucha, de resistencia y conquista. Esas formas de protesta, adoptadas luego por buena parte de los desocupados, tanto los recientes (de los ’90) como los ya francamente estructurales (los de los ’70), se extendieron, abarcando también las calles, el ámbito urbano⁹.

6 Svampa, Maristella (2005): *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Taurus, Buenos Aires.

7 Clichevsky, N. (1990) *Loteos populares, sector inmobiliario y gestión local en Buenos Aires* (CEUR-CREDAL, Buenos Aires). CTA, página Web, link historia. Izaguirre, Inés y otra (1991): *Las tomas de tierras en la zona Sur del Gran Buenos Aires*, CEAL, Buenos Aires.

8 Vinculados a los aumentos de tarifas e impuestos.

9 “El ‘piquete’, entonces, se va constituyendo, en todos estos años, como la manera en que se efectiviza la construcción social de una modalidad de intervención y socialización política de los sectores sociales marginados de los espacios tradicionales de mediación con el Estado” (Ainstein y otros: 2005).

De consignas y posicionamientos

Las consignas de “autonomía” y “horizontalidad”, enarboladas por la mayor parte de las “nuevas” expresiones del movimiento social, pero también por algunas de las que ya existían, fueron la característica común más señalada hacia el 2001. Se intentaba hacer frente, con ellas, a las más que habituales prácticas clientelísticas y punteriles de la política hegemónica.

Fue una expresión de la generalización del rechazo profundo por lo así denominado como “lo político”, en beneficio de mistificar como un absoluto el valor de lo “social”¹⁰.

Decimos mistificar porque todos los “buenos” valores se fueron atribuyendo al “movimiento social”, y la absolutización de esta concepción privaba al análisis de reflexión crítica y de perspectiva de construcción realmente alternativa en la conjunción ineludible de lo social y lo político, sin la cual no existe posibilidad de futuro teórico y político, siendo, además, desde lo propiamente conceptual, totalmente inadecuada esa dicotomía¹¹.

Por otra parte, resulta básica la consideración de que todo lo que refiere a los seres humanos es social, dado que somos un conjunto de relaciones sociales. Cuando en el análisis se separa lo social y lo político, sólo es por razones de construcción de movimientos, porque lo político está, en líneas generales, relacionado con la esfera del poder estatal, y lo llamado “social” con reivindicaciones más específicas. Sin embargo, lo político sólo se organiza desde lo social en el sentido de pertenencia de los sujetos al campo de las relaciones sociales, y lo social, en cuanto a sociedad, deviene en político por la índole de horizonte de poder que se va formulando. Si todo el movimiento llamado social permaneciera exclusivamente en esas reivindicaciones y no se organizara y proyectara hacia el poder político, hacia su construcción alternativa, los alcances de su lucha quedarían limitados, por fuera del poder político.

Es así que, partiendo de una premisa crítica absolutamente justa y justificada, aquellos principios de “autonomía” y “horizontalidad”, sostenidos a ultranza, llevaron muchas veces a traducirse en apartamiento del conjunto social, de la construcción común de alternativas y de la idea de “lucha por el poder político”, restrin-

10 En realidad, esta aparente dicotomía está sostenida en la propia ideología del poder dominante que tiende a “legitimar” lo “social” (aunque tampoco siempre) y deslegitimar lo “político”, en tanto y en cuanto se trate de luchas contrahegemónicas, a las que le reserva la calificación de “manipulación de dirigentes”. En esta misma línea ver: Mazzeo: 2004.

11 Marx señala, en *La Miseria de la Filosofía*, que no existe lo social sin lo político, así como tampoco lo político sin lo social.

giendo el espectro de posible expansión y de articulación de lo económico-social-reivindicativo con lo político o la lucha política conciente, sin perjuicio de que, no obstante, con el desarrollo de esas “nuevas expresiones del movimiento social”, se hubiera avanzado en términos de formación de conciencia colectiva¹².

Hacia mediados de 2002 comienza un reflujo respecto al nivel de movilización que tuvo su expresión más alta, como ya vimos, en 2001. Se registró, por un lado, cierto agotamiento respecto al estilo de movilización permanente en la calle con un desgaste lógico e inevitable. Transcurrida la primera etapa, luego de diciembre de 2001, pareciera que habría que haber combinado esa estrategia (se hizo, pero no en la medida quizás necesaria) con otro tipo de construcción del movimiento (que algunas organizaciones asumieron), o sea, que había que redefinir el curso de acción permanentemente. Pero, por otro lado, también formaron parte del reflujo las maniobras de cooptación oficial, lo que no significa que se opacara la resistencia desplegada.

Los “piqueteros”¹³ constituyeron, especialmente hasta 2003, la parte más activa y de mayor visibilidad de expresión de la lucha en las calles. Esa experiencia contribuyó a crear conciencia, en algunos sectores, de que ser desocupado no hace perder la calidad de ser trabajador, con todo lo que ello implica.

En casi todas las organizaciones “piqueteras” la táctica empleada ha sido similar y de doble acción: por un lado, de diferentes formas y distintos abordajes, producir posibilidades de trabajo, vía la promoción y organización de emprendimientos o micro-emprendimientos, y, al mismo tiempo, exigir a las instituciones del Estado la asistencia mínima y el aumento de su monto, que, aunque se sabe que está implementada con carácter clientelista desde el poder¹⁴ —medrando con las necesi-

12 (Rajland: 2007)

13 Construcción social compleja en su composición, aunque de fuerte índole territorial.

14 Los subsidios asistenciales, cualquiera sea su denominación, se llamen Planes Trabajar o Jefes y Jefas de Hogar, fueron implementados —como es sabido— con carácter político-clientelista desde el poder (hay que tener en cuenta que se llegaron a distribuir casi 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar; sin duda, la mayor inversión de este tipo de planes sociales en América Latina). Se programaron por los sucesivos gobiernos constitucionales para evitar que se desencadenaran conflictos sociales difíciles de encauzar por los sectores dominantes, en especial después de las jornadas de lucha del 19 y 20 de diciembre de 2001, y de la escasa legitimidad del presidente Duhalde, y luego de los bajos guarismos electorales con los que asumiera el presidente Kirchner. “... la única política sistemática del Estado nacional para hacer frente a la progresiva crisis de empleo fue el lanzamiento, en 1996, del Plan Trabajar, (...) 2002, Plan Jefes y Jefas de Hogar (...) marcada ambigüedad al no constituir ni un seguro de desempleo, ni una política asistencial, ni una política de reinserción laboral, sino todas esas características a la vez. Los “planes” (subsidios) y la asistencia alimentaria fueron el núcleo de la política de contención del gobierno y se convirtieron, con el correr de los años, en el centro de la negociación con las organizaciones para poner fin a los cortes de ruta”. (Svampa: 2005; 244).

dades de sobrevivencia que apenas son cubiertas al más mínimo nivel–, resultan imprescindibles para las familias en situación de desocupación.

Es importante consignar, en relación con esta práctica asistencial, que, a lo largo de estos años, varios movimientos de desocupados consiguieron, en un momento, cambiarlas en su contenido desde lo simbólico-social, neutralizando el componente “clientelista”, y con ello el “punteril” y el de asistencialismo tradicional, impulsando la generación de mecanismos de solidaridad y producción, bien sea de valores de uso para los propios grupos de desempleados como también de emprendimientos de mayor aliento.

Pero esta acción, al estar profundamente unida con la transformación en verdadero “culto” de los principios de autonomía y horizontalidad reivindicados en el sentido más arriba indicado, y en nombre del ejercicio de una más pura democracia, conseguía, paradójicamente, convertirla en un democratismo altamente sectorial, local, micro, desarticulado políticamente.

Los movimientos “piqueteros”, de esa manera, no pudieron eludir la fragmentación de las organizaciones, impulsada por propios y por ajenos, que llega hoy a su más alto grado. Algunos, como ya señalamos, fueron objeto de cooptación por parte del poder político –en aplicación de la estrategia explicitada por el presidente Kirchner desde su campaña electoral, que consistía en dividir el movimiento en “los duros” y “los blandos”, tratando de aislar a los primeros y de asimilar a los segundos–, para lo que jugó un papel significativo la implementación de los mecanismos de asistencia social antes aludidos, los que, aunque focalizados y limitados¹⁵, resultaron eficaces en lo inmediato, a lo que se sumó, con el gobierno actual, la colocación de algunos dirigentes en puestos estatales. Al mismo tiempo, y eligiendo otro camino, otras organizaciones del mismo carácter fueron evolucionando desde el mero reclamo de subsidios a la promoción de iniciativas de desarrollo de “trabajo digno” y/o “genuino”, frecuentemente de tipo cooperativo, de criterio solidario, desarrollando una autonomía organizativa positiva respecto del Estado.

Cuando se conformaron los primeros Movimientos de Trabajadores Desocupados, esta calidad –la de ser trabajadores desocupados– constituía su principal característica. La situación de crisis profunda, económica y social, producto de los '90, territorializó estas organizaciones, al confluir en ellas diversas corrientes sociales, que incluyeron a los desocupados mal denominados “estructurales” sin otro lugar de inserción colectiva que el territorio, así como a distintas variantes de movimientos sociales barriales.

Se desarrolló, en la acción, la solidaridad entre los sectores diferenciados de la clase subalterna, eliminando las barreras entre el “que trabaja” y el “que no traba-

15 Nos referimos a los magros subsidios de \$150 (50 dólares) o a las bolsas de alimentos.

ja”, ya que el “conseguir” trabajo o el no ser despedido pasó a ser parte de una coyuntura socio-económica estructural y no de una volición (manipulación ideológica que naturaliza el sentido común que afirma que “no trabaja el que no quiere” y que, paradójicamente, y pese a la experiencia de los últimos años, se sigue utilizando); es decir, todos los que trabajaban podían ser eventualmente “desocupados” en una proporción geoméricamente mayor que la que se hubiera experimentado hasta los '90.

Hoy hay una desarticulación del movimiento piquetero, cuyas causas son complejas. Entre ellas, la fragmentación, la manipulación desde la clase dominante (clientelismo, cooptación, planes de subsistencia que comprenden micro-empresendimientos) y la “onda” de crecimiento económico de los últimos años, que, aunque no se traduzca en redistribución del producto social, impacta en los guarismos de la desocupación, haciéndolos disminuir relativamente.

Esto se traduce prácticamente en el hecho de que, comúnmente, cuando se logra conseguir trabajo, se abandona el movimiento piquetero.

Hemos dicho ya que durante el año 2002 los piqueteros fueron la fuerza más activa de la lucha popular, particularmente la más visible, la que puso la calle en la vidriera, de forma diferente a otras anteriores, como espacio público expropiado/apropiado y no reservado prioritariamente sólo a los peatones, demostrando que la lucha también se instala cotidianamente en ella¹⁶.

Esta particularidad es quizás uno de los logros más importantes de esos años, y aun –de algún modo– continúa siéndolo. Podríamos decir que resignificaron la plaza y la vía pública, calles o rutas¹⁷.

Los trabajadores: ocupados y desocupados

Hemos señalado, en este trabajo, al referirnos al contexto, la importancia de la posibilidad de convergencia de los sectores de trabajadores “desocupados” con los trabajadores “ocupados”.

Por eso nos referiremos brevemente al movimiento obrero organizado en estos años, que analizamos.

Como nuestro interés se focaliza en esa especial relación entre trabajadores ocupados y desocupados, no nos ocuparemos de la CGT oficial u oficialista, la que,

16 No olvidemos que, a mitad del 2002, se asesinan a dos jóvenes que formaban parte del movimiento piquetero en la Provincia de Buenos Aires: Kostecky y Santillán, lo cual acelera el llamado a elecciones nacionales por parte del Pte. Duhalde.

17 Rajland, Beatriz (2006): “Articular lo social y lo político resulta hoy imprescindible”, en *Seminario Redem 2006-Fisyp- Fundación Rosa Luxemburgo*. Buenos Aires, FISYP.

a pesar de los cambios de Secretario General, ha permanecido fiel a sí misma, es decir, pro patronal, “amarilla”.

En cambio, es ineludible, al ocuparnos de la última década, hablar del proyecto de organización del movimiento obrero alternativo, que fructificó en los '90 en la creación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) –entidad que aun está persiguiendo su reconocimiento oficial con el otorgamiento de la personería jurídica– y que se constituyó, superando el paradigma de los '50 acerca de la necesidad de un movimiento obrero unificado, en una central de trabajadores, paradigma que sucumbió ante la realidad y la práctica concretas de la conducción de la CGT que impedía sistemáticamente la mera posibilidad de que fuerzas alternativas llegaran a puestos de dirección, a través de una red perversa de normatividades electorales y reglamentarias, dirigidas a perpetuar sólo una línea, la de la complicidad con la patronal, las prebendas, las obras sociales, el paternalismo y el autoritarismo.

Justamente, una de las particularidades de la CTA ha sido la de la afiliación y ejercicio del voto en forma directa, los debates de articulación con intelectuales y con políticos, a partir del funcionamiento de espacios de discusión de la coyuntura y de centros de estudios sindicales. También, otra de las particularidades, especialmente visualizada cuando se intensificó la política que provocó la masiva desocupación, fue la de incorporar a desocupados en su carácter genérico de trabajadores¹⁸.

Haremos una apretada síntesis de las cuestiones más relevantes propuestas y realizadas a partir o con la CTA.

En 1998 se realiza el Primer Encuentro Nacional por un Nuevo pensamiento en la Argentina, al calor del debate sobre el punto principal de la convocatoria: “Trabajo y Política”, y con la participación de cientos de personas de distintos ámbitos y pertenencias.

1999, año de las elecciones presidenciales en las que se impone Fernando de la Rúa. La CTA celebra su Segundo Congreso Nacional de Delegados, con la participación de 8.352 congresales, que ratifican la autonomía de la Central, definen la consigna Trabajo para Todos y se comprometen a construir más fuerza propia para luchar con el modelo económico neoliberal imperante. Tiene lugar la iniciativa de la “carpa blanca” organizada por los maestros de la CTERA para la visibilización de su lucha.

También en 1999 se realiza el Segundo Encuentro Nacional por un Nuevo pensamiento en la Argentina, que aborda la temática del Estado en confrontación con las políticas neoliberales.

Es en el año 2000 cuando la CTA lanza su propuesta del “seguro de empleo y formación”, consistente en una suma para los jefes o jefas de familia desocupados,

18 Mientras que en la CGT los trabajadores, a partir de sus despidos, perdían su pertenencia sindicalizada.

más una asignación familiar por hijo. La suma debe llegar a la que se corresponde con la línea de pobreza. El objetivo fue: “ningún hogar en la Argentina por debajo de la línea de pobreza”.

La propuesta no queda en el ámbito de la CTA solamente, sino que ésta convoca a distintas organizaciones, sindicales, políticas, culturales, de DDHH, etc., de lo cual resulta la formación del FRENAPPO, que se abocará rápidamente a la organización de una consulta popular en torno a la propuesta señalada.

En el mismo año 2000 se realiza, del 26 de julio al 9 de agosto, la Marcha Grande de Rosario a Buenos Aires (al Congreso), caminando por los pueblos, manifestando para que no haya hogares argentinos por debajo de la línea de pobreza. Al llegar al Congreso, se presenta la propuesta del Seguro de Empleo, formación y asignación por hijo.

Se realiza, además, el Tercer Encuentro Nacional por un Nuevo pensamiento en la Argentina, con la temática de “Movimiento social y Representación política”.

Un paro de 36 horas cierra el mes de noviembre, con el reclamo al Gobierno para que escuche al pueblo; al rechazar el plan de ajuste neoliberal, se levanta reiteradamente la propuesta del Seguro de Empleo, formación y asignación universal por hijo.

La consulta popular por el tema se hará del 13 al 17 de diciembre de 2001. 3.100.000 personas votan voluntariamente respaldando la propuesta del Seguro... Es sintomático que esto haya pasado apenas dos días antes del levantamiento del 19 y 20. Es que todo contribuyó a ese levantamiento.

En ese mismo año, Luis D'Elía organiza una toma de tierras que va a derivar en la constitución de la FTV (Federación de Tierra y Vivienda), y pasa a ocupar la representación del trabajo territorial en la Central. Se realiza también el Primer Congreso piquetero, en el mes de octubre.

Lamentablemente, es a fines de 2001 cuando se interrumpe la trayectoria que estaba construyendo esta organización nueva en el ámbito de lo sindical. La CTA no supo incorporarse, formar parte, organizar la lucha de diciembre de 2001, y de esa forma quedó casi al margen de ella. No tuvo importante presencia, frente a la organización impetuosa de los “piqueteros”, lo que coincide también con la apreciación que hicieramos acerca del debilitamiento de la presencia sindical durante buena parte de este período.

Concomitantemente con ello, en febrero de 2002 se suspende el Segundo Congreso. Se realiza en diciembre en Mar del Plata, y en él se discute acerca de la conveniencia de convocar a un movimiento político y social que aborde la totalidad de la problemática del país en forma alternativa a la dominante. No se avanza más sobre esta idea.

En 2004, algunos de los dirigentes de CTA, y a título personal, participan de la realización del Encuentro de Rosario por la Soberanía, intento plural, político y de

movimientos por aunar la lucha contra las políticas neoliberales y sus consecuencias, y construir una alternativa política real. Parte de las limitaciones, a nuestro juicio, es que nunca la participación en el Encuentro fue una política asumida por el conjunto de la CTA, lo que hubiera significado el fortalecimiento de esa propuesta.

Dentro de este panorama, la CTA ha intentado retomar protagonismo a través de sus iniciativas y recomponerse, aun dentro de la fragmentación de compromisos de sus integrantes, con distintas vertientes políticas.

Breves consideraciones sobre la criminalización de la protesta social

Estaría incompleto el somero análisis que hemos intentado si no nos refiriéramos al tema de la criminalización de la protesta social.

Si consideramos que el poder, en tanto que ejercicio de la dominación, se ejerce fundamentalmente con dos elementos que componen una ecuación binaria imposible de separar (nos referimos a la coerción y al consenso), de la lectura de la política de gobierno del presidente Kirchner va a surgir claramente cómo esos elementos funcionan.

En efecto, la política kirchnerista se mueve entre, por un lado, la integración e institucionalización de algunas organizaciones (complacientes o consustanciadas con su quehacer) y, por el otro lado, el control, el intento de disciplinamiento y aislamiento de otras (combativas y, algunas, además, con propuestas de fondo). Esa política ha tenido éxito en tanto que abanico de estrategias respecto del Estado de la opinión pública y su manipulado consenso, proclive a la estigmatización de la protesta, a su demonización, condena social, judicialización y aumento de la represión. Todo en aras de la famosa “governabilidad”, que sólo se traduce como contención del conflicto y de las luchas sociales. De manera que la criminalización de la protesta social aparece no sólo como el recurso coercitivo del gobierno, sino como pedido o reclamo de una parte de la población.

¿En qué consiste esa criminalización? En judicializar los conflictos políticos y sociales, sometiendo a los luchadores a la incriminación de tipos penales, de manera que se registran más de 4.000 casos de procesados.

La mayoría refiere a la colisión de derechos, entre el derecho a manifestarse, a luchar por su vida, integridad, salud, de lo cual es parte la lucha contra la desocupación, y el derecho a la circulación invocado por muchos, aunque en la práctica ese considerado impedimento resulte ficcional.

Estas políticas desde el poder actúan, además, en un escenario de la más escandalosa desigualdad.

Hoy el decil más rico tiene una relación de 34.6 respecto del decil más pobre.

En conclusión (sólo una aproximación)

Podríamos concluir que las dificultades del proceso de desarrollo del movimiento piquetero, hasta la actualidad, estriban, de acuerdo con lo que venimos abordando, en que, por un lado, tenemos la proclamada “despolitización” de la militancia en aras de lo reivindicativo-social, ligada a las políticas focalizadoras del Estado. Y por el otro, y paradójicamente, esa “despolitización” generó otro tipo de politización que cuestionó el clientelismo y se propuso un nuevo tipo de organización, más horizontal, dentro de otro estilo y otra lógica de construcción política, aunque no se la quisiera percibir como política.

Ese quehacer se propuso, como dijimos, democratizar los movimientos, pero, al mismo tiempo, el rechazo a “todo lo político” los fue escindiendo justamente de los objetivos más abarcativos (que no pueden ser más que objetivos políticos) que dirigieran la lucha hacia el cambio sistémico, hacia el poder, de manera que, como resultado, se territorializó la lucha, pero también se territorializaron los objetivos, se “focalizaron” hacia miras más reducidas¹⁹.

El poder apareció, no como el objetivo político para el conjunto de las clases subalternas, para el conjunto del pueblo, sino para una parcela territorial a la cual se está adscripto²⁰.

La labor de cooptación y clientelismo hará el resto para fragmentar cada vez más la organización y la lucha, lo cual, de alguna manera, significa un cierto grado de esterilización.

La pregunta que corresponde formularse es: ¿cuánto puede prolongarse una lucha como la que signó nuestras vidas desde 2001, sin plasmarse políticamente (no hablamos en términos estrictamente partidarios)?

Esto tiene que ver con pensar un proyecto de país para las mayorías y no para la élites económicas. O sea, un proyecto que apunte hacia el poder visto como totalidad.

Una vez más insistimos: para ese proyecto es imprescindible superar las falsas dicotomías que en este trabajo hemos señalado entre lo político y lo social, articulándolo y construyendo una alternativa emancipatoria revolucionaria que mire hacia el socialismo en el siglo XXI.

19 En alguna nota periodística Naomi Klein destacó su fascinación por el “encanto de lo pequeño”, en referencia a las luchas sociales.

20 (Rajland: 2007)

Pequeño apéndice sobre la cooptación

(con la colaboración de Martín Cortés):

En el presente trabajo nos hemos referido reiteradamente a “cooptación”, a “cooptados”.

Pero, ¿qué implica la cooptación? En primer lugar, se trata de una política activa respecto de los sectores en lucha en general, que se propone dividir y aislar a grupos de compromiso real con el cambio profundo de aquellos potencialmente posibles de “institucionalizar”.

Los destinatarios son el conjunto del llamado “campo popular” en general, ya que inscriben sobre él fisuras que dificultan su potencial acción común.

Para que se establezcan mecanismos de cooptación en la relación entre un gobierno y un determinado sector político, deben darse varias condiciones de ambos lados: en primer lugar, el grupo o sector político debe llevar adelante una práctica y una ideología que no se presente como incompatible *por principio* con el bloque dominante.

Por otro lado, desde la instancia gubernamental deben producirse medidas activas que seduzcan a un grupo para acercarlo a su horizonte político. Ellas serán tanto de carácter indirecto como de carácter directo; por ejemplo, concesiones materiales dirigidas a un movimiento o espacio en particular.

En primer término debemos mencionar a los llamados “piqueteros oficialistas”, concepto que contiene en su composición paradójica signos del mecanismo aquí tratado: se ha identificado al piquete, originariamente, con una medida combativa de interrupción no solo del flujo del capital (el corte de ruta como significado de la detención del intercambio, del comercio, de la circulación, metodología luego trasladada simbólicamente al corte de calles), sino, incluso, de la propia acción del Estado.

Concretamente, hoy se denomina “piqueteros oficialistas” a varias organizaciones de diverso origen que comulgan con la mayor parte de las acciones de gobierno del presidente Néstor Kirchner. Son aquellas que se insertaron, a través de sus dirigentes, en instancias públicas gubernamentales, a partir del reconocimiento público de éstas, como mediaciones políticas representativas de los “pobres urbanos”, y como gestores reconocidos en la distribución de asistencia social a cambio de abandonar la lucha en las calles por la obtención de políticas oficiales de promoción de empleo “genuino” (en conformidad con Ainstein *et al*, 2005).

No se trata de “traición” o de abandono de un proyecto político, sino de la adaptación de algunas aristas del mismo a una situación política con la cual se identifica.

Por lo tanto, la cooptación, aunque los contiene, no consiste principalmente en favores materiales, sino en una afinidad ideológica y política –preexistente según hemos visto– de la cual estos son expresión.

Bibliografía:

- Ainstein, Luis; Pastrana, Ernesto; Rajland, Beatriz y Scheinsohn, Mariano “Construyendo desde un movimiento social: la autogestión de grandes emprendimientos”. Publicado en www.naerus.net/sat/workshops/2005/papers.htm. 2005. Editado por el Departamento de Planificación, Universidad IUAV, Venecia, Italia, 2006.
- Campione, Daniel, y Rajland, Beatriz: “Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos”, en *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. (Buenos Aires, CLACSO 2006).
- Clichevsky, N.) *Loteos populares, sector inmobiliario y gestión local en Buenos Aires* (CEUR-CREDAL, Buenos Aires. 1990). CTA, página Web, link historia.
- Diario Clarín, 20/12/2005.
- Holloway, John: *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy* Buenos Aires: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Editorial (2002)
- Iñigo Carrera, Nicolás, Cotarelo, María Celia: “La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización.” en *PIMSA Documentos y comunicaciones* 2003. Publicación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. Año VII, N° 7. Buenos Aires (2004).
- Izaguirre, Ines y otra: *Las tomas de tierras en la zona Sur del Gran Buenos Aires*, CEAL, Buenos Aires (1991).
- Lozano, Claudio (coord.), Rameri, Ana y Raffo, Tomás: *¿Seguirá declinando la desocupación? Una mirada sobre la última información del mercado laboral*. Publicación del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Buenos Aires (2006).
- Lucita, Eduardo: “Fábricas ocupadas y gestión obrera en Argentina. Ocupar, resistir, producir.”, (www.geocities.com.economistasdeizquierda.producir) Año 2002
- Mazzeo, Miguel (2004): *Piqueteros. Notas para una tipología*. Buenos Aires, Fisyp.
- Merklen, D. “Sobre la base territorial de la movilización popular y sobre sus huellas en la acción”. *Revista de Estudios Sobre Cambio Social*, Año IV, N° 16, Buenos Aires.(2004)
- MTD Almirante Brown. “Los Movimientos de Trabajadores Desocupados”. *Herramienta* (Buenos Aires) N° 21. Primavera/verano 2002/2003.
- MTD Solano/Colectivo Situaciones. *La hipótesis 891. Más allá de los piquetes*. Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano (2002).
- Murillo, Susana: “El nuevo Pacto Social, la criminalización de los movimientos sociales y la ideología de la seguridad”, en *Revista del Observatorio Social de América Latina*. CLACSO, Año V, n° 14, mayo-agosto, Buenos Aires (2004).
- Pastrana, E. et al: “Vivir en un cuarto: Inquilinatos y hoteles en Buenos Aires”, *Medio Ambiente y Urbanización*, Año 13, Nros. 50/51, Buenos Aires (1995).
- Rajland, Beatriz: “Nuevos emergentes sociales. De luchadores a ‘criminalizados’”, en *Reforma del Estado-Reforma de la Justicia: ¿De qué reforma hablamos?* Buenos Aires, Universidad de Quilmes, 2004, en prensa.
- Rajland, Beatriz: “Articular lo social y lo político resulta hoy imprescindible”, en *Seminario Redem 2006-Fisyp- Fundación Rosa Luxemburgo*. Buenos Aires, FISYP (2006).
- Rajland, Beatriz: *Movilización Social y Transformación Política: De Autonomías, articulaciones, rupturas y cooptaciones*, artículo inédito a publicar en el 2° libro del GT Historia Reciente de CLACSO. En prensa (2007).

- Rodríguez, M. C.: *Ocupaciones de edificios, autogestión, políticas del hábitat y derecho a la ciudad*, CEUR, Buenos Aires (1997).
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián: *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires (2003).
- Svampa, Maristella: *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Taurus, Buenos Aires (2005).
- Thwaites-Rey, Mabel: "La autonomía como mito y posibilidad", *Argenpress*, publicación electrónica, edición del 5 de junio de 2003.
- Tichsler, Sergio: "La forma clase y los movimientos sociales en América Latina", en *OSAL. Revista del Observatorio Social de América Latina*. CLACSO. Año V N° 13, enero-abril, Buenos Aires (2004).
- Yujnovsky, O.: *Claves políticas del problema habitacional argentino*, GEL, Buenos Aires. (1984)
- Zibechi, Raúl: *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento*, Nordan-Letra-Libre, Buenos Aires (2003).

HISTORIA ORAL Y REPENSAR LA HISTORIA*

*Pablo Pozzi***

En los últimos 10 años, nuestro país ha atravesado un proceso de conflictos y reacomodamientos en más de un aspecto. Reclamos, protestas y resistencia se combinaron tanto en la búsqueda de nuevas formas de manifestación como en el rescate de caminos ya experimentados. Desde las ciencias sociales se buscó abarcar la multiplicidad de temas, actores y procesos que emergieron en la transición del neoliberalismo de los '90 al nuevo contexto de realidad latinoamericana, el que puede apreciarse cada vez con mayor claridad.

En el ámbito de la investigación histórica se produce una aceptación cada vez mayor, aunque todavía con marcadas resistencias, de la historia oral en las instituciones académicas, públicas y privadas. El rescate de la memoria histórica dio y sigue dando impulso al trabajo de diversos grupos en la indagación acerca de procesos y acontecimientos, pero también de todo un conjunto de significados que daban, ahora, la palabra a aquellos que tradicionalmente habían quedado fuera de la historiografía oficial. El protagonismo de los trabajadores y el pueblo ya no puede dejarse de lado.

La Historia Oral ha intentado no sólo el rescate de la memoria de sectores antes marginados en su protagonismo, sino el crecimiento de los niveles de conciencia de aquellos como protagonistas de esta historia, y de una realidad que puede ser modificada.

* Con la colaboración de Alexia Massholder.

** Phd en Historia, Profesor de la UBA. Director del Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Las contribuciones de la Historia Oral no se limitan al plano metodológico, teniendo en cuenta la larga tradición de preponderancia de la fuente escrita como única realmente “objetiva”. En tanto contribuye a la toma de conciencia, alimenta el surgimiento de nuevos puntos de vista, nuevos debates y, en consecuencia, la posibilidad de un enriquecimiento mucho mayor del conocimiento histórico.

“A los 15 años me despiden por agitar a los compañeros de trabajo. Para que no haya lío los patrones me recomiendan a un taller metalúrgico para cuando termine la escuela. Entré ahí por el tiempo de las vacaciones. Mientras tanto iba al secundario. En cuarto año, un profesor nos daba matemáticas. Decía que para entender las matemáticas había que entender al peronismo, y viceversa. Entonces, la clase era una hora de política peronista y una hora de matemáticas. Siempre empezaba con la historia del peronismo. Ahí me politizo unilateralmente, puesto que el profesor sólo hablaba de la grandeza de Perón y de que lo más noble era ir a trabajar a una fábrica de aviones. Para hacer la Argentina grande. El profesor también nos decía que los peronistas son los que vienen desde abajo: los de la base. Además, empiezo a frecuentar músicos que mi padre traía a casa: eran más politizados y hablaban de la revolución. Decían que había que hacer algo. Eran *zurdos* peronistas”.

Entrevista con Mario, Córdoba, 28 de febrero de 1994. En: Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro, *Los setentistas. Izquierda y clase obrera*, Buenos Aires, EUDEBA, 2000.

“Pusieron un aviso tal día se hace la elección acá, en la sección mía, y salió por unanimidad. Los reputaba a los negros, la puta que los parió [*risas*] yo no quiero ser delegado, me van a echar a la mierda, porque a todos los echaban a la mierda. Entonces, yo no quería saber nada, pero bueno, salió por unanimidad. Bah, agarré y ya una vez que agarré bueno este... viví todo el proceso de una huelga, qué se yo, hice una gran experiencia, y me di cuenta que había muchas cosas que yo no entendía. Yo le tenía terror a los comunistas, pero terror, me parecía que tenían cara rara, que tenían mirada... de... así claro así... yo me acuerdo había un tal Nicolás y tenía unos ojos grandes así y saltones y yo decía ‘qué cara de comunista que tiene este tipo’. ¡Mirá la imagen que tendría yo! Pero terrible, terrible. Y... y tenía un amigo que era del PC, muy combativo, muy combativo, está desaparecido ese muchacho, lo secuestraron... figura en los desaparecidos, era muy combativo, y él me hablaba siempre. [...] Este... resulta que en el ‘65 se produce la invasión a Santo Domingo, y nosotros estábamos en una asamblea por la discusión del convenio, y en un determinado momento este muchacho pide la palabra y dice... que quería que la asamblea hiciera un repudio contra los *marines* yan-

quis que estaban invadiendo Santo Domingo. Yo lo silbé hasta con los pies. ¡Lo silbaba todo el mundo! Yo decía: ‘¡Pero, che, negro pelotudo, pero qué mierda tendrá que ver Santo Domingo con nosotros que estamos discutiendo un convenio colectivo! ¡Dejáme de hinchar las bolas!’. Y lloraba el pobre negro... Este... y bueno después con el tiempo pude entender. Cuando perdimos la huelga en el ‘65 yo dije, acá esto es un quilombo. Y entonces yo dije ‘bueno yo tengo que ponerme a estudiar’. Y me puse a estudiar, me puse a estudiar por mis propios medios estudié, estudié, estudié, fui buscando y digo: ‘¡puta madre, tengo que ser zurdo!’ [risas] Fui a través de un proceso muy muy duro, porque yo era nacionalista, yo siempre me reivindicé como un nacionalista.”

Entrevista con Gregorio Flores, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1994.
En: Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro, *Los setentistas. Izquierda y clase obrera*, Buenos Aires, EUDEBA, 2000.

Los dos fragmentos de entrevistas citados más arriba deberían resultar más que sugerentes para cualquier interesado en la historia de los trabajadores argentinos. Especialmente porque parecen indicar que la percepción que hemos tenido sobre los obreros argentinos no se condice con la realidad. En ambos parece quedar claro que el clasismo es más importante que la adhesión política; que el macartismo peronista existió pero con límites entre los trabajadores comunes; y que el proceso de politización y militancia de izquierda tuvo más que ver con la experiencia de la vida obrera que con propuestas programáticas. Esto parece indicar una politización muy amplia y mucho más heterogénea y fluida de lo que hemos supuesto hasta ahora, lo cual nos llevaría a reconsiderar distintos aspectos sobre la estructuración de la sociedad política argentina contemporánea.

Evidentemente, lo importante de estos testimonios no es su veracidad, sino más bien la posibilidad de rastrear sentimientos a través del tiempo. En toda memoria y en todo mito podemos encontrar elementos de hechos y de sentimientos de la época. La memoria política no se da desde el hoy hacia el pasado, es más bien una relación dialéctica de ambos, y entre esto y la vida y la cultura del entrevistado. Así se asemeja sobre todo a una estructura en solución¹ o a una experiencia dinámica y viva cuyas lecciones y utilidades son siempre cambiantes, aunque ancladas en un pasado real. Cada testimonio en particular marca diferencias y similitudes en la memoria de los trabajadores argentinos. Las similitudes en la descripción y perspectiva que brindan los mismos testimonios, más allá del origen regional, del oficio, el género y la ideología que poseían, reflejan una serie de tradiciones (casi un

1 Ver la discusión en torno a cultura y estructuras del sentimiento en Williams, Raymond, *Marxismo y literatura*, Barcelona, Ediciones Península, 1980.

folclore) que puede ser interpretada como una “cultura obrera o izquierdista”. Estas tradiciones se traducen en mitos que expresan estructuras de sentimientos comunes a todos los obreros argentinos. Al mismo tiempo, las diferencias en el lenguaje, en el discurso y en la valoración del pasado implican una resignificación desde el hoy. La experiencia de vida, la actual postura política, e inclusive la clase social han marcado fuertemente la memoria. Tomado en su conjunto, este tipo de testimonio parece encerrar una singular vitalidad y una permanente actualización del ideario obrero, que se convierte en una ideología subalterna y contestataria.² Si tomamos en cuenta fuentes históricas como las anteriores, lo que cobra una importancia fundamental es incorporar la subjetividad política al estudio histórico del período.

Si lo anterior se pudiera generalizar al conjunto de la clase obrera, entonces nos encontramos ante un problema mayúsculo: ¿Cómo recuperar la historia de los obreros argentinos? ¿Cómo rescatar la trayectoria de militancia de tantas y tantas generaciones? ¿Cómo profundizar en una historia oculta, tergiversada y, sobre todo, olvidada? Una de las respuestas que van encontrando aquellos historiadores comprometidos con los trabajadores es la historia oral. La historia oral provee un acceso privilegiado a la subjetividad de esta realidad.

La utilización de testimonios orales para reconstruir el pasado es un recurso tan antiguo como la Historia misma. La Historia Oral, en cambio, ya sea que la consideremos como una especialidad dentro del campo historiográfico o como una técnica específica de investigación contemporánea al servicio de varias disciplinas, es un producto del siglo XX que enriqueció sustancialmente el conocimiento de la historia contemporánea. Finalizada la II Guerra Mundial, su emergencia en América y Europa, y su posterior desarrollo, hasta el presente, obedece a diversas motivaciones y reflexiones acaecidas dentro y fuera del campo académico historiográfico.

La historia oral y la tradición oral sirven de fundamento para reescribir la historia, pero también para combatir las injusticias del pasado. Pueblos que fueron conquistados o colonizados recurren, en el presente, a su tradición oral, y rescatan su memoria para reclamar derechos territoriales, lingüísticos, o para recuperar una identidad cultural propia. Supervivientes de la lucha en contra de regímenes militares u opresivos, cuestionan hoy la historia oficial con sus memorias subterráneas, y reclaman el reconocimiento social y el castigo legal de los responsables de violar los derechos humanos. Aunque en modo menos dramático, la gente común exige respeto para sus memorias y tradiciones. Las investigaciones basadas en historia oral y, en ocasiones, los propios historiadores orales, intervienen en el marco jurídi-

2 Ideología en el sentido de un “sistema de creencias característico de un grupo o una clase particular” y un “proceso general de producción de significados e ideas”. Williams, Raymond, *Marxismo y literatura*, Barcelona, Ediciones Península, 1980, pág. 71.

co-legal en tanto la memoria y la tradición oral constituyen la evidencia que sustenta las demandas de restitución de los pueblos, ya sea de tierras o de dignidad.

Bien se trate de una revalorización de las fuentes orales frente al imperio de “lo escrito”, del logro de una comunicación más fluida entre historiadores y otros científicos sociales, o de la apuesta por una historia más democrática, lo cierto es que lo que surgió como un *movimiento de renovación historiográfica y aún de compromiso político* es hoy asumido como una especialidad reconocida mundialmente, que nos exige una mayor reflexión y labor interdisciplinaria, a la vez que supone nuevos desafíos en el ejercicio de la actividad investigativa, la docencia y la acción comunitaria. Por supuesto, lo que debería quedar claro es que las fuentes orales no se limitan únicamente a las entrevistas; por el contrario, anécdotas, canciones, cuentos, folclore, poemas, y un sinnúmero de formas de transmisión oral, son recursos para hacer historia oral.

En general, hemos considerado a la historia como algo profundamente ligado a las fuentes escritas. Esta noción, derivada de la visión rankeana (y considerada científica), tiene algo que ver, pero no mucho, con la historia de los pueblos. Los irlandeses tenían sus bardos, los griegos sus tragedias, los incas la oralidad; todas fueron formas de transmitir la historia. Ésta tiene varias funciones: una es la legitimación de un tipo de sociedad determinado; otra es el de la memoria y la transmisión de experiencia, las lecciones del pasado; una última es la de la constitución de un grupo social a través de la creación de una historia compartida que define identidades colectivas. Así, la historia oral se convertía en la base material necesaria del sentido común y de las estructuras de sentimiento, imprescindibles tanto para la dominación como para la liberación del oprimido. En este sentido, la oralidad es la forma más antigua de transmisión del conocimiento histórico.

Sin embargo, no toda cuestión oral es historia oral. Existen múltiples formas de testimonios, que son válidas y útiles, pero que no son historia oral. La labor de entrevista que hace un periodista es oralidad; el trabajo de antropología cultural también lo es; y ni hablar del análisis lingüístico y del discurso. En el caso de la historia oral, sus pautas distintivas tienen que ver sobre todo con el hecho de que, a través de la oralidad, se trata de disparar la memoria para construir una fuente que nos aporte para lograr una forma más completa de comprensión del proceso social.

Si la historia es el ser humano, en sociedad y a través del tiempo, entonces la historia oral provee una fuente al investigador para aprehender tanto la subjetividad de una época como para percibir una serie de datos que, de otra manera, no han quedado registrados. Digamos: el testimonio (más allá de su belleza o cualidad emocionante) tiene sentido para el historiador mucho más allá de su construcción como discurso, como narración, o como imaginario. Su sentido lo da (o no) el hecho de que provee una ventana particular para mejorar nuestra comprensión de una sociedad determinada. Así, el historiador oral debe utilizar no sólo las técnicas

del entrevistador sino, sobre todo, las del historiador, tomando todos los recaudos necesarios tanto al interrogar la fuente como al construir una explicación a partir de ella. Si no hay explicación, si no hay proceso, si el uso de la oralidad no sirve para explicar el proceso histórico, entonces el análisis puede ser válido y hasta hermoso, pero no es historia oral.

Por otro lado, y debemos aclararlo, de ninguna manera es la historia oral la historia de “los sin voz”. Como toda historia, es una construcción del historiador con los protagonistas. Lo que sí permite es acceder a sectores no dominantes de maneras innovadoras. O sea, si no fuera por la historia oral en general, todo lo que podemos hacer es ver a los oprimidos a través de las fuentes gestadas por los opresores.

De todas maneras, yo no me considero un historiador oral, creo ser un historiador. Sólo el mal historiador usa parte de sus fuentes disponibles; yo trato de recurrir a todas las posibles. De ahí que, cuando encaré el tema de la actividad obrera ante la dictadura de 1976, o el de la guerrilla del PRT-ERP, conseguí mucha información escrita, pero sabía que lo cualitativo, lo subjetivo, y también una cantidad importante de datos, no se podían obtener de otra forma que no fuera de la memoria de los protagonistas.

Para algunos, la historia oral es una construcción, una narrativa, mientras que para otros es una forma de aproximación a los sectores sociales “sin historia”; en algunos casos es considerada como una metodología de investigación, mientras que en otros es vista como una rama de la Historia equiparable a la historia social o económica. Para amplios sectores profesionales, la historia oral, por su subjetividad, es una mera construcción literaria, mientras que para quienes la practican ha significado una profunda renovación intelectual. Además de lo dicotómico (en apariencia) de estas posturas, las mismas formas de “hacer” historia oral varían ampliamente entre los que se dedican a ella. Más allá de que simpaticemos más con algunas que con otras posturas, lo que nos parece importante es que la oralidad obligue al diálogo entre disciplinas cuyas fronteras eran tenidas como estrictas, y, asimismo, nos fuerza a confrontar con lo que es el sujeto social por excelencia de toda ciencia social: el ser humano.

Por todo lo anterior, y quizás debido a su heterogeneidad, la Historia Oral ha sido, y pretende seguir siendo, producto de un movimiento de cambio progresista en las ciencias sociales, centrado en el rescate de la memoria colectiva social e individual. En este sentido, se apuesta a contribuir, en alguna medida, a una “formación” que incida en el futuro y desde los diversos ámbitos posibles a perfilar una sociedad más democrática, más plural y más justa. La utilización de testimonios orales para reconstruir el pasado es un recurso tan antiguo como la historia misma. La historia oral, en cambio, ya sea que la consideremos como una especialidad dentro del campo historiográfico o como una técnica específica de investigación

contemporánea al servicio de varias disciplinas, es un producto del siglo XX que enriqueció sustancialmente el conocimiento de la Historia contemporánea.

La Historia Oral tiene una larga tradición en América Latina que se remonta, particularmente, a la creación, en 1956, del Archivo Sonoro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México; proyecto que sin duda establecía los cimientos para el desarrollo de la historia oral y que sería el antecedente indiscutible del Archivo de la Palabra que el propio INAH estableció en 1972. Fue ese archivo el que rescató, en forma más completa, la memoria de la Revolución Mexicana a través de los testimonios de sus sobrevivientes. Y fue gracias a estos testimonios que la historia de la primera revolución del siglo XX se pudo complejizar, alejándose de la hagiografía tan grata a la ideología oficial del PRI mexicano. Asimismo, podemos destacar el valor del trabajo que se ha realizado en Brasil, fundamentalmente partiendo del esfuerzo del programa de historia oral CPDOC en la Fundación Getulio Vargas, sin dejar de lado los importantes desarrollos en toda la década de 1980 en países como Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Perú y Puerto Rico. Reflejo de este desarrollo fue el Primer Encuentro de Historiadores Orales de América Latina y España, organizado en México en 1988.

En el caso argentino, si bien la historia oral se remonta a la creación del archivo oral del Instituto Di Tella, la realidad es que esta inicia su desarrollo como rama de los estudios históricos recién a mediados de la década de 1980³. En ese momento, la labor de Liliana Barela y el Instituto Histórico para recuperar la historia de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, la investigación de Dora Schwarzstein sobre el exilio republicano español en el Río de la Plata, la de Ernesto Salas sobre la Resistencia Peronista, y la de Pablo Pozzi sobre la actividad de los trabajadores durante la dictadura de 1976-1983, constituyeron los primeros esbozos de una actividad académica en torno a la historia oral. Schwarzstein, junto con Pablo Yankelevich, conformaron, en 1988, el primer proyecto institucional universitario argentino, al encarar la Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires. El notable desarrollo de este proyecto fue presentado en el Primer Encuentro de Historiadores Orales, donde ambos investigadores presentaron el trabajo "Historia Oral y Fuentes Escritas en la historia de una institución. La Universidad de Buenos Aires 1955-1966", que daba cuenta del esfuerzo coordinado por ambos en la Universidad de Buenos Aires, el cual logró reunir más de cien entrevistas y editar algunas publicaciones.

Recién en la década posterior al retorno del sistema electoral en Argentina se multiplicaron los trabajos de investigación histórica que, abarcando diferentes temáticas, apelaron al uso de testimonios orales. En diferentes provincias existen, desde hace varios años, iniciativas individuales o institucionales, provenientes del

3 No está de más recordar que Hebe Clementi fue en este tema una pionera.

ámbito universitario o de la enseñanza media, y también de otras organizaciones públicas o privadas que, persiguiendo diferentes fines, se encuentran involucradas en proyectos de Historia Oral. Es así que Schwarzstein dio cuenta de este desarrollo en la Argentina, señalando que: “Es recién en la década del ‘80 que la historia oral alcanza un desarrollo significativo [...], con vinculaciones más o menos intensas a los ámbitos universitarios, asociada a una preocupación creciente por la cultura obrera, la historia de las mentalidades...”⁴. Debemos aclarar que, necesariamente, esta afirmación debe ser matizada, puesto que para gran parte de los historiadores argentinos la oralidad no constituía una fuente histórica aceptable en la década de 1980. Sin embargo, debemos señalar que, tanto la creación del Programa de Historia Oral en la UBA en 1991, como la sección dedicada a la historia oral del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, marcaron el comienzo de una aceptación institucional para la historia oral.

En la década de 1990, la Historia Oral se constituyó como un área de estudios con entidad propia, desarrollando una serie de proyectos a distintos niveles, tanto universitarios como locales, tanto públicos como privados. Cada uno de estos esfuerzos ha constituido acervos parciales de fuentes orales. A modo de ejemplo podemos mencionar el Programa de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires; el “Archivo de la Palabra” del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba; el Centro de Documentación de H.I.J.O.S.; la Fundación Memoria Abierta; el Centro de Información y Relevamiento de Fuentes Orales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Caleta Olivia, que edita la *Revista Patagónica de Historia Oral*; el Programa de Historia Oral de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba; y el Programa de Historia Oral del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires (IHCBA), que edita regularmente la publicación *Voces Recobradas* y que, juntamente con el Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, organiza el *Encuentro Nacional de Historia Oral*.

Todo el proceso de la historia oral en la Argentina ha sido, indudablemente, conflictivo. Por un lado, aquellos que la visualizan como una herramienta necesaria para la realización de una forma contestataria de hacer historia. Para estos historiadores, entre los que me incluyo, al rescatar de la memoria de aquellos marginados por la historiografía oficial, la historia oral encierra una naturaleza subversiva. Para otros, discípulos de algunos europeos o de la academia norteamericana, la historia oral sirve para registrar los recuerdos de presidentes, empresarios, generales, considerados los “actores” de la historia. Por supuesto, todo es válido y tiene utilidad,

4 Schwarzstein, Dora, “La historia oral en América Latina”, *Historia y Fuente Oral. Por una historia sin adjetivos*. Universitat de Barcelona, núm. 14, año 1995, pp. 42.

pero ambas posturas encierran una visión profundamente política e ideológica en torno a la historia, y a una herramienta como la historia oral. El mismo concepto de “actores” implica que la sociedad y su historia son vistas como un escenario donde se representa una obra de teatro de la que entran y salen actores, mientras la mayoría asiste sólo como espectador. Así, si bien la memoria de estos “notables” es útil, también la podemos encontrar en buena parte de las fuentes escritas. En cambio, la memoria de “los de abajo” tiene un tipo distinto de utilidad: aquella de rescatar la historia silenciada desde el poder. Pero más aun: la importancia de esta historia oral subversiva es que, en el mismo proceso de hacerla, genera conciencia en el entrevistado sobre su protagonismo como gestor de la historia. Así, la historia oral tiene un efecto movilizador, al mismo tiempo que subversivo, y nos permite un acceso, como también nos permite comenzar a vislumbrar la subjetividad de las grandes masas, los trabajadores y el pueblo.

Por todo lo anterior, y quizás debido a su heterogeneidad, la Historia Oral ha sido, y pretende seguir siendo, producto de un movimiento de cambio progresista en las ciencias sociales, centrado en el rescate de la memoria colectiva social e individual. En este sentido, se apuesta a contribuir, en alguna medida, a una “formación” que incida en el futuro y desde los diversos ámbitos posibles a perfilar una sociedad más democrática, más plural y más justa. La utilización de testimonios orales para reconstruir el pasado es un recurso tan antiguo como la Historia misma. La Historia Oral, en cambio, ya sea que la consideremos como una especialidad dentro del campo historiográfico o como una técnica específica de investigación contemporánea al servicio de varias disciplinas, es un producto del siglo XX que enriqueció sustancialmente el conocimiento de la Historia contemporánea.

A UN AÑO DE GOBIERNO DE EVO MORALES LOS DESAFÍOS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA

*Pablo Stefanoni**

A un año de su arribo al Palacio Quemado, Evo Morales tiene un gran capital político, derivado de un hecho que debería ser la regla pero es la excepción en la mayoría de los gobiernos de centroizquierda en la región: cumplió con sus promesas electorales. En marzo de 2006 consiguió la sanción parlamentaria de la Ley de Convocatoria a la Convención Constituyente y al referéndum autonómico “para refundar el país”, y el 1 de mayo firmó el decreto “Héroes del Chaco”, que recupera la centralidad del Estado –perdida en los años ‘90 en el negocio hidrocarburífero. Poco después consiguió la aprobación congresal de la Reforma Agraria, que intenta acabar con los latifundios improductivos del oriente del país, donde no llegó la reforma agraria de 1953. Estas tres medidas forman parte de lo que el gobierno denomina “revolución democrática y cultural”, cuyos contornos aún se encuentran en construcción pero que tiene dos nítidas fronteras políticas. La primera es la que algunos denominan “memoria corta” frente al modelo económico neoliberal aplicado en el país entre 1985 y 2005. La otra, basada en la “memoria larga”, nace frente al colonialismo interno que continuó en el país después de la independencia y condenó a las mayorías nacionales –indígenas– a una suerte de *apartheid* no escrito, pero no menos efectivo.

Así, el Presidente boliviano plebiscitó favorablemente su gestión el 2 de julio –en las elecciones de constituyentes– con más del 50% de los votos, y revalidó la legitimidad conquistada el 18 de diciembre de 2005 en los comicios presidenciales,

* Periodista y economista. Coautor de *La revolución de Evo Morales*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006 (Colección Claves para todos).

cuando consiguió el 53,7%. Ese capital político se mantiene hasta la actualidad. Las encuestas muestran una aprobación que siempre se mantuvo por encima del 50%: varió entre el 81% luego de la nacionalización, que marcó el pico más alto de la épica nacional-popular, y el 51%, cuando la batalla campal entre mineros cooperativistas y estatales en la localidad de Huanuni –con un saldo de 16 muertos¹– mostró la cara más trágica de la realidad boliviana: pelea de pobres contra pobres y el riesgo del retorno de la ingobernabilidad. La última medición –febrero de 2007– arrojó un apoyo del 65%.

Pero luego de un año de “grandes anuncios” que marcaron una ruptura con la historia boliviana, quizás vienen ahora los mayores obstáculos, que no sólo vienen de la resistencia de la oposición de derecha –vestida con un ropaje regionalista y asentada principalmente en Santa Cruz– y de los medios de comunicación que rechazan el rumbo “populista” del gobierno, sino de las propias limitaciones de una izquierda plebeya carente de cuadros y de espacios de debate político que contribuyen a definir el rumbo estratégico del proceso de transformaciones y de recambio de élites que vive Bolivia.

Del campo a la ciudad

Luego de una década y media de derrotas a manos de gobiernos neoliberales, el movimiento popular boliviano comenzó su etapa de reconstrucción en abril de 2000. En esos días, una potente movilización en la ciudad de Cochabamba logró poner fin al contrato de concesión de aguas a la transnacional Bechtel y, casi en paralelo, los aymaras del altiplano cercaban la ciudad de La Paz liderados por Felipe Quispe Huanta. Sin embargo, este renacer de las cenizas de los sectores subalternos se dio en un escenario novedoso: con la crisis minera de 1985 se desmoronó la otrora poderosa Central Obrera Boliviana (COB) (que, hasta hoy, mantiene en sus estatutos que su secretario general debe ser minero), y una identidad de clase construida al interior del viejo Estado nacionalista, desarrollado por la revolución de 1952 (capitalismo de Estado), al que la COB buscaba radicalizar en una línea socializante. Muchos de los mineros despedidos migraron a El Alto o a la región cocalera del Chapare, donde “reinvirtieron” su capital militante en juntas vecinales y sindicatos campesinos. De esta forma, los obreros siguieron haciendo política pero bajo nuevas identidades: vecinos, cocaleros, indígenas, sin una organización matriz que unificase las luchas. Y el nacionalismo volverá a la escena como un discurso disponible para enfrentar al neoliberalismo luego de la crisis del marxis-

1 Ver: “El boom minero que dinamitó la paz social”, *Página/12*, Buenos Aires, 7-10-2006.

mo que siguió al derrumbe del “socialismo real” en la URSS y Europa del Este. Sólo que esta vez el núcleo articulador ya no serán los intelectuales de las clases medias urbanas –como en los años ’50– sino los indígenas, campesinos y urbanos, protagonistas de las movilizaciones que tuvieron como punto más alto la “guerra del gas” de septiembre y octubre de 2003, con un saldo de 64 muertos y la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada hacia EE.UU., donde todavía se encuentran protegido por las autoridades locales.

La singularidad boliviana es que el “ciclo de protestas” antineoliberales –con énfasis en la recuperación de los recursos naturales y los servicios privatizados– tuvo como contrapartida la construcción de una herramienta política autónoma de las organizaciones sociales en lucha, con su núcleo duro en el campo: la “tesis del instrumento político” de los sindicatos dio lugar al Movimiento al Socialismo (MAS) como expresión electoral, que dio un primer “salto” en 2002, y se hizo sorpresivamente con el poder en 2005, a sólo una década de su fundación.

Sin embargo, este tipo de “militancia indirecta” –desde las organizaciones gremiales– frenó la incorporación de los sectores urbanos que no pertenecen a instituciones corporativas, y limitó los procesos de formación de cuadros político-administrativos capaces de manejar el aparato estatal. El débil desarrollo urbano no ha permitido al MAS conquistar electoralmente ningún municipio “grande” y sus estructuras urbanas están dominadas por el clientelismo político². La ausencia de debate político es más la regla que la excepción, y lo inverso ocurre con las peleas –a menudo violentas– por el acceso a los escasos espacios disponibles en la administración estatal.

A ello se suma que el carácter de “federación de sindicatos” del MAS, sin instancias orgánicas efectivas, impide la articulación policlasista y multicultural, así como la configuración de espacios de confianza mutua y de formación técnico-política, en el marco de una permanente tensión corporativa. Evo Morales se encuentra, así, ante una disyuntiva permanente: colocar en los puestos estratégicos a indígenas o campesinos que aún no se han formado suficientemente en la gestión estatal, y fomentar inciertos procesos de aprendizaje que chocan con las expectativas sociales de cambios rápidos, o nombrar en esos cargos a “invitados” de las clases medias, muchos de ellos ligados a los gobiernos de los ’90 que, en los últimos años de la crisis intelectual y moral del neoliberalismo, han virado convenientemente de perspectiva para no quedar fuera de la ola nacionalista. Cada cambio lo enfrenta a la misma pregunta en la “mesa chica” de su despacho: “¿A quién llamamos?”. Con un largo silencio colectivo como respuesta, o elecciones apresuradas

2 Recientemente estalló un escándalo por venta de “avales” por parte de dirigentes del MAS para conseguir empleo en la administración pública.

que, a los pocos días, muestran su ineficacia o falta de visión común con el Ejecutivo.

Estas limitaciones hacen que Evo Morales se recueste en el campo, donde encuentra su base de apoyo más “dura”, leal y confiable. No es casual que sean los campesinos –cerca del 40% de la población– quienes más se beneficiaron de las políticas públicas del nuevo gobierno, anunciadas y llevadas personalmente por el propio mandatario indígena a las zonas rurales: construcción de infraestructura hospitalaria y educativa, plan de alfabetización, otorgamiento de DNI gratuitos, reparto de tierras fiscales –en una etapa aún incipiente de la reforma agraria–, distribución de tractores, servicios telefónicos, transmisión por aire del mundial de fútbol, etc. Son varios los viajes semanales de Morales a alguna de estas localidades históricamente fuera del horizonte visual del Estado, donde “el Evo” gusta recordar anécdotas de su pasado de pastor de llamas, músico o cultivador de papas para conseguir la empatía popular. Y esa empatía es visible en la recepción de sus discursos y hasta en los festejos de chistes, que no provocan ni una mueca en las clases medias pero arrancan carcajadas entre los campesinos que lo reciben como el “hermano Presidente”. En estas regiones de la Bolivia profunda su liderazgo es, hasta ahora, indiscutido. Y este apoyo rural se extiende a Santa Cruz o Tarija, donde se han conformado anillos *masistas* sobre las capitales departamentales: de estos bastiones de la migración “colla” salió el voto que el 2 de julio le dio el triunfo al oficialismo: en Santa Cruz con el 25% y en Tarija con el 41%, y hoy limita el poder de la oposición regionalista y cualquier ambición independentista de los sectores más duros del autonomismo.

Frente a esta “lealtad incondicional”, el apoyo urbano es más volátil, especialmente entre los sectores medios y acomodados –con comportamiento de élite–, que el 18 de diciembre de 2005 marcaron con una cruz la opción de Evo Morales en la papeleta electoral, para apoyar el cambio o como fruto de la convicción de que “si gana un bloqueador” se acabaría la inestabilidad social que se llevó por delante a dos gobiernos en menos de tres años. Hoy, las encuestas –con un fuerte sesgo urbano– reflejan el paulatino alejamiento de estas clases medias ante las primeras dificultades del gobierno. Ello tiene una explicación sociológica concreta: en Bolivia, el Estado es el pilar de la reproducción económica de las élites y, bajo el gobierno del MAS, estos sectores han perdido varios privilegios, como las famosas consultorías –en retribución a diversos tipos de apoyo político– y el acceso directo a los despachos ministeriales. El comentario de un profesional de la acomodada zona sur de La Paz, transmitido en privado por un funcionario del actual gobierno, es sintomático del momento actual: “Cómo habrá sido sufrir más de 500 años de exclusión si nosotros hace ocho meses que nos sentimos fuera del poder y ya no sabemos para dónde escapar”. Un editorial del semanario *Pulso* refleja, desde una perspectiva más sociológica, el pesimismo de las élites ante un país que, periódica-

mente, se les va de las manos: “Ni el socialismo y el autoritarismo que temían unos. Ni el cambio de estructuras y el comienzo de un nuevo ciclo de desarrollo que deseaban otros. Simplemente el viejo y feo rostro, tan conocido, del infortunio boliviano: la inestabilidad política, la pura ingobernabilidad, que son formas sintéticas de designar la crónica implosión del país”³.

Nacionalismo indígena

El de Evo Morales no es el primer ensayo nacional-popular con apoyo de masas en Bolivia. La propia historia de esta nación andino-amazónica puede ser leída como una sucesión de ciclos “liberales” y “nacionalistas” desde los años ’40, cuando el socialismo militar de David Toro y Germán Busch inauguró un cuestionamiento a las oligarquías dominantes que motorizaría, años más tarde, la Revolución Nacional de 1952, que nacionalizó las grandes minas, instauró el voto universal y repartió la tierra. Y, ya en los ’70, alentó un nuevo ciclo de nacionalismos militares con Alfredo Ovando y Juan José Torres. Pero estas experiencias populares fueron socavadas por las luchas sectoriales por el control de la renta de los recursos naturales –tradicionalmente provenientes de la minería y utilizadas para financiar diversas formas de clientelismo político– y la imposibilidad de generar instituciones capaces de transformar los objetivos emancipadores en políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías nacionales. El Estado fue concebido como un botín por la vieja rosca minero-feudal, y luego por las nuevas élites “clasemedieras” que accedieron al poder con la revolución del ‘52. Peligros similares se erigen hoy sobre el nacionalismo indígena en el poder.

El entronque histórico del gobierno de Evo Morales con el viejo nacionalismo es evidente. La nacionalización del gas y del petróleo siguió una escenificación conocida: la ocupación militar de los campos de gas y petróleo; la “revolución agraria” –como la llama Evo Morales– se anunció en el aniversario y en el mismo lugar (Ucureña, en los valles de Cochabamba) de la reforma agraria del ‘53; y la inauguración de la Asamblea Constituyente se realizó el 6 de agosto, en Sucre, en medio de un desfile indígena militar que recordó la alianza campesino-militar que fue la base social de los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del régimen militar populista del general René Barrientos, que llegó al poder de facto en 1964. Lo que no implica, empero, una reivindicación del MNR, sino la perspectiva de su profundización y superación histórica, no en una línea socialista, como propiciaba la COB, sino en la perspectiva de un nacionalismo

3 Pulso, N° 368, La Paz, 6 al 12-10-06.

multicultural “aprendido” por el actual Presidente en su militancia en la región cocalera del Chapare, donde migrantes de diferentes regiones de Bolivia se enfrentaban a los militares bolivianos asesorados y apoyados por uniformados estadounidenses.

No es casual que los cambios más perceptibles del primer año de gestión de Evo Morales se vinculen a la recuperación de la capacidad de decisión nacional en áreas estratégicas del Estado como las Fuerzas Armadas y la política exterior, donde se desplazó de la tradicional y casi ilimitada subordinación a EE.UU. hacia una alianza –con fuertes vínculos emotivos– con Cuba y Venezuela. Un caso paradigmático fue el del cuerpo militar de elite F-10, creado bajo el control del Grupo Militar que opera desde la embajada estadounidense. Morales nombró a un comandante que no contaba con la aprobación de Estados Unidos, lo que motivó la suspensión del financiamiento de este país al F-10, y algunas escaramuzas verbales. Pero el comandante no fue cambiado y Morales anunció, desde el Palacio Quemado, que “se acabaron los tiempos en los que ministros y jefes militares eran nombrados desde la embajada norteamericana”.

En el área económica se reactivaron imaginarios desarrollistas, junto con una suerte de nostalgia por un “Estado de bienestar” que, en el caso boliviano, fue extremadamente limitado. La consigna lanzada por el vicepresidente Álvaro García Linera, “industria o muerte”, expresa el *revival* de la Teoría de la Dependencia –dejar de exportar materias primas– que subyace, y suele imponerse, sobre el discurso indigenista en las filas del actual gobierno, atravesado por los clásicos clivajes nación/antinación, pueblo/oligarquía de los variados nacionalismos latinoamericanos. Sin embargo, se trata de un “desarrollismo con disciplina fiscal”, tal como lo reafirma en los hechos el gobierno, que, por otra parte, ha conseguido un superávit inédito en la historia reciente, y se enorgullece de que “ahora los bolivianos sí pagan sus impuestos”, incluidos sectores anteriormente eximidos como el transporte de larga distancia. Los aumentos salariales a los funcionarios públicos –como médicos y maestros– fueron muy moderados en 2006: entre el 5 y el 7%. Aquí encontramos dos explicaciones básicas: el trauma generado por el descontrol financiero de la Unidad Democrática Popular (UDP) en los ‘80 –que terminó en hiperinflación, 15 años de silenciamiento político de la izquierda y una feroz ofensiva ideológica neoliberal–, y la propia “idiosincrasia” campesina de Evo Morales, quien se resiste a “gastar sin tener la plata”. Fue en el área financiera donde más continuidad hubo respecto de los años del reinado neoliberal y, recientemente, en la cartera de Planificación –encargada del Plan Nacional de Desarrollo– fue nombrado el “técnico” Gabriel Loza. Recientemente, García Linera rechazó el calificativo de Socialismo del Siglo XXI para el proyecto en marcha, y lo definió como un “capitalismo con reglas claras, de producción, de inversión y de apego a su país”. “El Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la

voluntad general y el que planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país”; así resumió su concepto de “capitalismo andino”⁴. La diferencia con el *cepalismo* radicaría en la articulación entre economía moderna y premoderna sin subordinar ni liquidar a esta última, de donde sale una pregunta inmediata: ¿es posible un desarrollismo no homogeneizante?, y una más estratégica: ¿resulta posible un proyecto emancipatorio en el marco del capitalismo (dependiente)? Los próximos pasos del gobierno permitirán discernir con mayor base empírica si estamos ante el inicio de una nueva dinámica económica y social postneoliberal o ante una versión “andina” del viejo capitalismo nacional.

En el área hidrocarburífera, la salida del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, en septiembre del año pasado, dejó en evidencia las diferentes visiones y el triunfo de una vía nacionalista moderada. El periodista –ex compañero de militancia de Jorge Abelardo Ramos en su exilio en Argentina– abandonó el Ministerio declarando que “hay pugnas en el gobierno para aplicar el decreto de nacionalización”. Tanto las empresas petroleras como los movimientos sociales leyeron la renuncia forzada de Soliz Rada y su reemplazo por el economista académico Carlos Villegas, hasta ese momento ministro de Planificación, como un “ablandamiento” de la política petrolera, pero con una valoración distinta: unos vieron en ello un paso hacia una mayor flexibilidad, en tanto que los otros evaluaron la situación como un debilitamiento de las convicciones nacionalizadoras del Poder Ejecutivo.

El giro “pragmático” se materializó en la firma de los nuevos contratos con las transnacionales afincadas en el país, que establecieron una fórmula intermedia entre contratos de servicios y de producción compartida⁵. También está en cuestión la

4 *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra, 22-1-07.

5 “Existen graves contradicciones en los contratos. Mientras el contrato marco (cláusula 4-3) determina la propiedad de Bolivia sobre sus hidrocarburos y establece la vigencia de contratos de operación, el anexo F prescribe que las petroleras tienen derecho a participaciones, propias de contratos de producción compartida. El anexo D, a su vez, al definir los ‘costos recuperables’, permite que YPFB asuma para sí riesgos de inversión, los que debieron ser asumidos sólo por las compañías. Por estos anexos, Petrobras dice que firmó contratos de producción compartida, los que, según ella, le permiten inscribir en sus balances el valor de las reservas que explota. Con ese argumento, las compañías inscribirán en bolsa los títulos valores de las reservas de gas y petróleo, cuyo valor sobrepasa los 200 mil millones de dólares, con lo que la nacionalización habrá quedado totalmente desvirtuada. [...] Las petroleras han conseguido que se les reconozcan las delirantes inversiones que dicen haber efectuado y las esmirriadas amortizaciones que indican haber obtenido en el país. Con esas cifras se elaboran las fórmulas de participaciones de YPFB y las petroleras [...]”, Andrés Soliz Rada, *La Prensa*, La Paz, 5-12-06.

recuperación para el Estado del control accionario de las petroleras capitalizadas (Chaco, Andina, Transredes y las refinerías de Petrobras): al rechazar la opción de expropiar –con indemnización– las acciones necesarias para controlar el 50% más uno de las mismas, el Estado sólo logró recuperar el control de las acciones “de los bolivianos” en manos de las AFPs (equivalentes a las AFJPs en Argentina), pero se enfrenta a una fuerte resistencia de las empresas para vender sus paquetes accionarios para asegurar la mayoría estatal en sus directorios. De esta forma, está en juego el tipo de refundación de YPFB: una empresa puramente testimonial en el mercado o una empresa que, poco a poco, avance en el control efectivo de toda la cadena: desde la exploración hasta la comercialización. La falta de recursos y los constantes cambios de autoridades ponen varios palos en la rueda.

Refundación, ¿qué refundación?

Si la “pata económica” del proyecto de Evo Morales mostró avances pese a estas dificultades, su “pata política” –la Asamblea Constituyente– enfrenta el peligro de la pérdida de legitimidad. En el primer medio año de sesiones, los convencionales apenas avanzaron en la elaboración de sus reglas de funcionamiento, en el marco de una pelea a brazo partido entre oficialismo y oposición en torno al carácter de la Asamblea (“originaria” o “derivada”, es decir, por debajo o por encima de los actuales poderes constituidos) y a la forma de votación de la nueva Carta Magna (mayoría absoluta frente a la mayoría especial de dos tercios). Y este predominio de los aspectos legales por encima de los contenidos de la nueva Ley Fundamental provocó elevados niveles de apatía en la población. El constituyente Raúl Prada, independiente electo por el MAS, ha alertado sobre las consecuencias políticas de un fracaso de la Constituyente por la imposibilidad de lograr consensos mínimos para garantizar el desarrollo de sus actividades. Y alertó sobre las dificultades del gobierno del MAS para transformar su mayoría política y social en una nueva hegemonía “indígena-popular”. El reciente acuerdo entre el gobierno y la oposición sobre la forma de votación destraba el cónclave pero inaugura un riesgo adicional: la elaboración de una nueva Constitución “a toda velocidad” y “desde arriba” para cumplir con el plazo límite del 6 de agosto. Hasta ahora, la “escenificación de un nuevo pacto social y de la refundación del país” –retomando una frase de García Linera– no tiene como correlato un debate público, y corre el riesgo de ser absorbida por el maximalismo discursivo, como sucedáneo a la creatividad social y al empoderamiento ciudadano.

Uno de los déficits más importantes del actual gobierno boliviano es la inexistencia de debate “estratégico”. El Ejecutivo parece actuar en un horizonte temporal extremadamente corto, y en un permanente *zig-zag* en relación con la radicalidad

de las reformas y a su relación con la oposición política, empresarial y regional. Y todo ello se encuadra en una discusión no saldada: García Linera teorizó –antes de llegar a la segunda Magistratura– la necesidad de una “salida pactada” para acabar con el “empate hegemónico” que agobia al país desde 2003, mientras que el presidente Evo Morales es más partidario de una “guerra de maniobras” para restarle poder a la “oligarquía cruceña”. El referéndum autonómico dejó en evidencia estas dos posiciones: mientras Morales llamó a votar “No a las autonomías de la burguesía”, García Linera mantuvo una poco desapercibida neutralidad ante la consulta. Y estas diferencias se repiten en otras áreas de la gestión estatal, aunque la aceptación incondicional del liderazgo indígena por parte del vicepresidente evita transformar estas visiones discrepantes en crisis política al interior del Ejecutivo, donde García Linera funciona como una suerte de “copiloto” en la actividad diaria del Jefe de Estado.

La realidad es que la autonomía regional ya es un hecho en el sentido común oriental, y el propio Evo Morales parece estar girando hacia posiciones más “realistas”, que comienzan a plantear la discusión sobre el contenido concreto del postcentralismo paceño, más que hacia una oposición total a mayores libertades para los gobiernos departamentales. Sólo así parece posible articular una verdadera hegemonía nacional del proyecto indígena-popular, que aún conserva un fuerte contenido “andinocéntrico”, tanto en su retórica como en su estética. También decidió reducir la confrontación verbal permanente para dedicarse a mejorar la gestión y tratar de recuperar el apoyo de las clases medias, temerosas del “rumbo totalitario” del gobierno indígena. García Linera fue el encargado de poner en palabras este giro: “Vamos a corregir el discurso, suspendiendo esa retórica innecesaria, porque encima no corresponde con nuestros hechos prácticos (...) En este año no hubo una sola medida que haya afectado a las clases medias e incluso a las clases altas de Bolivia”, explicó en una entrevista con el matutino *La Prensa*⁶. Luego enfatizó: “repetimos una y mil veces: el gobierno del presidente Morales respeta la propiedad privada, respeta la religión, respeta la actividad sana del empresariado, garantiza la actividad privada en la enseñanza y la salud. Las clases medias bolivianas – que no incluyen a los prósperos comerciantes aymaras o quechuas– son un puñado de la población, pero su presencia en los medios lo vuelve un sector creador de opinión difícil de ignorar. Especialmente cuando todo indica que en 2008 habrá elecciones para renovar todos los cargos públicos en el marco de la nueva Constitución, y el objetivo del oficialismo –rechazado por la oposición– es incorporar la reelección del presidente y vice, que actualmente sólo pueden aspirar a un mandato de cinco años.

El dilema no es nuevo: cómo mantener la mayoría electoral sin perder de vista

6 *La Prensa*, La Paz, 21-2-2007.

los objetivos transformadores. O, dicho de otro modo, cómo hacer una revolución en los marcos de una democracia “liberal” que sigue siendo la fuente de legitimidad del actual proceso de cambio.

Bibliografía

- “El boom minero que dinamitó la paz social”, *Página/12*, Buenos Aires, 7-10-2006
Pulso, N° 368, La Paz, 6 al 12-10-06
El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 22-1-07.
Andrés Soliz Rada, *La Prensa*, La Paz, 5-12-06.
La Prensa, La Paz, 21-2-2007

**FERNANDO MARTÍNEZ HEREDIA.
LA COHERENCIA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO,
LA PASIÓN DE LA REVOLUCIÓN**

*Claudia Korol**

Fernando Martínez Heredia es el maestro –en el sentido estricto de la palabra– de varias generaciones de militantes-intelectuales que intentaron pensar y hacer la revolución en América Latina.

Es conocido el poema del poeta guerrillero salvadoreño Roque Dalton, en el que recuerda sus clases de filosofía en una humilde casa de La Habana con un profesor que lo exasperaba con su sistemática tos, que Fernando arrastra hasta nuestros días. Roque Dalton fue uno de sus discípulos. Clases individuales, conferencias magistrales, reuniones grupales. En el hall de su casa, o en un auditorio universitario. En actos políticos en medio de miles y miles de personas que abrazaban en su palabra la voz de la Revolución Cubana. Un intelectual revolucionario, vuelto intelectual por la obra misma de la revolución. “Sería un error creer que porque nos hicimos marxistas sucedió todo, cuando la verdad es que nos hicimos marxistas por todo lo que sucedió”, escribió Fernando hace muchos años, y repitió al recibir en febrero de este año el Premio Nacional de Ciencias Sociales de Cuba.

Filósofo, abogado, sociólogo... conspirador de revoluciones triunfantes y de revoluciones soñadas. Maestro de un marxismo desafiante, incisivo, despojado de toda concesión al statu quo o a las conveniencias burocráticas. Guevarista en tiempos en que Guevara no era más que una imagen heroica, pero su legado teórico era puesto en sordina. Mariateguiano, cuando el pensamiento del Amauta bordeaba los bordes incluso del marxismo “realmente existente”. Gramsciano en su concepción

* Coordinadora del Equipo de Educación Popular “Pañuelos en Rebeldía”, Coordinadora del Programa de Formación Cogestionada entre Movimientos Sociales y OSAL - CLACSO.

y en su práctica de la revolución como una batalla cultural descomunal contra todas las formas de dominación. Castrista, si por esto entendemos la fidelidad no a una persona, sino a una obra que transformó para siempre las creencias sobre los límites posibles de la acción humana. Ser revolucionario en Cuba fue siempre desafiar las correlaciones de fuerza que supuestamente determinaban la imposibilidad del proyecto socialista.

Fernando Martínez Heredia nos enseñó a diversas generaciones el valor del diálogo creativo, en el que no hay límites posibles para imaginar el cambio del mundo, en el que no hay autoridad que emane de citas o de acumulación de años y estudios. El adultocentrismo tan arraigado en las ciencias sociales, que consagra a intelectuales que sólo se mueven entre “pares reconocidos” académicamente, destinando un lugar subordinado a los jóvenes que interpelan esos saberes, era absolutamente ajeno a Fernando, siempre buscando conectarse con jóvenes, discutir cuestiones apasionadamente, renovando inquietudes y evitando halagos. Debatiendo con la seriedad que merece todo intento de batallar contra las diversas formas de opresión y dominación.

Compartimos así largas horas de charla, de recorrer el continente buscando las novedades que pudieran convertirse en tendencias revolucionarias. Compartimos la aventura de pensar la revista América Libre, en tiempos de contrarrevolución, después de la caída del Muro y de los fetiches que el muro había creado en muchas de nuestras concepciones dogmáticas sobre lo que es y lo que no es el socialismo.

Fernando había criticado desde mucho antes la ortodoxia, el esclerosamiento del marxismo. Por ello no lo tomó de sorpresa su derrumbe, y pudo aportar claridad en tiempos oscuros.

Artífice e hijo de la revolución cubana, no creyó que la teoría pudiera ser un reflejo de las necesidades prácticas de una obra política, por más grandiosa que esta fuera. El pensamiento crítico tiene que soltar amarras para poder revolucionar una y otra vez las creencias construidas en siglos de dominación.

Cuando lo conocí, en 1987, en Nicaragua, Fernando trataba de recuperar, para las nuevas generaciones que asomábamos a la militancia después de las dictaduras latinoamericanas, el pensamiento del Che. Dos años después ganó el premio de Ensayo Casa de las Américas por su libro *El Che y el Socialismo*, una de las obras más significativas en la indagación de los alcances teóricos del pensamiento guevariano.

En uno de esos viajes a Cuba, anduve paseando por las librerías de usados o viejos que hay en La Habana, intentando completar la colección de aquella revista paradigmática que cumple ahora cuarenta años de existencia: “Pensamiento Crítico”, de la cual fue Fernando su director y su animador, junto con los entonces jóvenes muchachos del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana.

En “Pensamiento Crítico” encuentro una y otra vez las claves para compren-

der esa caldera de imaginación, ideas y búsquedas políticas que agitaba a la generación de los '60 en América Latina y el mundo. Porque, coherente con el espíritu internacionalista de la revolución, ahí escribieron latinoamericanos –muchos de los cuales dejaron sus vidas regadas en nuestro continente, en coherencia con lo que decían y pensaban–, y también europeos, africanos, asiáticos. Cambiar al mundo no era una bella frase para los intelectuales militantes de aquel tiempo. Era un compromiso y un desafío.

Cuando en nombre del marxismo predominó el pensamiento soviético post-stalinista, mecanicista, pragmático, y su influencia se hizo sentir en las ciencias sociales y en el propio curso de la Revolución Cubana, la dirección política cerró la revista “Pensamiento Crítico”. Muchos de los jóvenes revolucionarios que encontraban en este foro de ideas un aliento a sus ansias de “incendiar el océano” (como relata Fernando en su discurso de aceptación del Premio Nacional de Ciencias Sociales) sufrieron entonces un fuerte revés. Pero no fueron derrotados. Porque para ellos ser revolucionarios no era una moda. No era una postura para ganar simpatías en la estructura partidaria, o en los eventos institucionalizados del mundo político o académico ligado a la Revolución.

Ellos eran revolucionarios por convicción, por pasión. Revolucionarios de partido. Y partidarios de revolucionar una y otra vez las prácticas y las teorías que comienzan a fosilizarse si se estereotipan o se tornan justificación de un orden y no un desafío de cualquier intento conservador.

Ellos son revolucionarios cuarenta años después. Y lograron tal vez encontrar la manera de serlo, confiando en los ideales, y con un sentido de coherencia que difícilmente podamos encontrar en otros ámbitos.

Fernando Martínez Heredia, pedagogo de la revolución, es un tipo sencillo, un amigo en toda ocasión, un crítico cuando considera que perdimos el horizonte o confundimos el camino, un compa divertido a la hora de romper las solemnidades que enferman de manera terminal los ímpetus de las revoluciones. Es además un intelectual armado. Quiero decir, armado para batallas disímiles, tanto en el terreno de las ideas como en el de las pasiones. Porque él nos enseñó que no se trata de convencer solamente con buenos argumentos, sino que hay que aprender a enamorarse de las revoluciones y a transmitir esos amores, con argumentos y con gestos. Pedagogo del ejemplo. Austero en todos sus actos, públicos y privados.

Personalmente le agradezco la posibilidad de comprender a la Revolución Cubana como una obra esencialmente humana, con sus luces y sus sombras, y como parte de ella, la creación intelectual de la generación guevariana.

Ojalá este premio sirva para que su obra intelectual sea más difundida, más conocida en toda América Latina. Para que nos ayude a seguir formando intelectuales no domesticados. A seguir encendiendo la herejía del pensamiento crítico, en cualquier lugar donde se quiera y se desee cambiar al mundo.

PALABRAS AL RECIBIR EL PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES

*Fernando Martínez Heredia**

Ante todo, un recuerdo emocionado y cariñoso para quien no está hoy aquí, el Premio Nacional del año pasado, Francisco Pérez Guzmán. Panchito fue un hijo de las clases humildes de Cuba, un joven revolucionario que con una tenacidad maravillosa se hizo historiador, y llegó a ser un científico social sumamente destacado, sin perder un ápice de su calidad humana. De pronto nos dejó, abriendo en nosotros un surco profundo de dolor.

Me tomó por sorpresa este premio, el Día de los Inocentes —yo que no lo soy—, y sólo la creí por venir de Edel la noticia, y de Julio Fernández Bulté. Mucho le agradezco al Jurado sus criterios, y la decisión a la que llegó, de otorgarme el Premio Nacional de Ciencias Sociales. Enseguida, una avalancha de felicitaciones me conmovió, pero me trasladó, de la primera y muy personal sensación de alegría por la distinción, a un terreno que me es mucho más familiar: casi todos veían, como yo, que se premiaba la labor y la consecuencia de un individuo, pero sobre todo una posición determinada ante el pensamiento y las ciencias sociales, y ante la relación entre ellos y la sociedad, y les parecía muy bien que eso sucediera. Ya puestos en esa dimensión, varios me dijeron: “nos están premiando a nosotros”, y tenían razón. Además de que eso me tranquiliza —porque no he esperado nunca estos homenajes y no se bien cómo conducirme—, me place mucho ser aquí el

* Doctor en Derecho por la Universidad de la Habana, Presidente de la Cátedra de Estudios A. Gramsci en el Centro Juan Marinello del Ministerio de Cultura de Cuba, Premio Nacional de Ciencias Sociales de Cuba.

representante de esa posición y de tantos buenos hombres y mujeres. Se que estarán de acuerdo si los simbolizo en uno, en Hugo Azcuy Enríquez.

¿Qué decir el día 10 de febrero? Me lo pregunté varias veces, hasta que la inminencia me hizo decidirme. Lo mejor es seguir el orden mismo de las cosas. Por consiguiente, los hechos personales, a los que refiere el Jurado con toda procedencia su veredicto, y mi posición ante el pensamiento y el conocimiento social, que de entrada entiendo como una actividad autónoma y específica, un ejercicio del pensar del individuo, que debe ser más libre que otras tareas suyas, y estar puesta siempre al servicio del cambio revolucionario de las personas y la sociedad.

Al mirar desde aquí un camino que ya es largo, aunque no aburrido, me doy cuenta de que amé la Historia desde que era un muchacho; estudié Derecho porque era lo que debía estudiar, pero me encantó y lo estudié bien, saqué a Keynes de la biblioteca circulante a los 20 años, me hice íntimo de *El Capital* no mucho después, y me fui por las intrincadas veredas de la Economía, urgido por nuestro subdesarrollo y por la lucha contra el sistema imperialista. Hice investigación sociológica de campo acerca de acuciantes problemas cubanos, y leí clásicos de la Sociología en esos mismos años '60. También traté de conocer y valerme de la Psicología Social. Después supe que era ciencia política lo que había venido haciendo desde el inicio con tanto ardor, entre las ideas de Fidel, el Che, Martí, Lenin, Mao, los argumentos de Rousseau y de Montesquieu, y las asechanzas del sectarismo. Pero la Filosofía me emboscó, en el mejor estilo de entonces, me cambió el FAL por un Manual de Konstantinov, y eso dio lugar a una década de combates intelectuales.

No fue por versatilidad que me metí de cabeza en el tan amplio espectro de las ciencias sociales, como ha constatado mi Jurado. Fue por necesidad, y por la gran ambición del proyecto en que he militado desde entonces hasta hoy. “Sería un error creer que porque nos hicimos marxistas sucedió todo, cuando la verdad es que nos hicimos marxistas por todo lo que sucedió”, escribí hace años, y eso es muy cierto. La revolución cubana de los años '60 estaba cambiando a fondo las vidas, las relaciones sociales y las instituciones, y no quería detenerse ante nada. Pese al tremendo trabajo que costaba conquistar los avances de la modernidad, pretendía al mismo tiempo criticar su esencia egoísta y su sentido burgués, y superarla en un nuevo proceso creador, de liberaciones. No podíamos conformarnos con modernizar las profesiones de las ciencias sociales: había que revolucionar esas ciencias, a la vez que se aprendían sus técnicas y sus fundamentos, utilizarlas para investigar y plantear mejor nuestros problemas —durante aquella década se desató en Cuba una verdadera fiebre de investigaciones sociales—, y contribuir así a que los juicios y decisiones de las instituciones y los dirigentes fueran más fundados y mejores. En suma, queríamos trabajar y fundar una ciencia social que fuese capaz de comprender nuestra angustia y nuestra maravilla, de plantear los cómo, de poner ladrillos en

el proyecto, de ayudar a la gran revolución de liberación, y no a una modernización progresista de la dominación.

Esa fue la base de nuestra aventura en el marxismo. Fue difícil, porque no era un asunto académico. El marxismo era la forma más intelectual del proyecto de ser comunistas, satisfacía la necesidad de creencia de un pueblo que estaba abandonando las creencias que habían regido, era la ideología política que pretendía enlazar el núcleo revolucionario de liberación nacional, martiano, de la cultura política cubana, con el socialismo, la apuesta mundial del siglo XX, que había sido bautizado con sangre en Girón. Y era también un territorio en disputa, no sólo intelectual sino en cuestiones de poder. Todo se complicaba en extremo, porque la corriente principal del marxismo en aquel momento lo reducía a una ideología de obedecer, legitimar y clasificar. El grupo de jóvenes al que yo pertenecía —el Departamento de Filosofía de la Universidad, que estaba en la calle K 507, en el Vedado— tomó muy en serio la tarea intelectual que emprendió. El presidente Osvaldo Dorticós nos había reclamado, en 1964, que incendiáramos el océano, aunque, decía, no se supiera cómo hacerlo. Enseguida aprendimos que para esos menesteres hay que andar con fuego. Recordaré solamente a la revista *Pensamiento Crítico*, porque en estos mismos días se cumplen cuarenta años de la aparición de su primer número.

Nosotros la hacíamos, no nos preguntábamos qué era. Recuerdo con cariño a todos los que trabajaron en la revista, a los que colaboraron con ella, a tanta gente tan valiosa de la América Latina para la cual *Pensamiento Crítico* fue un arma en aquel tiempo de armas, a compañeros de Estados Unidos y otros lugares del mundo. Pero como aquella publicación trascendió, y no ha sido olvidada, me permito leer algo de lo que le dije a Julio César Guanache cuando me preguntó, a nombre de mi entrañable *La Jiribilla*, acerca de *Pensamiento Crítico*:

Una de las ventajas de la revista fue la de deberse a la Revolución, pero sin convertirse en una oficina determinada de una instancia específica. Eso le daba la posibilidad de expresarse como revolucionaria, pero sin otra sujeción que la del compromiso libre y abiertamente asumido con la revolución. Opino hasta hoy que, sin esa condición, el pensamiento revolucionario no logra aportar, y no puede satisfacer, por lo tanto, la necesidad inexorable de pensamiento que tiene la política revolucionaria. La revista era polémica, y más de una vez sumamente polémica. De no ser así, no hubiera valido la pena.

Fue un hecho intelectual protagonizado por jóvenes de la nueva Revolución, que tenía como contenido los problemas principales de su tiempo, desde una militancia revolucionaria del trabajo intelectual. Combatí con ideas, con la elección de sus temas y con la presentación de hechos, problemas e interrogantes que las estructuras de dominación suelen ocultar o deformar, sin temor a la crítica de las ideas y del propio movimiento al que entregábamos nuestras vidas, en busca de la

creación de un futuro de liberaciones y bienandanzas. Pensó por ser militante, no a pesar de serlo, y fue una de las escuelas de ese ejercicio indeclinable. Contribuyó a la formación de numerosos revolucionarios y su práctica significó un pequeño paso hacia adelante en la difícil construcción de una nueva cultura. Creo que hizo reales contribuciones al pensamiento y las ciencias sociales cubanos, en varias direcciones y sentidos, pero me parece mejor que sean otros los que entren a valorarlas. En aquellos tiempos, entre todos los involucrados conseguimos hacer retroceder la colonización mental. *Pensamiento Crítico* fue uno más entre los escenarios de aquel combate de ideas.

Participar en esa aventura del pensamiento fue un gran premio. Es cierto que no ganamos, que terminamos mal, pero no fuimos derrotados. Por dos razones. Si uno no se rinde nunca, si no se amarga ni se torna una pieza de museo, conserva intacta su humanidad y puede servir más. Eso he tratado de hacer en todos estos años, tanto en Cuba como en mi patria grande, la América Latina, en tareas intelectuales y en otras prácticas. Sin embargo, la segunda razón es la decisiva. La revolución cubana no se secó, como otros procesos que encontraron sus límites y se enredaron trágicamente en ellos. Sobre estas décadas de su proceso contemporáneo he escrito cientos de páginas y he hablado muchas horas, y no intentaré repetirme aquí. Viva en sus contradicciones, la revolución relanzó el gran desafío en 1985-1992, y demostró su justicia y su fuerza en el peor escenario de crisis económica e internacional posible. Otro es su mundo y es ella misma, a la vez, en estos últimos años en que reafirma su carácter anticapitalista, después de importantes cambios y en medio de una tremenda guerra cultural.

El pensamiento y las ciencias sociales cubanas no tienen suficiente desarrollo frente a los desafíos del presente y el futuro que podemos entrever. Claro que contamos con una masa muy notable de profesionales capacitados y de trabajos muy serios realizados y en curso, tenemos instituciones de investigación y de docencia. Pero el golpe terrible que recibieron hace 35 años todavía pesa sobre nuestro pensamiento y sobre nuestras ciencias sociales, porque aunque una parte de sus efectos negativos desapareció, otra parte permanece y se ha vuelto crónica. Tenemos un déficit notable en cuanto a formación teórica. Los temas principales que la realidad propone no siempre son los que se investigan, los límites que se ponen a las indagaciones, y al conocimiento de sus resultados, son perjudiciales. Llega a ser habitual para muchos limitarse —o limitar a otros— en unos campos en los cuales para ser militante hay que ser inquisitivo, crítico, audaz, honesto, y no temer equivocarse. No me canso de repetir que el trabajo intelectual en disciplinas sociales en una sociedad de transición socialista está obligado a ser muy superior a las condiciones de existencia vigentes; no sirve de mucho si sólo se “corresponde” con ellas. Y el consumo de los productos de una sociedad cultísima acerca de sí misma es dosificado

u ocultado, como si las mayorías no fueran capaces de hacer buen uso de ellos, como si no tuvieran la extraordinaria cultura política de los cubanos, que es la mayor riqueza humana con que contamos.

Pido prestadas al Che dos frases suyas, en aquel debate formidable de 1963-64, cuando dirigentes e intelectuales discutieron cuestiones fundamentales para la vida y el futuro del país en las revistas habaneras: “¿Por qué pensar que lo que **es** en el período de transición, necesariamente **debe ser**?” Y la otra: “No hay que desconfiar demasiado de nuestras fuerzas y capacidades”.

En una sociedad como la nuestra, que ha hecho una apuesta tan colosal hacia el futuro y ha logrado sobrevivir, resistir y avanzar tanto, no repetiremos la división entre élites y mayorías en la producción y el consumo de los productos intelectuales y culturales valiosos que caracteriza a los sistemas de dominación. Soy optimista, pero no me refiero a un logro conseguido, sino a una lucha y un propósito que puede unirnos mejor a los cubanos en nuestra diversidad, darnos más fuerzas que las palpables y constituir la mejor defensa del socialismo, que es profundizarlo. Todo lo importante es muy difícil, y sólo se obtiene combatiendo. Sólo tendremos lo que sepamos conquistar, sólo conservaremos lo que sepamos defender.

Perdónenme entonces que termine volviendo a mí, es que la ocasión lo pide. Siento que lo que he expresado sobre hechos pasados no son recuerdos, es una recuperación de la memoria histórica. Pero lo fundamental para mí sigue siendo lo que me falta por hacer. Es lo más apasionante, lo que más me gusta. Debo hacer más ciencia social con los valores que ella debe tener, ayudar a la recuperación y el avance del pensamiento social en Cuba, y seguir acompañando a nuestros hermanos que luchan, en América Latina y en el mundo. No veo este Premio como un reconocimiento a lo que ya hice en la vida, sino a lo que puedo estar haciendo hoy, y sobre todo a lo que haré en un futuro más bien próximo. Y entonces, por fortuna, deja de llamarse premio y se convierte en una reclamación, en una exigencia de conducta y de productos, en un desafío. Lo acepto, como el premio verdadero. Muchas gracias a todos.

DUDAS Y PRECAUCIONES: ¿DESDE CUÁNDO HUBO CLASE OBRERA EN LA ARGENTINA?

Adrián López*

El libro de Kautsky acerca de los precursores del socialismo moderno tiene un examen “(...) muy insuficiente del desarrollo y del papel desempeñado por los elementos desclasados, (...) parecidos a los parias, que estaban completamente fuera de la organización feudal, (...) que aparecen (...) en la fundación de cada ciudad y que constituyen la parte baja de la población privada de todo derecho (...) (Habla) de proletarios –la expresión es dudosa e (incluye) a los tejedores (...)”
Friedrich Engels

“(Es ...) muy frecuente encontrar el término estructura aplicado a una variedad de fenómenos (...): estructura ocupacional, estructura de clases, (...) etc. (Se) deben tener en cuenta varias dimensiones y no una sola (...)”
Gino Germani

“(Encuentro) en una dialéctica (...) muy sutil ese grano de pimienta (necesario)”
Valentín Marcel Proust

I. Relevamiento de las “tomas de posición”

A partir de una de las últimas cartas del entristecido Engels, es factible concebir (tal como lo demostré exhaustivamente en una ponencia anterior –López, 2005)

* Dr. en Humanidades con Orientación en Historia, Prof. Adjunto interino de *Sociología*, Carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta (UNSa.), Salta capital, Pcia. de Salta, Argentina.
E-mail: edadrianlopez@yahoo.com, edadrianlopez@gmail.com

que los excluidos con necesidades en continua negación son un ejemplo concreto de individuos que no se integran a las clases (Marx y Engels, 1975: 425), pero que hay que tener en el horizonte. Y sin embargo, desearía comenzar casi abruptamente con *dos* advertencias, una de las cuales funcionaría incluso contra este *boceto*: 1) no vengo a polemizar resultados de incursiones empíricas contraponiendo documentos, investigación de archivo y datos novedosos, puesto que no soy especialista en un tema en el que “improviso”; 2) anhelo sugerir la necesidad de una *reinterpretación* de los avances en un terreno ya despejado. Bien decía Marx que la teoría es la que indica las líneas de indagación que continúan sin abordarse; en su “ausencia” se tienen pésimos proyectos (Marx, 1975 a: 94). Se cae en una mera “hechología” (Vilar, 1974: 37) o coyunturalismo (Vilar, 1974: 49).

Y sin que lo anterior implique subestimar el trabajo arduo, pausado, agotador, del historiador que, solo o en equipo, escarba documentos, estimo que las tempranas conclusiones de un sociólogo conservador del carácter de Gino Germani condujeron, entre otras consecuencias, a negar la existencia de una clase obrera actuante en la Historia Argentina y, por reacción casi “militante”, a una rehabilitación de su protagonismo no exenta de algunos *anacronismos*. Enumeraré unos pocos, a los fines de que sean sistematizados los ítems que me surgen rebatibles y que requerirían de un enfoque divergente:

- 1) se puede hablar de “clase obrera” desde 1800 o a más tardar, 1840. Verdad es que se constatan desarrollos desiguales y períodos distintos, pero en lo fundamental, es adecuado identificar sectores proletarios desde la fecha indicada;
- 2) la población ocupada con salarios creció de forma continua;
- 3) las primeras huelgas registradas, como las de 1879, son de obreros expoliados por el capital;
- 4) es factible hablar de “capitalismo argentino” antes de 1900¹.

1 Sin adentrarnos en una polémica ardua, éste parece ser el planteo de algunos historiadores argentinos que sostienen, enfáticamente, que en la campaña de determinadas regiones muy dinámicas, como la del Litoral y la de Buenos Aires, había un mercado ya capitalista o con hondas tendencias capitalistas.

Ante sentencias de tales proporciones y que impactan en la caracterización del capitalismo, de su dinámica y de su historia en nuestro país, optamos por la prudencia de discutir previamente, y aunque sea muy engorroso, qué entenderemos por las categorías en escena y cómo las usaremos, paso previo que casi siempre se omite. Sencillamente, se avanza empleando los conceptos y entonces se cae en un uso de “sentido común”.

II. Discusión con el modo “axiomático” con que se presenta el problema

La primera aserción supone que es obrero explotado por el capital el que cuenta con un salario, lo que no es correcto no sólo porque puede haber trabajo asalariado pre-capitalista, sino en virtud de que pueden encontrarse obreros asalariados que no sean subordinados por el capital y que, en consecuencia, sean lo que Marx denomina “trabajadores improductivos” (cf. López, 2005; Marx, 1971: 213, 430, 464). Estimamos que, si efectuásemos el porcentaje de la población que recibía una paga en salario *in stricto sensu*² de 1780 a 1920, arribaríamos a que la masa de obreros explotada por el capital en el **sector de la producción** era *insignificante*; los asalariados de entonces podrían ser mejor descritos con la categoría de “obreros improductivos” (f. i., de los rasgos de los empleados en determinados comercios –Marx, 1974: 349) y a los sectores independientes (como el personal de las fuerzas armadas –Marx, 1971: 429/430). Los segmentos “medios” de la época eran:

- trabajadores propietarios (como los artesanos medios y pobres, algunos panaderos, etc. –Marx, 1971: 459, 461),
- propietarios obreros (al estilo de los campesinos medios y pobres –Marx, 1971: 434, 459, 461),
- o poseedores de fondos que se reproducían por una vía denominada “patrimonial” (Marx, 1971: 467-468, 476). En la terminología del autor del vol. I de los *Grundrisse*, éste sería el caso de “empresarios” como los tipógrafos, dueños de imprentas de 1890 o los comerciantes al menudeo.
- la vía “patrimonial” suele distinguirse del capital mercantil (Marx, 1971: 476 –a lo enumerado, hay que agregar un porcentaje de población “inactiva” y a los “parias”³ en sí, los cuales son determinadas fracciones del

2 Aunque pueda resultar obvio, sería oportuno recordar que no toda paga en dinero es retribución en salario. Hay casos históricos en los que la parte del producto que un “agente” se apropia a través de una paga en dinero, no adquiere los rasgos específicos de un salario. Es la situación especial de los jubilados y pensionados, pero no sólo de ellos...

Asimismo, no toda retribución en salario implica tarea asalariada capitalista: aunque sin duda puede resultar discutible, es viable comprender que la labor asalariada de los empleados del Estado no es trabajo asalariado en sentido capitalista y por eso, son conceptuales en tanto “obreros improductivos”.

3 Conocemos el planteo de intelectuales “pseudomarxistas” como Gorz, que sostienen que hay ramas de actividad que gestaron una “no clase” del “no trabajo”. Existen investigadores que aprovechan lo “disparador” que puede haber en la idea rápidamente convocada, para sugerir que los nuevos “vulnerables” no pueden ser encajados directamente en la noción de “ejército industrial de reserva”.

“lumpenproletariado”, mendigos, presos, locos⁴). Dichos segmentos son agentes que son su propio “patrón” (Marx, 1971: 384; Marx, 1975 b: 256, 294).

Cuando todos estos sectores utilizaban mano de obra, no había ninguna subordinación del trabajo al capital, *ergo*, ningún tipo de extracción de plusvalor y por consiguiente, *ninguna* explotación de obreros con sentido capitalista. Incluso, podía existir un funcionamiento en el plano comercial que hiciera aparecer el dinero/patrimonio con el aspecto de capital (remito al caso especial de los tipógrafos), pero sin que el propietario o los poseedores de la unidad de producción fuesen capitalistas ni siquiera en el universo de los “pequeños” o “medianos”.

A pesar de ser materia de debate, sentaremos posición: una buena cantidad de la supuesta “no clase” del “no trabajo” son integrantes de los “sectores independientes” y hasta cierto punto, de los “obreros improductivos” y de determinada población “inactiva”.

En cuanto a los desocupados que abultan el “ejército industrial de reserva”, estos son parte de la clase obrera puesto que son potencialmente explotables por el capital; se diferencian de sus compañeros de ruta, por no ser activamente expoliados por el valor autócrata. Sin embargo, no todos los desocupados son miembros de la clase obrera en tanto que “ejército industrial de reserva”: habrá algunos que integren los excluidos y habrá otros que serán población inactiva.

De cualquier modo, los “desembragues” que nos vemos obligados a efectuar son una demostración de que se tiene que ser extremadamente cuidadoso a la hora de apelar a ciertas categorías.

- 4 Así y tal cual lo hemos aconsejado en otros escritos (López, 2006; López, 2007 b), obtendríamos “conglomerados” de individuos que se “aglutinarían” acorde a “grupos de interés”, divididos en:

I. {Conjuntos hegemónicos “=” [clases dominantes (rurales y urbanas) “+” obreros improductivos privilegiados (altos funcionarios, etc.) “+” sectores independientes acomodados (personal jerárquico de las fuerzas armadas, artesanos económicamente “exitosos”, etc.) “+” % de población económicamente “inactiva” con un acceso diferencial al consumo (jubilados, niños de familias integrantes de los subconjuntos enumerados, estudiantes que reciben o no estipendios “especiales” y abultados, y que provienen de las disímiles “unidades domésticas” o de parentesco de los segmentos en análisis, etc.)]};

II. {Grupos subalternos “=” [clases dominadas (los que son fuerza de trabajo gestora de excedente y los desocupados que integran el “ejército de reserva”) “+” laborantes improductivos no destacados (empleados de bajo rango del Estado) “+” sectores independientes no privilegiados (artesanos, campesinos medios y pobres, algunos segmentos del lumpenproletariado, etc.) “+” % de población no económicamente “activa” con dificultades en el usufructo de bienes de consumo (jubilados, pensionados, niños que no trabajan y que son de familias no pertenecientes a los conjuntos dirigentes, ancianos sin estipendio alguno y relativamente desprotegidos, alumnos sostenidos por sus familias e insertos en desiguales niveles de enseñanza, etc.) “+” “excluidos” (determinados sectores del lumpenproletariado, “locos”, presos, mendigos, etc.)]}.

Frecuentemente, tales grupos suelen estar invaginados con miembros de segmentos sociales que provienen de contextos pre-capitalistas; éste fue el caso de la región en 1870.

Mas esto no excluye que podamos encontrar rastros de pequeños empresarios que, siendo trabajadores propietarios, posean una baja composición orgánica de capital (Marx, 1975 b: 294), obtengan ganancias elevadas por ello y que acaben por ser los primeros “escalones” de la burguesía (sin embargo, *no explotaban* a terceros sino que realizan el excedente proveniente de otros planos –vg. del campo, etc.). Es más, si llegaban a emplear a asalariados que (al no ser clase) eran obreros improductivos, incrementaban sus dividendos reduciendo los costos del negocio, esto es, abonándoles a sus dependientes un salario menor del que necesitaban para vivir (Marx y Engels, 1975: 205).

La “salarización” constante de los individuos no es pues sinónimo de una profundización de la inclusión del trabajo en la esfera del capital **en el** proceso de producción. Bien puede indicar (y eso es lo que creemos que ocurrió en lo que se constituirá tardíamente como “Argentina”) la “simple” monetarización de la economía y el continuo abultamiento de obreros improductivos y sectores independientes. De ahí que las primeras huelgas registradas en los archivos no tengan carácter de protesta obrera contra un sometimiento considerable del valor autócrata, sino que hayan sido emprendidas por agentes asignables a los obreros improductivos o a los sectores inter/medios. Por qué habrá sucedido algo así, es cuestión que hasta ahora no nos resulta investigada a fondo: se asume de manera muy rápida que son una especie de “vanguardia”, acicateada por el anarquismo, las tempranas formas de socialismo y de anarco-sindicalismo, sin cuestionar las “evidencias” de un sentido común académico, que homologan lucha por mejora salarial, con lucha de clases. Actualmente, los empleados del Estado (que no son clase obrera que valoriza capital) llevan banderas de recomposición salarial, pero no por ello son una clase⁵ inserta en la lucha de clases contra el capitalismo (reconocemos que la afirmación es conceptualmente muy discutible).

5 Esta forma de razonar nos costó no únicamente publicar nuestras ideas por la enorme resistencia de las “camarillas” o “endogrupos”, que acaparan recursos de variada índole al interior de las academias y que ejercen contra los “disidentes” sin “protección” hostigamientos múltiples, sino que nos llevó al “ostracismo” intelectual en el seno de la militancia, puesto que los partidos de izquierda tradicionales y de orientación leninista, sopesan un “escándalo” lo que argumentamos.

Ajustándonos a la letra de lo que glosamos, no podemos conceder que los profesionales (médicos, abogados, arquitectos, contadores, ingenieros, etc.) sean entendidos como “clase media”, cuando son en su mayoría “obreros improductivos no privilegiados”; tampoco es viable aceptar que los atareados en el seno del Estado (maestros, administrativos, profesores, jueces, abogados, secretarios, diputados, senadores, concejales, ministros, etc.) y en algunos sectores del comercio, sean concebidos con el carácter de “clase obrera”, cuando son por igual “trabajadores improductivos destacados” o “no acomodados”, según la circunstancia.

Sin embargo, para enfocar el difícil problema de las huelgas, se revela pertinente el categorema “grupos subalternos” (ir a nota 1): parece ser que estos también gestan acciones que se oponen al dominio de los grupos dirigentes. *Of course*, la intervención de tales nociones no supone que la “tradicional” lucha de clases se vería desplazada y/o reemplazada por un conflicto “más general” que ocurriría entre grandes grupos.

III. Una posible “actualización” de los términos del debate

Dado lo que argüimos, querríamos postular si no es viable pensar lo que se escribió en investigaciones puntuales y monográficas, como sigue (evitamos las referencias bibliográficas actuales para esquivar la a veces ineludible incompreensión de los deconstruidos):

A. Desde 1780 a 1920, el despliegue del capitalismo en la esfera de la producción es insignificante, *comparado* con el volumen de inversiones en la esfera de la circulación. Se trata de un capitalismo en ciernes y cuya **preponderancia** se encuentra en el capital mercantil, incluso en los segmentos agrícola-ganaderos de 1880 a 1920. Que se perciba una crisis como la de 1890 no contradice lo anterior, puesto que es factible una crisis cíclica en el estrato de la circulación. Se trataría, en esta “fase”, de un despliegue de actividades capitalistas de rasgos comerciales en un “parergon” con escaso desarrollo del capitalismo, o cercano a nulo.

No obstante, la cuestión de los “orígenes” del régimen burgués en Argentina no es un “nodo” menor. Casi siempre, se confunde la existencia de capital de circulación (capital-mercancía y capital-dinero –que en la fase de la colonia tenía el aspecto de préstamos usurarios) con capitalismo y capitalistas. Por un lado, que haya capital de circulación (Marx, 1983 b: 180/181) no indica que haya también orden burgués; como es conocido, puede haber capital de circulación en sistemas pre-capitalistas (Marx, 1971: 476). Por el otro, que respire el capital citado no supone la existencia, por inaudito que parezca, de capitalistas.

En el vol. I de los *Borradores*, Marx advierte que no se podría hablar de capitalistas en la Roma clásica (ibíd.). En *Teorías sobre la plusvalía*, sostiene que en dicha etapa encontrábamos ciertos emprendimientos comerciales (al estilo de la cría de peces y de aves exóticas) que se basaban en capital de circulación (Marx, 1975 a: 450). Si unimos ambos asertos, obtenemos que los propietarios (individuales o colectivos) del capital de circulación involucrado no tenían que ser necesariamente capitalistas. De hecho, bien es posible que una fracción no desdeñable de la ganancia lograda la destinaran a consumo suntuario o a simple atesoramiento.

Igual de desconcertante puede resultar que existan mercancías circulantes pero

sin que éstas sean capital-mercancía, ni siquiera en el débil sentido anterior. En efecto, el amigo del educado empresario de Manchester opina que la mercancía comercializada por mercaderes de pueblos en los que no es adecuado hablar de “capital comercial”, no es capital-mercancía sino mercancía que circula (Marx, 1971: 192/193). Y es que, en cierta manera, los valores de cambio son mercancías *in stricto sensu*, en el modo burgués para suscitar riqueza (Marx, 1983 b: 94).

Por ende, es imaginable que gran parte de la fase ubicada entre 1780 y 1920 se caracterice por capital de circulación que crece en un contexto pre-burgués (sin entrar en el arduo y no concluido debate acerca de si era feudal, “mixto”, etc.), y en el que se autonomiza capital sin capitalistas. Incluso, en el que detectamos mercancía circulante sin que haya capitalmercancía. Cabe aguardar que estas dos últimas “anomalías” o “rarezas” (que son tales para una academia empecinada en ocluir el pensamiento de Marx), se fueran disolviendo a medida que nos aproximábamos a principios del siglo XX. Mientras, pulularon casi infinitas formas híbridas⁶ (que exceden las que enumeramos), puesto que únicamente con suma dificultad el capital las diluye para constituir un mercado interno, adecuado a su lógica intensiva (Marx, 1971: 475).

Es factible que las pocas ramas de actividad enclaustradas en la esfera de la producción que pudieran tener el aspecto de tareas que valorizan capital, se desplegaran en un “entorno” acosado por la omnipresencia de actividades pre-burguesas y por el dominio del capital de circulación, en particular, del capital-mercancía. En este punto, cabe indicar que el paso del dinero de préstamo usurario al capital financiero propiamente dicho, acaso ocurre en torno a la caída de Rosas. Por lo tanto, a partir de ese momento el terreno está despejado para la formalización de un Estado-nación que se endeudara y que protegiera los privilegios de los grupos dirigentes, entre los que se destacaban los capitalistas provenientes de la esfera de la circulación.

Ahora bien, entre los primeros tendidos de las vías férreas y la aparición de los tranvías, comienza a gestarse un capitalismo *complementario* que se reproduce en la explotación de los servicios. Pero si recordamos que para Marx el usufructo de

6 Precisamente, lo que discutimos es que estas formas “híbridas” de estratificación sean forzadas por los marxistas ortodoxos, a ser clasificadas en las nociones tradicionales de “clases” o por el contrario, que se vean impelidos a “ampliar” las categorías, que ya no significan lo que significaban ni son históricamente útiles. Para evitar concebir a los comerciantes al menudeo, a los usureros casi “invisibles” y a una multitud de poseedores de dineropatrimonio, en calidad de “clases”, y para esquivar englobar a los empleados de las imprentas, etc., en tanto que obreros explotados por el capital, es que hay que recurrir a una teoría de los grupos que enriquecería la teoría de las clases. Sin embargo, ambas se hallan en Marx; había que poseer la suficiente paciencia para “despejar” la teoría de los grupos.

las comunicaciones no es una ganancia “típica”, o sea, proveniente de la extracción de plusvalía, sino que se alimenta del *interés*⁷ (Marx, 1972: nota tachada al pie de la p. 14; pp. 20, 22), no encontramos aquí subordinación alguna de trabajo al capital.

Por supuesto, ello no indica que no existieran unidades de producción de carácter capitalista, *id est*, que subsumieran trabajo de cierto modo. Sin embargo, también un volumen significativo de tales unidades era del llamado “sector primario”, en particular, agrícola-ganadero, que explotaba de forma pre-capitalista la mano de obra y que reproducía la lógica del capital en la esfera de la circulación. Al parecer, las unidades dominantes en las que la reproducción se asentaba en el plano de la producción respondían a los imperialismos de turno (inglés, primero, norteamericano, después).

Así las cosas, en el campo:

1. la población que podía ser caracterizada como jornalera y en cuanto clase dominada rural, explotada en un sentido capitalista, era ínfima;

2. había un porcentaje sustancial de campesinos medios y pobres. Se ubicaban entre un proceso circulatorio simple y una economía de corte patriarcal (Marx, 1971: 372). Empero, quizá no eran superiores en número a las clases dominadas pre-capitalistas del campo. De hecho, una fracción de los campesinos citados podían atarearse ocasionalmente y de este modo, engordar el número de las clases dominadas rurales. Estos sectores y otros (que no mencionamos para no agobiar con una “antología” de palabras frías), pudieron huir de su primitiva situación y convertirse, poco a poco, en burgueses dado que no hay que prejuiciar que sólo eran capaces de lograr ese “transformismo” los agentes de los grupos hegemónicos; son también aptos los de los grupos dirigidos (Marx, 1971: 421, 430);

3. los terratenientes eran ociosos y no se arriesgaban a “empresas” como las de los mataderos (que afloran hacia 1780 y que adquieren su auge entre 1830 y 1860), o a la cría de animales y al cultivo. Estas últimas operaciones se las dejaron a intermediarios que eran pequeños y medianos capitalistas, que apenas sobresalían desde la asfixiante circulación simple, al “respiradero” que es el “espacio” que

7 Aunque es algo osado, a partir del postulado imaginamos que quizá se podría imaginar que la ganancia en los sectores estratégicos de los hidrocarburos sea un beneficio que provenga del interés, y no de la renta ni de una formación de los precios “típica”. Si ello fuera de esta guisa, acaso sería factible entender por qué la “tasa” de lucro en el sector mencionado se mantuvo elevada: no sólo porque no había tasa de ganancia, dado que al igual que con la renta ésta no se constituye en las ramas en las que hay interés, sino a causa de que era y es un segmento de actividad monopólica por su carga esencial para el resto de la economía. En consecuencia, el sector de los hidrocarburos y combustibles es una esfera de ocupación que ayuda a evitar la caída de la tasa de beneficio de otras ramas industriales.

requiere un capital que se valoriza; por eso estaban subordinados a mercaderes de mayor poder.

4. Tal cual lo hemos sostenido, si había unidades que explotaban con rasgos capitalistas a trabajadores, lo hacían en un contexto pre-capitalista marcado que, junto con el predominio del capital de circulación, era el que dictaba los ritmos históricos.

En las ciudades, la creciente variedad de actividades monetarizadas (que tampoco quiere decir “asalariadas”) no respondía a la formación de una clase obrera urbana *explotada* por el capital. Los que participaban de tales actividades eran asignables, en una abrumadora mayoría, a los obreros improductivos y a los sectores independientes.

Pero, ¿de dónde provenía el dinero para financiar a tantos sectores que no pertenecían a la estructura de clases de la época? De la conversión del excedente pre-capitalista en billetes, de la ganancia comercial realizada por los burgueses locales y por los capitalistas exportadores e importadores, de la demanda creciente de empleados para los diversos niveles del Estado en formación, de los impuestos cobrados, del comercio al menudeo que seguía cadencias pre-burguesas, de los múltiples oficios⁸ que intensificaban la monetización, etc.

B. Y si lo que exponemos es probable, cabría sostener que la clase trabajadora argentina, más allá de la organización sindical (que no es prueba de su existencia), y allende las huelgas (lo que tampoco es demostración convincente de una lucha de clases entablada **entre** capital y trabajo), recién comenzó a conformarse mucho más tarde de lo que los investigadores contemporáneos, animados por un enfrentamiento epistemológico y político contra “fundadores” del tono de Germani o contra postmodernos que celebran el fin de la clase obrera (como el Toni Negri que habla de “multitudes” en lugar de clases), estarían dispuestos a aceptar.

Arrojamos a la arena del debate que acaso se pueda afirmar que el peso significativo (y subrayo el lexema) de una clase obrera en gestación haya advenido luego de 1917, pues recién entonces se podría hablar de un continua preponderancia

8 Siendo que no es fácil diferenciar entre “artesanos” (que son el “paradigma” de los trabajadores propietarios) y “hombres de oficio” (albañiles, maestros mayores de obra, carpinteros, herreros, caballeros, leñadores, etc.), conviene separarlos.

Luego de una ardua polémica con el voluminoso texto de Thompson que versa sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra (López, 2007 a), concluimos que los “hombres de oficio” (algunos de los cuales pueden ser “obrerros improductivos” –sastres, costureras, modistas, etc.) son una clase de trabajadores independientes que buscan su dinero y lo retienen en calidad de patrimonio/dinero.

de la esfera de la producción, por encima de la asociada a la circulación, en la reproducción del capital. Entonces se podría pensar en un capital productivo, rural y urbano, que compitiera **con éxito** contra el prolongado dominio del capital comercial y del que se incrementa apelando a servicios. *Of course*, entendemos que una clase obrera madura en sus conflictos con el capital se encuentra activa a partir del populismo peronista. Empero, y aunque emerja escandaloso, el tránsito complejo, sinuoso, intrincado, de la subordinación formal del trabajo al capital a su inclusión real, no acontece siquiera en el segundo gobierno peronista, sino con la estrategia diferencial de acumulación que fue el desarrollismo. Particularmente, esto es notable en el interior del país.

La anterior tesis proviene de que entendemos que el capitalismo no se despliega según los ritmos dictados por una subsunción real del trabajo al capital, sino a principios del siglo XX en una buena parte de los países que constituyen el centro de su expansión (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania), y que esa subyugación del trabajo al capital, se universaliza lentamente, a mediados de la pasada centuria (cf. *infra*).

Concebido de esta manera el modo de producción burgués, resulta que es una forma de producción *joven* y no madura; en todo caso, **apenas** está arribando a la madurez, por lo que no estamos en ningún tramo final y catastrófico de la actual manera de organizar la génesis de tesoro, tal como lo creen la mayoría de los partidos de izquierda tradicionales y algunos historiadores “filomarxistas”⁹ de la estatura de Wallerstein.

IV. Una pregunta que regresa

Continuando con esta discusión casi “apriorística”, podemos esgrimir:

C. Que estamos persuadidos de que esta peculiaridad del orden capitalista en Argentina se debe, entre otros factores, a que fuimos (y somos aún) la periferia en un régimen que logra penetrar, a partir de 1920, a zonas pre-capitalistas que habían sobrevivido a los jalones expansivos del imperialismo temprano (1860-1914). Compartimos el aserto de investigadores que aseguran que el capitalismo no pasa de la subordinación *formal*, en tanto hegemónica, a la *real*, sino en la fecha aconsejada.

9 El actualizador de Braudel es más bien un representante de izquierda de la timorata *Escuela de los Annales*, antes que un marxista que no se embarca en la deconstrucción perniciososa de Marx, al que Wallerstein deshilvana a tal extremo, que de él no queda nada que permita la autoasignación en calidad de marxista o marxólogo.

En un contexto tardío de despliegue capitalista a escala planetaria y que liquida en gran parte formas pre-burguesas, no puede ocurrir distinto en los márgenes (Argentina) de una periferia que sigue respondiendo a su empobrecimiento en el sector II (Marx, 1983 b: 362-363).

Sin embargo, las marcas de un despliegue singular del régimen capitalista en Argentina todavía se dejan sentir, por cuanto es el capital de circulación el que le fija las condiciones de mercado y la política económica al capital productivo. Aunque parezca evidente, la instauración, profundización y extensión del *statu quo* burgués no siguió la vía industrial inglesa; por consiguiente, es un sinsentido histórico hablar de clase obrera (desde el punto de vista del proceso de producción) antes de 1917 ó 1920, que fue la fecha en la que el capital productivo, tal cual lo hemos resaltado, pudo forcejear con el capital de circulación que lo había subordinado permanentemente a su lógica. Así y todo, ¿desde cuándo hubo clase obrera en la Argentina?¹⁰

D. En lo precedente, no se niega que, como lo hemos explanado, la monetarización de la economía y la generalización (lenta) del salario haya ocurrido antes, acaso previa a los tipógrafos.

E. Por último, los matices respecto a cuándo sería oportuno hablar de “clase obrera” explotada o potencialmente explotable por el capital, no supone negar que en la Argentina disputada por los distintos imperialismos de turno, no haya habido lucha de clases ni clases dominantes y dominadas¹¹. Las hubo pero de rasgos pre-burgueses. Es perfectamente plausible que existiera un capitalismo mercantil (combinado luego con el de uso de servicios), que no implicara la contrapartida de capital productivo y por lo tanto, clase obrera. Creemos entender que tales conclusiones no nos hermanan con los post-modernos ni con los variados críticos de Marx que vitorean en bello coro la muerte de la revolución, de la clase obrera, de las ideologías, y celebran con un júbilo sospechoso e histórico la “incuestionable” superioridad

10 ¿Luego de tanto andar, una “vacilación”?

En un marxismo apresurado, se tradujeron las palabras alemanas vinculadas a “weisse” como “método de exposición” y “método de investigación”, cuando es probable otra alternativa: “‘estilo’ de ‘escenificación’” y “‘estilo’ (crítico) de preguntar y formular problemas”. Herederos de la tradición deconstructiva que “inaugura” Marx, no pretendemos ni la verdad ni la soberbia de los descubrimientos, sino la inquietud de las cuestiones abiertas y de las preguntas. Bien decía el nacido en Tréveris que había que dudar de todo, incluso de la duda misma...

11 Sostenemos los dos términos, puesto que hay “marxistas” como el historiador weberiano Edward Palmer Thompson que “argumentan” que es posible el caso histórico de lucha de clases sin clases (!).

dad del capitalismo como experiencia de vida y en tanto estrategia para conducir los destinos de la especie.

Y es que nos surge que no sería exagerado opinar como Vilar respecto a que una renuncia a Marx (con mayor razón cuando no se lo frecuenta lo necesario), es una renuncia al pensamiento histórico y a la Historia misma (Vilar, 1974: 65, 76). Todas las corrientes que integran la post-modernidad en cuanto Pensamiento Único (como “manifestación” cultural del capitalismo “tardío”¹²), son los testimonios ideológicos y existenciales de una clase que se siente amenazada (Vilar, 1974: 28).

Obras consultadas

- Assadourian, Carlos Sempat *et al.*: *Modos de producción en América Latina*. Pasado y Presente, Córdoba, 1974.
- Castells, Manuel: *La era de la información: economía, sociedad y cultura. La sociedad red*. Vol. I. Siglo XXI, México, 1999 a.
- Florescano, Enrique (comp.): *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina. (1500-1975)*. FCE, México, 1975.
- Garavaglia, Juan Carlos: *Mercado interno y economía regional*. Grijalbo, México, 1983. *Sociedad, economía y regiones*. Ediciones La Flor, Buenos Aires, 1984.
- Germani, Gino: *Política y sociedad en una época de transición*. UAM, México, 1966.
- López, Edgardo Adrián: “Semiótica y Materialismo Histórico: una confluencia oportuna para la teoría de los grupos sociales”, en *Revista 4. Escuela de Historia*. Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa.). Talleres Gráficos M. G., Salta capital, Año 4, vol. I, Nº 4, año 2005: 267/286, Pcia. de Salta, Argentina.
- *Historia, Semiótica y Materialismo crítico. Segmentaciones sociales y procesos semióticos: la dialéctica base-superestructura*. Tesis Doctoral dirigida por el Lic. Juan Ángel Ignacio Magariños Velilla de Morentin. Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa.), Salta capital, Argentina, 2006. Aceptada para su publicación en formato digital en la página web de la universidad, a cuya institución se le cedieron los derechos de autor (Res. Rectoral 1188/06). ISBN 978-987-9381-86-1, 1. Educación Superior, I. Título, CDD 378.
- “Comentario crítico a la *Formación de la clase obrera en Inglaterra* de Edward Palmer Thompson”. Ficha de cátedra, 2007 a. Inédito.
- “Descripción *tentativa* de los grupos sociales pertenecientes a dos zonas rurales de la

12 No hay tal capitalismo “postindustrial”, “postburgués”, o de la sociedad “informativa” (Castells, 1999 a), etc. Tampoco hay “datacapital”, “teletrabajo”, etc., en cuanto presuntos fenómenos que pondrían en crisis la teoría del valor de Marx (que *no es* ricardiana). Aunque debiéramos enunciar algo más que una negación que asoma sencillamente “militante”, al no contar con el espacio necesario sólo nos cabe decir que aquellos son términos para desplazar a Marx y a cierto marxismo, con la “excusa” de “afinarlo”, “completarlo”, entre otras operaciones retóricas conservadoras y/o reaccionarias.

- Alemania de 1890: una discusión con la interpretación weberiana”, en proceso de evaluación en la *Revista 6. Escuela de Historia*. Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa.), 2007 b.
- Marx, Karl Heinrich y Engels, Friedrich: *Correspondencia*. Cartago, Buenos Aires, 1975.
- Marx, Karl Heinrich: *Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política. Borrador (1857-1858)*. Vol. I. Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.
- *Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política. Borrador (1857-1858)*. Vol. II. Siglo XXI, Buenos Aires, 1972.
 - *Teorías sobre la plusvalía*. Vol. I. Cartago, Buenos Aires, 1974.
 - *Teorías sobre la plusvalía*. Vol. II. Cartago, Buenos Aires, 1975 a.
 - *Teorías sobre la plusvalía*. Vol. III. Cartago, Buenos Aires, 1975 b.
 - *El capital*. Vol. II. Cartago, Buenos Aires, 1983 b.
- Proust, Valentín Marcel: *En busca del tiempo perdido 5. La prisionera*. Alianza, Madrid, 1998.
- Rofman, Alejandro B.: *Desigualdades regionales y concentración económica. El caso argentino*. Siap, Buenos Aires, 1974.
- Thompson, Edward Palmer: *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Vol. I. Crítica, Barcelona, 1989 a.
- *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Vol. II. Crítica, Barcelona, 1989 b.
- Vilar, Pierre: *Marxismo e Historia. Polémica con Louis Althusser*. Ediciones PRAXIS, Buenos Aires, 1974.

KIRCHNERISMO: EL POPULISMO COMO FARSA

*Alberto R. Bonnet**

La celeberrima frase con la cual Marx abre *El Dieciocho Brumario* afirma que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa, y la historia del populismo autóctono no es excepción a esta regla. Se repitió una vez como tragedia. En 1973, treinta años después, regresaron el líder y sus discursos, aunque con la voz un poco más cascada, y los descamisados, aunque convertidos en monotoneros; la soberanía política y la independencia económica regresaron como nacionalización de la banca y el comercio exterior, y como alguna distancia respecto de los organismos financieros internacionales; la justicia social, como la mitad del ingreso para los trabajadores; el capitalismo nacional, con cara de Gelbard y cuerpo de CGE. Pero ni las clases ni las relaciones de fuerza entre esas clases eran las mismas que treinta años antes, y estalló la tragedia.

Y la historia se repite, otra vez, como farsa. En 2003, otros treinta años después, el líder parlotea en falsete, los monotoneros sobrevivientes devinieron funcionarios y los asesinados por la dictadura piezas de museo; la soberanía política y la independencia económica consisten en desendeudarse pagando a los acreedores y en reprimir a las privatizadas, supermercados, petroleras y frigoríficos de tan malos comportamientos; la justicia social regresó como la mitad de los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza; el capitalismo nacional, con cara de Lavagna y cuerpo de UIA. Entre ambas repeticiones, ciertamente, el populismo autóctono había sufrido algunos reveses —el Rodrigazo del '75, la Guerra de Malvinas del '82, el Menem del '89—, que ayudaron a esa conversión de la tragedia en farsa. Pero aquí nos limitaremos a hablar de esta farsa, es decir, del kirchnerismo.

* Docente e investigador de la UBA y la UNQui en temas de Economía y Ciencias Sociales.

El escenario de la farsa

Volvamos por un instante a la situación política vigente inmediatamente después de las elecciones presidenciales de abril de 2003, para entender el escenario en el que se representaría esta farsa. Esas elecciones habían puesto de manifiesto el éxito alcanzado por la administración provisional encabezada por Duhalde, que las había convocado, desde un doble punto de vista. Desde el punto de vista del régimen, porque habían restaurado la continuidad de una democracia capitalista impugnada en el proceso de luchas sociales que había conducido a la insurrección de diciembre. Habían ratificado que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y desde el punto de vista del propio gobierno, porque habían resultado en la imposición de su delfín. Habían ratificado que el partido justicialista y su candidato eran los únicos en condiciones de gobernar. Y ambas cosas, ciertamente, a la sombra aún de esa insurrección de diciembre de 2001.

Revisar las características que revistieron esas elecciones, desde los niveles de participación que concitaron hasta sus resultados propiamente dichos, alcanza para poner de manifiesto ese doble éxito que había alcanzado la administración *duhaldista*. El ausentismo del 20% había sido algo mayor al 19,5% registrado en las presidenciales de 1999, en términos absolutos, pero menor en términos relativos, porque indicaba una desaceleración de la tendencia al aumento del ausentismo registrado en las elecciones presidenciales durante los ochenta y los noventa.¹ Y ese ausentismo representaba una notable caída respecto del 26,3% registrado en las elecciones parlamentarias de 2001, especialmente teniendo en cuenta que también en las parlamentarias se había registrado una tendencia al aumento del ausentismo durante los noventa, tendencia que los nuevos datos parecían revertir.² Pero el *voto bronca*, definido como la suma simple entre los votos en blanco y los anulados, había retrocedido mucho más decididamente. El voto en blanco del 0,9% había sido el menor registrado desde las elecciones de 1946, elecciones signadas por la extrema polarización entre peronismo y anti-peronismo, y el voto anulado se había situado en apenas un 1,6%. Este voto bronca, en resumen, había alcanzado un 2,5% en 2003, contra el 4,6% registrado en las presidenciales de 1999, y el extraordinario 21,1% registrado en las parlamentarias de 2001.³ Ahora bien, si el ausentismo y el voto bronca masivos que habían signado las elecciones parlamentarias

1 Los porcentajes de referencia son 14,4% en 1983, 14,7% en 1989, 17,9% en 1995 y 19,5% en 1999. La tendencia que atraviesa estos datos hubiera arrojado, naturalmente, un ausentismo muy superior para el 2003.

2 Los porcentajes de referencia son esta vez 19,1% en 1985, 17,5% en 1987, 19,7% en 1991, 19,7% en 1993 y 21,8% en 1997, considerando exclusivamente las elecciones parlamentarias.

3 Estos datos fueron debidamente remarcados por la derecha (véase por ejemplo R. Fraga, del Centro de Estudios Nueva Mayoría, en *La Nación* 30/4/03).

de octubre de 2001 podían haberse interpretado como una expresión del proceso de luchas sociales que había culminado en la insurrección de diciembre, este retroceso de los mismos en las presidenciales de abril de 2003 debía interpretarse como una expresión del retroceso y del encauzamiento dentro de los límites de la democracia capitalista que esas luchas sociales habían registrado desde mediados de 2002. La masacre impune de Puente Pueyrredón había señalado, de alguna manera, un retroceso de las luchas y, a la vez, un adelantamiento de las elecciones.

Y también los resultados arrojados por esas elecciones habían revelado el éxito alcanzado por la administración *duhaldista*. El PJ se había impuesto con arriba de un 60% de los votos positivos, entre sus tres fórmulas, y el 22% logrado por la fórmula apoyada por el gobierno había alcanzado para coronar a su candidato como presidente. Aquí, sin embargo, debemos introducir algunos matices. El partido en el gobierno había quedado ratificado como único partido de gobierno y, dentro de este partido, se había impuesto el candidato del gobierno. Pero es necesario precisar de qué manera se había alcanzado este resultado, para precisar las características de la situación política en la que asumiría la nueva administración de Kirchner. En primer lugar, el PJ había quedado ratificado en las elecciones como único partido capaz de gobernar, porque los restantes partidos burgueses se encontraban sumergidos en una crisis aún más profunda que la suya. La Alianza UCR-FrePaSo se había desintegrado rápidamente hacia fines del 2000, mediante la renuncia del vicepresidente y la marginación de los restantes funcionarios *frepasistas*, conforme comenzaba a hundirse su administración. El FrePaSo, como mero *flash party*, se había dispersado desde entonces, dejando huérfanos a sus representantes electos. La centenaria UCR no se había dispersado, ciertamente, pero el hundimiento de su administración la había arrojado a la peor crisis política de su historia. De su tronco se había desgajado una nueva fuerza (Recrear, dirigida por López Murphy) que había arrastrado con éxito a los votantes radicales más derechistas (en sus bastiones de Capital Federal y Córdoba) y conservadores provinciales (en la Tucumán *bussista* o la Mendoza de los *gansos*), alcanzando un 16,4%. Y de su tronco se había desgajado también una nueva fuerza de centroizquierda (el ARI de Carrió) que, aunque con menos éxito, había cosechado una porción de los votantes progresistas de las grandes ciudades, alcanzando un 14,1%. Así, desmembrada y con el cadáver de De La Rúa a cuestas, la UCR apenas alcanzó un 2,3% de los votos en las elecciones. Pero tampoco esas nuevas fuerzas encabezadas por López Murphy (que compartía su electorado derechista con la fórmula del PJ encabezada por Menem) y Carrió (que enfrentaba las dudas del electorado acerca de la capacidad de gobernar de la centroizquierda) estaban en condiciones de ofrecer una alternativa al justicialismo. La relativa fortaleza del partido justicialista, en pocas palabras, era en buena medida un resultado de las debilidades de los restantes partidos políticos burgueses.

En efecto, la situación del PJ tampoco era envidiable. Había obtenido arriba del 60% de los votos, pero sumando los de sus tres fórmulas. Este hecho de que el PJ había

realizado sus elecciones internas simultáneamente con las elecciones generales, sumado al mencionado desmembramiento de la UCR, había convertido a las elecciones de abril de 2003 en las presidenciales signadas por la mayor dispersión del voto de la historia y, por ende, por el menor respaldo otorgado a la fórmula vencedora. Las lógicas políticas de ambos tipos de elecciones son, además, muy diferentes. Si hubiera podido preverse que un PJ unido hubiera ganado cómodamente las elecciones generales, los resultados alcanzados por cada una de las tres fórmulas del PJ dividido dependían, en gran medida, de la porción del aparato partidario de la que cada una disponía.⁴ Esto se había reflejado claramente en los resultados electorales. La fórmula de Kirchner había logrado un triunfo decisivo en la Buenos Aires (y particularmente en los partidos del GBA) aún en manos del aparato duhaldista. Pero esto en contraste con otros grandes distritos urbanos como los de Santa Fe y Córdoba, cuyos aparatos partidarios eran manejados por los ex precandidatos Reutemann y De La Sota, que se habían declarado prescindentes, aunque apoyaban veladamente a Menem. Y las tres fórmulas habían obtenido resultados muy disímiles en las restantes provincias, siempre conforme con los aparatos disponibles: Rodríguez Saá se había impuesto en la región cuyana (en San Luis, San Juan y Mendoza), Menem en el noroeste (en La Rioja y Catamarca, además de la Corrientes del Tato Romero Feris, La Pampa de Marín, la Misiones de Puerta y la Salta de su vice Romero) y Kirchner en la región patagónica (en Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén, además de la Jujuy de Fellner y la Formosa de Insfrán). A esta lógica política de internas, pues, se había superpuesto la lógica de las generales, que había favorecido a la fórmula de Menem con el apoyo de una parte importante de la derecha liberal (el millón de votos de la UCeDé sin el cual no hubiera podido superar a la de Kirchner), y el apoyo a la fórmula de Kirchner por una parte importante, aunque difícil de estimar, de la centroizquierda que se había visto amenazada por la eventualidad de una segunda vuelta protagonizada por Menem y López Murphy.

La afirmación de que el respaldo con que contaría una administración a cargo de Kirchner reducía a su segundo puesto, y su escaso 22% de los votos cosechados en las elecciones es ciertamente una superficialidad. Este magro resultado, en realidad, había estado condicionado por estas peculiaridades de las elecciones de abril de 2003 que venimos analizando. Incluso en el plano estrictamente electoral, Kirchner contaba de antemano con una capacidad de ampliar su base de apoyo enormemente mayor

4 Es sabido que el peronismo es, desde sus orígenes, una mixtura entre un aparato central con inserción urbana, articulado por los sindicatos en el peronismo clásico y por el partido mismo en el contemporáneo, que tiene un peso decisivo en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y las grandes ciudades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba -o sea, donde se concentra arriba del 65% del padrón electoral nacional-, por una parte, y una pléyade de caudillos provinciales y locales que controlan las zonas del interior menos urbanizadas, por la otra.

que la de Menem o cualquier otro candidato ante un *ballotage*. Carrió, Moreau y otros dirigentes ajenos al justicialismo habían anunciado previamente su respaldo a Kirchner ante una eventual segunda vuelta, y podía preverse que varios dirigentes peronistas se hubieran pronunciado en el mismo sentido. Mientras tanto, López Murphy retaceaba su respaldo a Menem. Las encuestas preelectorales, en vistas de esa segunda vuelta, registraron una ventaja de Kirchner sobre Menem que se ubicaba nada menos que entre los 30 y 50 puntos de diferencia.⁵ Y Menem renunció a participar del *ballotage*. Kirchner, en pocas palabras, contaba con suficiente respaldo como para ascender a la presidencia. Pero no sólo importa precisar la medida de este respaldo a Kirchner, sino también su naturaleza como respaldo al candidato que aparecía como la alternativa a Menem, es decir, como la alternativa al candidato que personificaba por excelencia el neoconservadurismo de los noventa. Importa precisarlo, decimos, porque determinaría la posterior consolidación kirchnerista de aquel respaldo mediante una retórica que presentará a su administración como una alternativa nacional y popular a este pasado neoconservador. Más aún. El triunfo de Kirchner en Argentina aparecería incluso como parte de una tendencia latinoamericana más amplia de ascenso al gobierno de fuerzas progresistas, opuestas al neoliberalismo.⁶

Ahora conviene precisar, con la mayor exactitud posible, las condiciones en las que Kirchner asumiría su administración. Kirchner había contado con suficiente apoyo potencial como para ascender a la presidencia, pero necesitaba actualizar ese apoyo en un consenso más o menos duradero que le permitiera ejercer esa presidencia. Kirchner había contado con una porción importante del aparato partidario y del aparato estatal para ascender a la presidencia, pero esos aparatos eran prestados, *duhaldistas*, y debía apropiárselos o construir sus propios aparatos para ejercer esa presidencia. Recordemos, de paso, que ejercer la presidencia, en esa Argentina de mediados de 2003, seguía siendo una tarea muy ardua. La administración provisional de Duhalde había alcanzado una serie de éxitos claves en su empeño por morigerar –aunque no aún de solucionar, desde luego– las consecuencias más catastróficas de la crisis de acumulación y dominación capitalistas que había

5 Véanse los datos provistos por OPSM de Zuleta Puceiro (65,4 contra 12,8%) y Equis de A. López (59,2 contra 24,1%) en Página 12 30/4/03. Un interrogante interesante, pero que no abordaremos aquí, quedó planteado por la posibilidad de que Menem, además, obtuviera menos votos en la segunda vuelta que en la primera.

6 A juzgar por sus clarines –como los editorialistas de Le Monde Diplomatique– fuerzas bastante diversas integrarían este ejército: desde gobiernos claramente diferenciados del neoliberalismo (como los de Chavez en Venezuela y Morales en Bolivia), pasando por gobiernos que preservan un statu quo neoliberal previo (como el de Kirchner), hasta gobiernos que encabezan sin más ofensivas neoliberales (como el de Lula en Brasil y acaso el de Tabaré Vazquez en Uruguay). Pero no podemos detenernos aquí en un análisis de este contexto político latinoamericano.

culminado en diciembre de 2001 (esos mismos éxitos que habían permitido encauzar las luchas sociales dentro de los límites de la democracia capitalista). La administración de Duhalde había evitado que la devaluación forzada de diciembre de 2001 desembocara en un proceso hiperinflacionario, y había mantenido controlada la apreciación del dólar –había gestionado “la devaluación más exitosa de la historia”, en palabras de su ministro Lavagna. Si recordamos las consecuencias económicas, sociales y políticas de los procesos hiperinflacionarios de 1989-90, advertimos enseguida la incomparable importancia de este punto. Recuérdese que, durante sus últimos meses, la preocupación de la administración duhaldista, impensable en los meses inmediatamente posteriores a la devaluación, consistía en evitar que la cotización del dólar cayera demasiado: había logrado contener a mediano plazo la inflación y el deterioro del salario real dentro de un total acumulado de algo más del 40%, y dentro de tasas mensuales en franco descenso. La administración de Duhalde también había enfriado paulatinamente las candentes secuelas del congelamiento de los depósitos bancarios, y había avanzado hacia una solución duradera mediante la devolución combinada en efectivo y bonos, desactivando así las demandas de los ahorristas. La administración de Duhalde había sostenido una estrategia ante los organismos financieros internacionales que, combinando presiones y pagos, marchaba hacia una renegociación de la deuda que revirtiera la situación de *default* pasivo en que se encontraba. La administración de Duhalde había multiplicado –y modificado la gestión de– los subsidios de desempleo a través de su plan de “jefes y jefas de hogar”, descomprimiendo y redefiniendo así las demandas del movimiento piquetero en su conjunto, y sumando a los dirigentes de la amplia mayoría de ese movimiento a su mesa de negociaciones. La administración de Duhalde había negociado tarifas con las empresas privatizadas de servicios públicos, limitando los aumentos a montos mucho menores a los que hubieran resultado de su dolarización, desactivando así una de las bombas de tiempo que, particularmente en manos de las asambleas barriales, podría haber llevado a un nuevo estallido social. La administración de Duhalde había concretado la devolución del 13% recortado a los salarios públicos, y había dispuesto algunos aumentos de salarios para el sector privado. Entonces, no sólo las demandas salariales, que ya comenzaban a plantearse desde las bases en algunos sectores, pudieron ser contenidas por una burocracia sindical comprometida desde el comienzo con el sostenimiento de dicha administración, sino que, incluso, se concedieron por decreto aumentos generales de sumas fijas no precedidos por reclamos sindicales. La administración de Duhalde había evitado, asimismo, subsidiando a los bancos a través de diversos mecanismos, un crac bancario que hubiera hundido al 80 o 90% del sistema, y engrosado en decenas de miles de nuevos trabajadores el contingente de los desempleados, particularmente en la convulsionada ciudad capital. La administración de Duhalde había gozado, además, de un amesetamiento de la depresión

económica, e incluso de una lenta recuperación de ciertos sectores productivos, vinculados a la exportación y a la sustitución de importaciones.

Desde luego, se impone una aclaración: la administración de Duhalde no había solucionado ninguno de los problemas antes mencionados, ni estaba en condiciones de hacerlo en su calidad de precaria administración provisional. Los problemas de la inflación en las condiciones eventuales de una recuperación económica sostenida, del congelamiento de los depósitos cuando el estado en *default* debiera encarar el pago de los nuevos bonos emitidos, y del pago de una deuda externa reestructurada en sus plazos y montos de principales e intereses, del desempleo e incluso del financiamiento futuro de los subsidios, de la reestructuración de las empresas de servicios privatizadas y de la banca, de la propia recuperación de la actividad de una economía que había atravesado la peor depresión de su historia, todos estos problemas quedaban pendientes de solución para una nueva administración. Ejercer la presidencia, a mediados de 2003, implicaba precisamente conducir una resolución duradera de estos problemas. En pocas palabras: Duhalde había restaurado la *governabilidad*, para valernos del eufemismo de moda que equivale a poner en caja a los trabajadores, pero Kirchner debía *governar*.

El desarrollo de la farsa

Kirchner inauguró su gobierno en la fecha patria del 25 de mayo de 2003 y junto con su gobierno la farsa que se prolonga hasta nuestros días. “Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo –*parloteó el nuevo presidente en su asunción*. Formo parte de una generación diezmada. Castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que éste, nuestro país, se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores pero con memoria. Memoria no sólo de los errores y horrores del otro. Sino que también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones”. La “reconstrucción del capitalismo nacional”, para usar la consigna del presidente, es decir, la gran farsa, había comenzado.

El rumbo adoptado por la nueva administración kirchnerista durante los cuatro años siguientes no se apartaría demasiado del recorrido previamente por la duhaldista. Kirchner contuvo relativamente la inflación a fuerza de la imposición de una extrema restricción del gasto público, y de la reconstitución de los ingresos públicos provenientes de los impuestos sobre el consumo y de las retenciones sobre

las exportaciones, que atravesaban ambos una franca recuperación.⁷ Y los superávits fiscales resultantes, que excedieron las previsiones presupuestarias del gobierno y las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, no fueron destinados a la recomposición de los estancados salarios públicos, ni a la implementación de un ingreso garantizado para los expulsados del mercado de trabajo, ni a la recuperación de la inversión en educación, salud o vivienda, sino a engrosar las reservas.⁸ Pero la novedad aquí no radica en que la administración kirchnerista haya impuesto una vez más medidas de ajuste típicamente neoliberales como estas, desde luego, sino en que haya podido rodearlas de un aura de virtuosa austeridad republicana, acorde con la recuperación del estado como instrumento de un pretendido proyecto nacional y popular. Kirchner, con su Ley de Responsabilidad Fiscal a cuestas, tuvo pues más suerte que aquel desvencijado De La Rúa, que había convocado a los gobernadores justicialistas a ajustar sus presupuestos provinciales en aras de una nueva independencia nacional, en aquella San Miguel de Tucumán del 9 de julio de 2001 (ver *Clarín* 17/7/01). Y, como para que no quedara duda alguna de su empeño en representar esta farsa hasta sus últimas consecuencias, apenas pudo, Kirchner reemplazó al representante de la UIA que había heredado como ministro de economía, Lavagna, por una representante de nadie llamada Felisa Miceli.

Kirchner revirtió también la situación de *default* pasivo en que había quedado la deuda externa del estado argentino. Esta salida de la cesación de pagos se realizó por tres caminos diferentes, aunque con un denominador común: el pago. En primer lugar, provisoriamente, durante 2003 y 2004, se continuaron realizando cuantiosos pagos a

7 La inflación acumulada desde enero de 2002 hasta nuestros días asciende a un 89,7%. La registrada entre 2003 y 2005 sólo explica alrededor de una cuarta parte de la misma –aunque ciertamente las tasas anuales vienen acelerándose: 3,7% en 2003, 6,1% en 2005 y 9,8% en 2006, previéndose una tasa igual o algo mayor que esta última para el año en curso (siempre según datos oficiales, cuestionables a partir del escándalo del INDEC).

8 El superávit fiscal primario trepó de unos 8.000 a unos 20.000 millones de pesos entre 2003 y 2005, y alcanzó el récord de 23.150 millones (o sea, más del 3,5% del PBI) en 2006. Entre 2003 y 2006, mientras tanto, los aumentos de salarios del sector público apenas igualaron la inflación, conservando así una pérdida de poder adquisitivo de arriba del 40% respecto de diciembre de 2001 (los salarios del sector público aumentaron un 48,2% entre enero de 2002 y febrero de 2007, contra un aumento del costo de vida del 89,7% en igual período). Los salarios del sector público se encuentran así aún más deteriorados que los salarios de los trabajadores en negro del sector privado, cuyos aumentos superaron levemente la inflación en 2003-05, aunque siguen con una pérdida acumulada de poder adquisitivo superior al 20% respecto del 2001 (pues aumentaron entre enero de 2002 y febrero de 2007 un 68,8% contra el mencionado aumento del 93,8% del costo de vida) y, naturalmente, de los trabajadores en blanco del sector privado, cuyos aumentos superaron ya la inflación 2001-05 en su conjunto (pues aumentaron un 130,9% entre enero de 2002 y febrero de 2007, siempre según datos del Ministerio de Economía).

los organismos financieros internacionales. En segundo lugar, a comienzos de 2005, se cerró una reestructuración de los plazos y montos de las $\frac{3}{4}$ partes de la deuda en manos de tenedores privados, que envolvió una quita del 43% a valor nominal o 65% a valor presente (inferior, ciertamente, al 75% a valor nominal proclamado como inamovible en Dubai en septiembre de 2003), y pagos comprometidos por entre 13 y 15.000 millones de dólares anuales en 2005-07.⁹ Y, en tercer lugar, una cancelación anticipada, con 9.800 millones de dólares de reservas, de la deuda en manos del FMI en diciembre de 2005. La novedad, esta vez, no radica en que la administración kirchnerista haya superado el *default* pagando, sino en que haya podido disfrazar su pago con los harapos de una recuperación de la autonomía del estado y la independencia de la nación. Los asistentes al Salón Blanco de la Casa Rosada, en aquella oportunidad en que Kirchner anunció esa cancelación anticipada de la deuda con el FMI, interrumpieron siete veces con sus aplausos la arenga antiimperialista del presidente, y clausuraron tan emotivo acto al grito futbolero de *¡Argentina, Argentina!* (*Clarín* 16/12/05). Estaban duchos: eran los mismos que habían vitoreado la otra arenga antiimperialista que había pronunciado Rodríguez Saá cuando, en la Asamblea Legislativa de asunción, anunció su heroica decisión de suspender los pagos de la deuda externa (*Página 12* 24/12/01). La Argentina ingresó así al *rating* de las naciones que se independizaron más veces en su historia, mientras R. Rato, del FMI, y J. Snow, del Tesoro de EEUU –aunque no sin disculparse por desconocer los considerandos antiimperialistas del presidente Kirchner–, se mostraban satisfechos con su resolución.

Kirchner caminó, asimismo, por la senda inaugurada por Duhalde en relación con las empresas públicas privatizadas. La pesificación y el congelamiento de las tarifas que siguieron a la devaluación habían desatado una vorágine de presiones por parte de las empresas privatizadas, los gobiernos español y francés y los organismos internacionales, que ya incluían varios juicios en el CIADI. Kirchner enfrentó esta vorágine con coraje, anunciando revisiones e incluso rescisiones generalizadas de contratos... y concediendo en materia de marcos regulatorios, subsidios, inversiones y salarios, a cambio de que las empresas de servicios públicos no aumentaran sus tarifas; permitiendo que aumentaran esas tarifas para los grandes consumidores, y que se trasladaran esos aumentos a los precios, a cambio de que no las aumentaran para los pequeños; rescindiendo apenas los contratos de las quebradas o vaciadas, como los Correos o el Ferrocarril San Martín, y siempre para volver a concesionarlas. Esta política, ciertamente, tropezó

9 Para estas medidas de la administración kirchnerista a propósito de la deuda externa véase el dossier de la Publicación de los Economistas de Izquierda 1, Bs. As., EDI, abril de 2005. Cabe agregar que, durante 2006, la Argentina regresó a los mercados financieros internacionales por primera vez desde el *default*, mediante sus colocaciones de Bonar V y VII por unos USD 2500 millones (además de sus ventas directas de bonos a Venezuela por otros 2000 millones).

con algunos cascotes. En mayo de 2004 Kirchner presentó su negociación con el Grupo Suez, el principal accionista de Aguas Argentinas, como un “modelo a seguir”; en septiembre de 2005 se despidió de ese mismo Grupo Suez con un rotundo “si se quieren ir, que se vayan” —despedida que seguramente no escucharon los franceses, puesto que ya se habían ido. Pero, en cualquier caso, Kirchner alcanzó su objetivo de mantener las tarifas de los servicios públicos a niveles que no desataran nuevas protestas masivas sin revertir la estructura de privatizaciones heredada de los noventa. Más osadas fueron las decisiones de Kirchner en materia energética y aeronáutica. La creación de ENARSA —una nueva petrolera estatal, sin petróleo, ni gas, ni usinas generadoras, ni redes de distribución propias, es cierto, pero con un capital inicial de 130 millones de pesos fuertes, un personal de 25 empleados macanudos y una linda oficina— garantiza, desde agosto de 2004, la intervención del estado en este sector tan caro a la soberanía nacional. La política energética de Kirchner no se reduce, así, como sugieren algunos, a su antigua y estrecha amistad con la gerencia de Repsol-YPF... La plena estatización de LAFSA en julio de 2003 reintrodujo también la presencia del estado en el sector aeronáutico. El mercado de vuelos de cabotaje estuvo dominado durante años por empresas de estrellas fugaces antes que de aeronaves (las extintas Lapa, Dinar, Aerovip y Southern Winds), así en el transporte de pasajeros como de estupefacientes. La creación de LAFSA puso fin a esta situación abruptamente, pues fue la primera empresa aeronáutica entre cuyos activos no figuraba cosa alguna que volara. Y, puesto que de nada servía tener cielos para volar sin tener aviones con los cuales hacerlo, LAFSA terminó vendiendo sus rutas a Lan Chile en marzo de 2005.

Es innecesario precisar dónde radica la farsa dentro de esta política kirchnerista ante las empresas públicas privatizadas. Pero quizás convenga recordar que la respuesta de la administración kirchnerista a quienes no se divierten con esa farsa es la represión. Los trabajadores aeronáuticos que en marzo de 2005 ocuparon el aeropuerto J. Newbery en defensa de sus puestos de trabajo, amenazados por la política kirchnerista frente a las aerolíneas de cabotaje, fueron duramente reprimidos por la Policía Aeroportuaria. Los trabajadores petroleros que acaban de desafiar, en febrero de 2006, en Las Heras y otras ciudades patagónicas, la política kirchnerista ante las empresas petroleras, fueron a su vez reprimidos por la Gendarmería Nacional. Y así sucesivamente. Es importante, en este punto, advertir sobre dos detalles. No nos estamos refiriendo a las acciones de fuerzas represivas provinciales que siguen asolando cotidianamente el interior —como sucede, por ejemplo, en el noreste salteño— al margen de las leyes y los medios de comunicación nacionales. Nos estamos refiriendo a acciones de fuerzas represivas —como esas policía aeroportuaria y gendarmería— dependientes del gobierno nacional. Y no nos referimos a cualesquiera acciones represivas, sino a acciones con pocos antecedentes desde la caída de la dictadura, como son la militarización de una ciudad (la citada Las Heras de los petroleros o la Río Gallegos de los docentes de nuestros días) o la prohibición de una manifestación (el

cercamiento de la Plaza de Mayo frente a la movilización encabezada por docentes en septiembre de 2005). La administración kirchnerista ha respondido, en síntesis, mediante acciones represivas de intensidad nada desdeñable a aquellos sectores de la clase trabajadora que desafiaron sus políticas en áreas decisivas.

Pero la represiva no fue ni podía ser la respuesta dominante de la administración kirchnerista ante los movimientos sociales. Kirchner, en cambio, conservó el programa de subsidios de desempleo implementado por Duhalde, y le sumó una nueva artillería de programas asistenciales (el Plan Alimentario Nacional, el Plan de Desarrollo Local y Economía Social y el Programa Familias, todos a cargo de su hermana y ministra de desarrollo social A. Kirchner) destinados a contener al movimiento piquetero, así como a tejer su propia red de caudillos y clientelas locales.¹⁰ Algunas organizaciones piqueteras, que se habían sentado a la mesa de negociaciones de Duhalde, encabezadas por la FTV de D'Elía, se convirtieron desde entonces en organizaciones de movilización de masas al servicio del gobierno. Y algunas otras organizaciones piqueteras más duras, aunque sumidas en la más extrema indignancia ideológica, como Barrios de Pie, de Tumini, se encargaron, a cambio de una buena paga en cargos y subsidios, de decorar este viejo asistencialismo con guiraldas nacionales y populares, para integrarlo dentro de la farsa representada. La asistencia y la cooptación fueron, en otras palabras, las respuestas kirchneristas dominantes ante los sectores más marginados de la sociedad. Kirchner contó, asimismo, con la conversión del amesetamiento y la incipiente recuperación de la economía, que habían tenido lugar con Duhalde, en una franca y sostenida expansión. En efecto, el producto se incrementó sostenidamente desde fines de la administración duhaldista o comienzos de la kirchnerista (i.e., desde 2002 en pesos corrientes o desde 2003 en pesos constantes), recuperando su nivel previo a la crisis (en 2005, el nivel de 1998), y superándolo más tarde.¹¹ Y en este contexto de recuperación de la economía se expandió el consumo, duplicándose entre 2001 y 2005, y alimentando el consenso de los sectores menos marginados alrededor del kirchnerismo.

10 En verdad, la propia recuperación económica indujo cierta mejoría en los niveles de pobreza y de desempleo que cimentaron al éxito de la estrategia de cooptación y asistencialismo empleada por la administración kirchnerista frente a los sectores más marginados de la sociedad. Si bien la distribución del ingreso es más regresiva que nunca, el desempleo se redujo del 20,4 al 11,4% entre el primer trimestre de 2003 y el primero de 2006 y la pobreza del 54 al 33,8% entre el primer semestre de 2003 y el segundo de 2005 (de INDEC, en Clarín 25/5/06). Esto permitió que los recursos para esas estrategias de cooptación y asistencialismo no necesariamente fueran más cuantiosos que antes –los planes Jefes y Jefas, por ejemplo, se redujeron de 2 a 1,3 millones entre 2003 y 2005).

11 No podemos detenernos aquí en las características de esta recuperación económica; para un análisis véase los artículos incluidos en la Publicación de los Economistas de Izquierda 3, Bs. As., EDI, abril de 2007.

Hasta aquí la administración kirchnerista aparece, a la luz de sus medidas, como una simple continuación de la duhaldista —aunque, a la luz de sus discursos, aparezca de una manera diferente. Pero un análisis que conduzca simplemente a este resultado sería algo reduccionista. También debe considerarse aquí una serie de medidas adoptadas por la administración kirchnerista en asuntos rigurosamente ajenos a los vinculados con la estructura del capitalismo argentino heredada de los noventa, que la distinguen de la administración duhaldista. Las relacionadas con derechos humanos se encuentran en el centro de estas medidas. Kirchner inauguró su mandato, en mayo de 2003, anunciando una purga en la cúpula de las fuerzas armadas, comprometida con la represión de la dictadura, que afectaría a la mitad de sus mandos y se convertiría en la mayor purga de su historia. Poco después, en agosto de 2003, el congreso declaró la nulidad de las leyes alfonsinistas de punto final y obediencia debida. Y en el siguiente aniversario del golpe de estado, marzo de 2004, Kirchner entregó las instalaciones del ex centro clandestino de detención de la ESMA para la construcción de un Museo de la Memoria. El presidente mostraba así que no había olvidado a sus compañeros del pasado —sin incurrir en grandes gastos políticos: un museo, una anulación de leyes que hubiera sido clave en los ochenta pero que carecía de consecuencias jurídicas importantes en nuestros días, y una purga de mandos heredados de la dictadura que ya habían quedado completamente subordinados a los poderes constitucionales en los noventa. Ciertamente, los juicios emprendidos a ex represores —a pesar de su carácter limitado, pues hasta el presente sólo arrojaron dos condenados, el Turco Julián y Echeolatz, sobre 243 procesados y 700 acusados— plantearon un desafío para la política de derechos humanos de Kirchner. La respuesta a la misma por parte de grupos asociados con la represión de estado pasó, esta vez, de la reivindicación discursiva del genocidio, realizada en Plaza San Martín el 25 de mayo de 2006, a la desaparición de Julio López desde septiembre de 2006. Y la reacción del gobierno ante este hecho fue una nueva repetición de la tragedia como farsa: de la tragedia de este caso López como farsa en el caso Gerez. Pero, en cualquier caso, puede afirmarse, para el conjunto de estas medidas relacionadas con los derechos humanos que adoptó la administración de Kirchner, muchas de ellas indiscutiblemente correctas, que no implicaron avances significativos en la situación actual de los derechos humanos¹², aunque sí resultaron suficientes para que la mayoría de las organizaciones de defensa de estos derechos, empezando por las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Bonafini, desnudara una superlativa indignancia ideológica, y quedara encolumnada detrás de la comparsa kirchnerista.

Las medidas tendientes a la depuración de ciertas instituciones que simbolizaban de modo privilegiado los manejos corruptos y arbitrarios del pasado menemista tam-

12 Un informe de CORREPI sobre la situación de los derechos humanos bajo la administración kirchnerista indicó, en agosto de 2006 que, lejos de reducirse, la represión ilegal se intensificó entre 2003 y 2006.

bién deben considerarse entre estas políticas que diferencian a la administración kirchnerista de la duhaldista. El caso más relevante es la depuración de la Corte Suprema de Justicia, iniciada ya en junio de 2003. Kirchner presionó a sus miembros logrando la renuncia de tres (Nazareno, Vázquez y López), e impulsó el juicio político de otros dos (Moliné O'Connor y Boggiano). La *mayoría automática* de la corte suprema menemista quedó así completamente desarticulada en pocos meses. Los cuatro reemplazantes nombrados (Zaffaroni, Argibay, Highton de Nolasco y Lorenzetti) resultaban menos cuestionables que sus predecesores, mientras que el no-nombramiento de otros dos reemplazantes redujo a siete los miembros de la nueva corte en los hechos. Y el segundo caso en orden de importancia fue la depuración del PAMI, en julio de 2003, que se encontraba en manos de la pandilla de Barrionuevo. Medidas como estas permitieron a la administración kirchnerista diferenciar un poco la imagen de su estilo de gobierno respecto de la imagen de los anteriores estilos de gobierno, el menemista y aún el duhaldista. Pero insistimos: se trata de medidas que no afectan la estructura básica adquirida por el capitalismo argentino en la década pasada. Y precisamos: de medidas que no afectan la estrategia de acumulación, porque cambios registrados en la acumulación, como la recuperación de la capacidad exportadora, el corte del financiamiento externo y demás, resultaron de la propia crisis antes que de medidas kirchneristas, y de medidas que no afectan la forma de estado, porque medidas como la renovación de la suprema corte o la depuración de las fuerzas armadas no modificaron la relación entre poderes u otros aspectos constitutivos de la forma de estado heredada de los noventa.

El rumbo político seguido por la administración kirchnerista desde su comienzo puede definirse, en síntesis, como la recuperación y continuación de la tarea emprendida por su antecesora duhaldista, en el sentido de administrar políticamente la superación por parte del capitalismo argentino de una de las peores crisis de acumulación y dominación de su historia, preservando, al mismo tiempo, los avances en materia de reestructuración neoconservadora de ese capitalismo que la gran burguesía había alcanzado en la década previa. Desde luego, esta tarea no podía consistir de ningún modo en una restauración sin más de las políticas seguidas por las administraciones menemistas con anterioridad a la insurrección de diciembre. Más aún, ni siquiera la manera en que debía desempeñarse esta tarea podía coincidir para una administración provisional como la duhaldista y para una administración normal, democráticamente electa, como la kirchnerista. Esta última debía desempeñarla, precisamente, actualizando y consolidando el apoyo que había cosechado en las elecciones en un consenso más o menos duradero, y construyendo sendos aparatos partidario y estatal afines que le permitieran desenvolverse. Los innumerables discursos y las contadas medidas progresistas, nacionales y populares, que distinguieron la administración kirchnerista de la duhaldista (que la distinguieron, precisamente, como farsa) nacieron de esta diferencia entre sus respectivos orígenes.

Kirchner resultó exitoso hasta ahora en sus esfuerzos por alcanzar esos requisitos del ejercicio de su presidencia. El arco político centroizquierdista, hundido de antemano en una profunda crisis, se vio en aprietos para diferenciarse de la nueva administración desde el día en que Kirchner anunció sus primeras medidas de gobierno. Kirchner implementó entonces su estrategia de *transversalidad*, que alcanzó su primer resultado importante en el encuentro de Córdoba, en marzo de 2004, entre los intendentes Ibarra de Buenos Aires (FrePaSo), Binner de Rosario (PS) y Juez de Córdoba (PJ), para organizar detrás suyo ese arco centroizquierdista. Es cierto que sólo algunos de sus dirigentes terminarían organizándose en el kirchnerismo de manera duradera, como M. Bonasso o E. Sigal, y que el propio Kirchner priorizó, ya desde mediados de 2004, su estrategia de organización de una corriente propia dentro del justicialismo. Pero la estrategia de la *transversalidad* resultó exitosa en la medida en que galvanizó la incapacidad de ese arco centroizquierdista de organizarse de manera independiente como alternativa política al kirchnerismo. Fueron significativas, en este sentido, la incapacidad del Encuentro de Rosario para cristalizar en una instancia de organización política independiente, y las dificultades que viene enfrentando E. Carrió para preservar al ARI como alternativa al kirchnerismo.

La situación del arco político derechista frente a la administración kirchnerista fue diferente, por cierto, aunque no mucho más favorable. En principio, este arco estaba mejor posicionado para diferenciarse del, y organizarse como alternativa al, gobierno kirchnerista. Pero, en los hechos, dos dificultades minaron esa posición. La primera se relaciona con la fractura, abierta ya en las presidenciales de 2003 y no cerrada hasta el presente, entre una derecha vinculada con el justicialismo —encabezada por C. Menem y J. C. Romero ayer y por M. Macri y J. Sobisch hoy—; y otra derecha proveniente del radicalismo y el liberalismo tradicional —ayer y hoy encabezada por R. López Murphy. La segunda atañe a la estabilización y el crecimiento económicos. Esta derecha pudo diferenciarse de la política económica seguida por la administración kirchnerista —en asuntos monetarios y fiscales, por ejemplo—, pero no pudo arrastrar detrás suyo un apoyo masivo porque no medió ningún problema económico serio —como, por ejemplo, una aceleración de la inflación— que proveyera terreno fértil a esa diferenciación. Puesto que ni siquiera un empresariado que estaba haciendo buenos negocios con la recuperación económica cuestionaba seriamente la política económica kirchnerista, esa diferenciación del arco derechista estaba de antemano condenada a convertirse en asunto escolástico. Las declaraciones de dirigentes políticos de derecha como López Murphy, en ese contexto, quedaron asimiladas a las columnas periodísticas de gurúes como Ávila. Sin embargo, es preciso advertir que, aún en ese contexto relativamente desfavorable, el arco de derecha alcanzó, frente al kirchnerismo, éxitos mucho más considerables que los alcanzados por el arco centroizquierdista. Los triunfos de M. Macri en la Ciudad de Buenos Aires y de

J. Sobisch en Neuquén, ambos a expensas del kirchnerismo, en las legislativas de octubre de 2005, alcanzan para atestiguarlo.¹³

Pero volvamos a aquella estrategia de organización de una corriente propia en el justicialismo que Kirchner privilegió desde mediados de 2004 –y que cristalizaría en el Frente para la Victoria con el que se impuso en las legislativas de octubre de 2005, y se impondrá en las generales de octubre de 2007. Basta con examinar los resultados de las elecciones pasadas, naturalmente, para comprobar el éxito de esa estrategia. El justicialismo kirchnerista duplicó con creces los votos del duhaldista en la estratégica provincia de Buenos Aires (46 contra 19,7%), y se impuso, asimismo, sobre los alineados con Menem en La Rioja (55 contra 35%) y con Barrionuevo en Catamarca (36 contra 27%). El justicialismo kirchnerista alcanzó, en síntesis, un 40% de los votos a escala nacional, mientras los restantes sectores justicialistas sumados apenas alcanzaron un 11%. En la medida en que en las elecciones de octubre de 2005 volvieron a solaparse internas y generales, como había sucedido en abril de 2003, mediante su victoria en ellas Kirchner completó su apropiación del PJ. Y, cambios de gabinete mediante, en particular el reemplazo de Lavagna por Miceli, esta apropiación del PJ permitió a Kirchner completar también su apropiación de su propia administración.

Pero, a raíz de ese mismo solapamiento entre internas y generales, imponerse en las internas del único partido en condiciones de gobernar era, asimismo, imponerse en las generales. El justicialismo en su conjunto alcanzó así mayoría absoluta, seguido de lejos por el radicalismo (con un 13,8%), las derechas tradicionales (PRO, Recrear y partidos provinciales, con 7,9%) y la centroizquierda independiente (7,3% del ARI). Mediante este resultado, Kirchner pudo ratificar en las urnas ese consenso que había ganado y conservado durante los dos años y medio previos –ese consenso alrededor de su candidatura, que no había podido expresarse debido a la suspensión de la segunda vuelta, y alrededor de su presidencia, que sólo había

13 En sentido estricto fue Sobisch el único de ambos que venció al kirchnerismo, con el triunfo de su Movimiento Popular Neuquino sobre el amplio Frente Cívico para la Victoria respaldado por Kirchner (el reciente asesinato del docente C. Fuentealba por la policía neuquina, empero, redujo drásticamente las posibilidades de Sobisch de proyectarse a escala nacional). El triunfo del PRO de Macri sobre Ibarra no debe considerarse inmediatamente como un triunfo sobre el kirchnerismo en la medida en que este, especialmente después de la tragedia de Cromagnon, se había alejado del ex jefe de gobierno porteño y había llevado listas propias en el distrito. De todas maneras, tanto la crisis del gobierno de Ibarra como la victoria de Macri y el magro resultado logrado por Bielsa fueron serios reveses para el kirchnerismo. Los previsibles triunfos de Macri y de Telermann en primera y segunda vuelta de las elecciones de 2007 depararían una nueva derrota al kirchnerismo en la ciudad capital.

podido expresarse en encuestas.¹⁴ Y su administración pudo consolidarse, alcanzando quórum propio en Senadores (43 sobre 72) y una mayoría muy cercana al quórum propio en Diputados (112, más unos 10 *transversales*, sobre 257).

Anotaciones para un balance

El balance que parece desprenderse de las páginas anteriores indicaría que la farsa kirchnerista, ya con tres años en cartel y siempre con la insurrección de diciembre de 2001 como telón de fondo, debe ser evaluada como un extraordinario éxito. Y en este balance pesimista habría algo de verdad, pero conviene precisarlo un poco.

Conviene, antes que nada, medir el tamaño exacto de su éxito. La administración kirchnerista resultó exitosa, fundamentalmente, en la medida en que pudo recuperar y completar la tarea iniciada por su predecesora duhaldista, consistente en revertir la crisis de acumulación y dominación capitalistas que había culminado en diciembre de 2001. La administración provisional duhaldista había restaurado la gobernabilidad, pero solo una administración electa como la kirchnerista podía consolidar esa restauración de la gobernabilidad a través del ejercicio efectivo del gobierno. Y Kirchner gobernó. Nada menos, pero tampoco nada más. Kirchner construyó los aparatos partidario y estatal propios para poder gobernar. Un éxito. Pero téngase en cuenta que ambos aparatos, que en alguna medida coincidían, o, más exactamente, que coincidían en la misma medida en que el justicialismo se había convertido en cuasi-partido de estado, estaban disponibles. Pues el PJ completo, desde su compañero presidente hasta el último de sus punteros barriales, era de antemano un aparato de dominación disponible para cualquier política burguesa que garantizara su propia reproducción como aparato. Esto ya había quedado en evidencia a comienzos de los noventa cuando Menem, siempre desde el gobierno, naturalmente, había subordinado al partido completo a sus políticas neoliberales, al irrisorio costo de ocho diputados. Había quedado en evidencia durante el menemismo, vale aclararlo, pero esa disponibilidad del PJ no había sido un resultado del ascenso del menemismo, sino de un prolongado proceso de degradación ideológica y política cuyo origen se remontaba al fracaso trágico del proyecto populista en 1973-76. El propio menemismo había sido, más bien, un resultado de

14 Ya mencionamos el respaldo con que contaba Kirchner, para una segunda vuelta ante Menem, a mediados de 2003 (véase nota 5). A fines de 2003 Kirchner contaba con una imagen favorable del 77% y su administración del 52% (IPSOS, Mora y Araujo) y a fines de 2004 del 73-87% y 63-64% respectivamente (CEOP, R. Rouvier y Asociados, OPSM, Analogías).

este proceso. No puede sorprendernos entonces que, una vez en el gobierno, Kirchner haya podido, a su vez, subordinar ese partido a su propia conducción.¹⁵

Kirchner construyó también un consenso que le hubiera alcanzado para triunfar cómodamente en una segunda vuelta de las presidenciales de 2003, que le alcanzó efectivamente para triunfar en las parlamentarias de octubre de 2005, y que le alcanzará para triunfar en las generales de 2007. Un éxito. Pero téngase en cuenta que aún no podemos hablar de una hegemonía política sólida, como la menemista de 1989-2001, sino que estamos hablando más bien de un consenso político coyuntural como, por ejemplo, el alfonsinista de 1984-86. Los triunfos electorales no necesariamente son indicadores de la vigencia de una nueva hegemonía. Y tampoco la mera duración de cierto consenso es indicadora de esa vigencia de una hegemonía, sino más bien la relación entre la evolución de ese consenso y la política implementada. En efecto, mientras que el consenso que acompañó a las administraciones menemistas no fue un indicador de la vigencia de una hegemonía neoconservadora porque se prolongó durante una década, sino porque fue construido y mantenido en consonancia con la más profunda y regresiva política de reestructuración capitalista, el consenso que acompañó a la administración kirchnerista durante estos cuatro años apenas se conjugó con una política de gatopardismo que se limitó a preservar los avances alcanzados por esa reestructuración.

En síntesis, la farsa kirchnerista sigue apareciendo como un éxito, evaluada con la insurrección de diciembre de 2001 como telón de fondo, aunque tampoco debemos magnificar la medida de dicho éxito. Este balance pareciera, pues, menos pesimista que el anterior. Pero conviene, a continuación, precisar en qué radica la capacidad política con la que cuenta el kirchnerismo y con la que respaldó ese éxito de su administración. Y en este sentido se impone una constatación: la capacidad política del kirchnerismo es, fundamentalmente, ni más ni menos que la contrapartida de nuestra propia incapacidad política. En otras palabras: el éxito de la farsa kirchnerista no responde a sus propias virtudes teatrales, sino a nuestra estupidez como público asistente a su representación.

Estas afirmaciones pueden parecer paradójicas, en la medida en que estamos predicando de un mismo sujeto social la capacidad para protagonizar una insurrección y, unos pocos años más tarde, la incapacidad para sustraerse de semejante farsa. No es el caso, sin embargo, porque aquella capacidad *social* para derribar la

15 Esto no significa, ciertamente, que esta subordinación del PJ a la política kirchnerista no haya implicado algunos cambios en relación con los sectores y los cuadros individuales dominantes dentro de su estructura como, por ejemplo, cierta recuperación de protagonismo de la burocracia sindical (respecto de su marginalidad en el PJ menemista) o la promoción de ex montoneros a posiciones decisivas (esos que en el PJ menemista se habían visto obligados a conformarse con posiciones secundarias).

administración aliancista era algo bien diferente de la capacidad *política* que se hubiera requerido para enfrentar a la administración kirchnerista. Mejor aún: porque aquella capacidad *social* para acabar con la hegemonía neoconservadora vigente en los noventa es algo bien diferente de la capacidad *política* que se hubiera requerido para implementar una estrategia que impidiera que la gran burguesía controlara la salida de la resultante crisis hegemónica. Los éxitos de la administración kirchnerista se convierten, entonces, en indicadores retrospectivos de las debilidades de la insurrección de diciembre que signa su origen. Potencia de nuestras luchas sociales versus impotencia de nuestras estrategias políticas: la propia consigna de *¡que se vayan todos!*, en su negatividad, no había sido sino una síntesis de ambas cosas.¹⁶

Una de las dimensiones decisivas de esta incapacidad política es, precisamente, la citada indigencia ideológica que afecta en su conjunto a las organizaciones sociales y políticas de izquierda, y que explica en buena medida el hecho de que quedaran inermes ante la escenificación de la farsa kirchnerista. Y aquí nos estamos refiriendo, ante todo, a esa considerable porción de organizaciones sociales y políticas, piqueteras, partidarias y de derechos humanos que se sumaron sin más a esta farsa kirchnerista, pero también a esas otras organizaciones que no se le sumaron, aunque igualmente quedaron sin armas políticas e ideológicas para enfrentarla. No es la riqueza de ese aquelarre de espectros nacionales y populares que invoca esa farsa kirchnerista, insistimos, sino la indigencia ideológica de su público lo que explica su éxito. El balance vuelve a adoptar, en este punto, rasgos más pesimistas. Porque cualquiera sea la capacidad política propia de la administración kirchnerista, su éxito parece así estar garantizado de antemano por nuestra propia incapacidad política para implementar una estrategia alternativa. Y, a su vez, esta incapacidad está determinada por esa indigencia ideológica que nos mantiene enredados entre esos mismos espectros conjurados por la farsa kirchnerista.

16 Esta convivencia entre potencia de las luchas sociales e impotencia de las estrategias políticas se registra igualmente en otras experiencias latinoamericanas: procesos de luchas sociales que resultan suficientemente potentes como para derribar gobiernos, resultan impotentes (como por ejemplo en el caso ecuatoriano) o atraviesan grandes dificultades (como en el caso boliviano en nuestros días) a la hora de diseñar estrategias políticas alternativas.

LA ESCUELA PÚBLICA SITIADA

Imen, Pablo, Buenos Aires, Editorial Centro Cultural de la Cooperación, 2006

La reforma educativa llevada adelante en la década de los '90, durante la presidencia de Carlos Menem, implicó un cambio significativo en las formas de abordar el campo pedagógico pero, al mismo tiempo, involucró una nueva cosmovisión de la educación como universo social y político.

Este libro nos sumerge en los por menores de una transformación que trascendió la Ley Federal de Educación, y que significó la instauración de un proyecto global en las instancias educativas. Los conceptos y herramientas brindados por el autor nos permiten analizar la reforma educativa neoliberal de una manera compleja, que trasciende el ámbito de la pedagogía, que se inmiscuye en una cosmovisión político-ideológica, recorriendo transversalmente todo el proceso.

A lo largo del trabajo, el autor no sólo realiza una lectura crítica de la reforma educativa sino, y al mismo tiempo, discute con aquellas concepciones reaccionarias que, en disputa con estas políticas, pretenden volver al sistema educativo previamente instituido. En este sentido, Pablo Imen realizará, durante toda su obra, un análisis crítico de los diversos postulados en que ambas cosmovisiones se posicionan para argumentar sus acciones políticas. El trabajo denota un gran esfuerzo por

posicionar al ámbito educativo como parte de una totalidad política y, al mismo tiempo, trascender las fronteras nacionales, mostrando el proyecto global que representa la ideología neoliberal vislumbrada en la reforma educativa.

La educación es vista por el autor como un espacio en permanente tensión. Por un lado, la observa como un espacio de naturalización e “*imposición de un arbitrio cultural*” (p. 30). En estos términos, la educación implica “*un instrumento de regulación de las prácticas pedagógicas en el aula sobre los alumnos y los docentes, un acto de despolitización de la praxis educativa y una imposición cultural que ahoga toda actividad orientada al logro de resultados esperables en los operativos evaluadores*” (p 31). Sin embargo, esta función resulta desarticulada cuando el autor observa que “*en el campo educativo se desenvuelven prácticas sociales, hay resistencias y lucha: aparecen aquí y allá señales de una escuela humanista y liberadora (...)*”. Por ello, si bien el trabajo destaca la reforma educativa como una estrategia del capital, nos muestra también la existencia de fisuras, representadas en las luchas de docentes, padres y alumnos por establecer formas alternativas de aprendizaje y por “*construir contrahegemonía en la particular esfera de la educación pública*”.

El autor comienza su trabajo con un análisis detallado de la propuesta política y social brindada por la nueva derecha. De allí, deriva la relevancia de esta cosmovisión en las políticas educa-

tivas, poniendo en tela de juicio argumentos básicos de esta concepción, como la libertad de elección (en términos del consumo), la supremacía del mercado y los estándares de calidad. Pablo Imen explicita así cómo los intentos por instaurar un nuevo proyecto social por parte del capital no sólo remiten a transformaciones en el ámbito del trabajo, la economía y la política, sino que se instalan en la educación, induciendo nuevos valores, nuevas formas y estructuras de crear y distribuir el conocimiento, y generando nuevas pautas pedagógicas y dinámicas escolares que definen el proyecto integral y orgánico de la clase dominante.

La centralidad de la política estatal como marco de estructuración del sistema educativo lleva al autor a analizar la importancia de las transformaciones en el rol del Estado. La desarticulación de la idea del derecho a la educación, y su constitución como un bien mercantilizado, tiene su correlato en el establecimiento de una nueva forma de Estado que muta sus roles. Así, este aparece simultáneamente como Estado penal que promueve “*la vigilancia y disciplinamiento de las masas empobrecidas*” (p. 49) y como Estado asistencial que, mediante políticas focalizadas, responsabiliza a los individuos por su suerte. En este marco, la educación se consolida como una instancia que reproduce la profundización de la desigualdad social propia del modelo neoliberal.

Estas transformaciones en la estructura estatal cristalizan la implementación de una nueva forma de dominación por

parte del capital, y promueven una política educativa que contiene de manera evidente un proyecto de reordenamiento de la sociedad. Bajo esta lógica, el autor realiza el análisis de las categorías explicitadas en las leyes que compusieron la totalidad de la reforma, entre ellas, la Ley de transferencia Educativa (1991), la Ley Federal de Educación (1994), la Ley de Educación Superior (1995) y los Pactos federales (1994). Con la observación de estas categorías se accede a un planteo más profundo sobre la reformulación del rol del Estado en el ámbito educativo, sobre la implementación de renovados dispositivos de control del trabajo docente, a través de una reforma de sus condiciones laborales y sobre la reformulación de una nueva estructura pedagógica.

Según Imen, la reforma neoliberal educativa promovió la presencia de un Estado evaluador que, lejos de garantizar la entrada y permanencia en el sistema, sirvió para regular y controlar su calidad y eficiencia a través de un sistema estandarizado de saberes. Al mismo tiempo, este Estado avanzó en la fragmentación y privatización del sistema y en la centralización del proceso decisional. La autonomía reivindicada por el proyecto neoliberal, cuyo basamento radicaba en los supuestos del individualismo, la competencia y la búsqueda de calidad, pretendió la descentralización financiera y administrativa, posicionando en el mercado y las provincias la responsabilidad básica de garantizar la educación. Además, el conocimiento científico se consolidó como

incuestionable, lo que impidió el uso de la reflexión crítica por parte de docentes y alumnos, y conllevó al adoctrinamiento. Las políticas asistencialistas propias de este Estado supusieron la aceptación de la desigualdad y endilgaron la responsabilidad por la educación a niños, padres y docentes, deteriorando un sistema educativo que, en concordancia con la sociedad, se encontraba en crisis. En conjunto, estas reformas consolidaron la histórica transferencia de la educación al sector privado y al ámbito provincial, creando un sistema educativo que, bajo la lógica del mercado, sólo fomentaba la desigualdad y la exclusión.

Sin embargo, la dinámica de la reforma trascendió el carácter del Estado nacional. Y esto se debe a que la reforma nació a partir de la necesidad de estructurar nuevas formas sociales de producción y una nueva relación entre el capital y el trabajo, favorables al primero. La fuerte presencia de los organismos internacionales denominados consultores, como el Banco Mundial, la CEPAL y la UNESCO, fue un elemento central para la propagación de esta nueva concepción ideológica de la educación. Basado en este argumento, el autor realiza una lectura pormenorizada de sus documentos y propuestas que presentan un diagnóstico específico y una solución concreta a la crisis educativa. El uso de este método le permite vislumbrar el desarrollo que estos organismos realizan de los presupuestos neoliberales, y permite ahondar en las razones que hicieron que estos actores

internacionales se establecieran como canales de influencia para la formulación de las políticas educativas llevadas adelante durante la década de los 90.

Para finalizar su exposición, Pablo Imen muestra las múltiples evaluaciones realizadas a partir de la aplicación de la reforma. Por un lado, describe las evaluaciones realizadas por el Banco Mundial y el FIEL. Ambos organismos proponen, basándose en una crítica a la forma en que se aplicaron las modificaciones educativas, avanzar en la conformación del mercado educativo. Además, pretenden la consolidación de las políticas privatizadoras, la competencia, el asistencialismo, la evaluación y la flexibilización del trabajo docente. Mientras, organismos sindicales como CTERA o ADEMYS plantean la necesidad de un cambio en el rumbo de las políticas educativas.

El trabajo finaliza con una extensa reflexión sobre el carácter público de la educación. De la misma manera en que la educación se presenta para el autor como un espacio de tensiones, el ámbito y concepto de lo público lleva consigo la necesidad de un contexto histórico y un esfuerzo por devanar el momento del conflicto de clases que lo origina. Por ello, luego de un análisis de las significaciones del espacio público a lo largo de la historia, reflexiona sobre la función que lo público cumple al interior de las relaciones sociales capitalistas. La desigual redistribución del poder, la riqueza y el conocimiento, y la falta de articulación entre los que debaten y los

que deciden, son factores que denotan que el espacio público encubre, de manera naturalizada o fetichizada, la presencia de intereses privados. Así, la existencia de este espacio “público” sirve a la legitimación del orden burgués. Mientras tanto, la presencia histórica de una lucha que ha ampliado los espacios de participación permite visualizar al ámbito público como un terreno en disputa. Y aunque la ampliación de los espacios de lucha significa también un reacomodamiento de las relaciones de dominación, al mismo tiempo, implica la articulación de nuevas relaciones de fuerza (p. 209). En este sentido, la educación, cuando es pensada como pública, no debe ser directamente asociada a la cuestión estatal. Ya que la educación estatal, que se ha consolidado desde los albores de la revolución francesa, posee aspectos clasistas, racistas y sexistas, que obligan a comprender que la educación “*no es ajena (al) proceso de reapropiación privada del poder social*” (p. 212). Ahora bien, aunque lo público implica algo más que lo estatal, incluye indefectiblemente al Estado. Y esto se debe a que, según el autor, renunciar a las políticas de Estado sería capitular al campo estatal de la lucha “*donde reside y se disputa buena parte del poder social*” (p. 226).

En todo este contexto, si bien la educación pública cumple un papel central como herramienta de transmisión de discursos ideológicos, a la vez “*los procesos simbólicos dejan resquicios para la contestación que los convierten en terreno de lucha*” (p. 214). Por ello, el

concepto de “dispositivo pedagógico” tomado de Bernstein, le permite explicar la forma en que la clase dominante se apropia del conocimiento y legitima esa apropiación, al tiempo que controla y consolida la reproducción del orden capitalista. Sin embargo, ninguno de los dos autores descarta la posibilidad de luchas “*que subviertan las reglas fundamentales del dispositivo*” (p. 215).

Por último, la propuesta que realiza el autor de un nuevo abordaje metodológico para comprender las particularidades del espacio público en cada momento histórico resulta enriquecedora, más allá de su aplicación específica al ámbito educativo.

La presencia de conceptos en tensión hace de este libro una importantísima herramienta de reflexión sobre las implicancias de lo educativo, lo público y lo político. Los grandes disparadores que movilizan este trabajo se mantienen y potencian, permitiendo trascender la cuestión educativa, sin dejar de contenerla y completarla.

Luego de diez años de la aplicación de esta reforma educativa, y con todas las cartas sobre la mesa, los intentos de problematizar la cuestión educativa nos enfrentan a nuevos desafíos metodológicos y conceptuales que ayudan a comprender ya no sólo lo acontecido luego de las políticas educativas neoliberales, sino, y más recientemente, con la implementación de la nueva “Ley de Educación Nacional” aprobada por el gobierno de Néstor Kirchner.

La relevancia que la educación po-

see en la conformación del orden social nos obliga a comprender no sólo los mecanismos que la estructuran como estrategia de legitimación de ese orden. Pero, al mismo tiempo, nos insta a observar su carácter transformador, y a posicionarnos como sujetos creativos, capaces de criticar el sentido común establecido y tomar conciencia de que “*el problema social y político de la educa-*

ción no debe dejarse sólo al arbitrio de los pedagogos, pero tampoco puede confiarse para su solución en una política educativa estatal que se limite a construir escuelas y promulgar leyes ajenas a la realidad social y política y a las verdaderas necesidades populares” (Gramsci).

Carla Poth

LA SOCIEDAD EXCLUYENTE. LA ARGENTINA BAJO EL SIGNO DEL NEOLIBERALISMO.

Svampa, Maristella, Buenos Aires, Editorial Taurus, 2005.

¿Qué tipo de sociedad fue la resultante de las políticas neoliberales aplicadas en Argentina durante la década del '90? Este interrogante, tan ambicioso como necesario, es el motor de las reflexiones que Maristella Svampa desarrolla en este valioso libro. Como bien señala su autora, *La sociedad excluyente* va a contramano de cierta sociología en boga que privilegia los estudios de caso y los análisis micro. Temerosas de cualquier indagación que sobrepase los límites geográficos de un barrio o los marcos temporales de un lustro, las Ciencias Sociales contemporáneas se condenan a la insignificancia de la especificidad. Lejos de esta práctica canónica del *small is beautiful*, el nuevo libro de Svampa se propone la tarea —política y

teóricamente indispensable— de reconstruir los contornos de la nueva sociedad emergente en la Argentina neoliberal.

Para ello recurre a cierta tradición crítica de la sociología política que, apoyándose en los cambios económicos instrumentados durante este período, delinea luego los rasgos del modelo de dominación política que los posibilitaron. Dos puntos de inflexión, según la autora, marcaron la historia previa de la década neoliberal en Argentina. Por un lado, el accionar de la última dictadura militar, que se propuso, a un tiempo, modificar las bases materiales de la sociedad y acabar con el ciclo ascendente de movilización social y política de las clases subalternas. Por otro lado, la crisis hiperinflacionaria de 1989, la cual no sólo produjo una brutal redistribución regresiva de la renta nacional, sino que marcó a fuego el imaginario colectivo de la sociedad argentina mediante “el fantasma de la hiper”. Con estos quiebres históricos traumáticamente inscriptos en el cuerpo social, se inau-

gura el período de gobierno de Menem. Destacarlos, como lo hace Svampa, resulta indispensable, en la medida en que actuaron como trasfondo siniestro de las políticas neoliberales.

En este sentido, la paridad de la moneda nacional con el dólar, la apertura comercial, la desregulación de la economía, configuraron una política económica de *shock* que logró detener la hiperinflación y disminuir la pobreza, pero al costo de la quiebra de pequeñas y medianas empresas, la “reprimarización de la economía”, el incremento incesante del desempleo y la dualización de la sociedad. Si la hiperinflación aparece como un “fantasma” de un pasado traumático al cual no se quiere retornar, la estabilidad ganada por la convertibilidad hará las veces de “fantasía” social de un primer mundo finalmente alcanzado. El miedo al pasado, la ilusión de un futuro de bienestar, justificarán el discurso de la “cirugía sin anestesia”. El gobierno de Menem logrará, de esta manera, la subordinación de los tiempos político-institucionales a las reformas inmediatas que exige una realidad gobernada por la emergencia permanente.

En cuanto a las modalidades concretas que revistió la instrumentación de las reformas neoliberales, Svampa señala cómo la etapa neoliberal supuso un vínculo mucho más estrecho entre los sectores dominantes y los dos partidos políticos mayoritarios, vínculo construido a partir de una estrategia de “colonización” y cooptación ideológica del discurso económico liberal, que daría lu-

gar a un nuevo modelo de dominación. Esta estrategia de “colonización” habría permitido a las clases dominantes lograr realizar los cambios que pretendían a través de su antiguo “adversario histórico”, el peronismo, en quien habrían encontrado un aliado inesperado. A ello se agregaría la consumación de una “comunidad de negocios” entre técnicos y especialistas —empleados alternativamente por grupos privados y por dependencias estatales—, empresarios y funcionarios políticos, que se beneficiaron directamente con las reformas implementadas.

Sin desconocer la existencia de este factor, mucho más importante para la aplicación de las políticas neoliberales nos parecen los tres elementos con los que la autora define al nuevo modelo de dominación: la sumisión de la política a la economía, la acentuación de la tradición hiperpresidencialista y decisionista de la democracia argentina, y un nuevo estilo de gestión y administración públicas fomentado por los organismos de crédito internacionales. Como bien subraya Svampa, la subordinación de la política a la economía garantizó la naturalización de las reformas neoliberales, produciendo una despolitización de la instancia decisoria y acentuando la imagen de inevitabilidad de las políticas implementadas. La tradición personalista y populista del peronismo, a su vez, hizo las veces de vehículo para el reforzamiento de la soberanía presidencial en reemplazo de un centro estatal vaciado. La concentración del poder en el Ejecutivo, el estilo político decisio-

nista y el gobierno permanente bajo condiciones de excepción se convirtieron en rasgos característicos de la democracia argentina, y explican, en gran medida, la celeridad con la que se consumó el proceso. El nuevo tipo de gestión pública, por su parte, se asentaría en la exigencia de profesionalización, la descentralización administrativa y la focalización de las políticas sociales. La descentralización de competencias y la focalización de las políticas sociales promovieron la consolidación de una extensa red clientelar de punteros políticos destinada a contener, controlar y subordinar a las clases populares, constituyendo una matriz asistencial de dominio. Esta matriz no sólo permitió contener socialmente los estragos que las políticas económicas irían produciendo en el tejido social, sino que actuó también, en gran medida, como dispositivo de desarticulación de todo intento de autoorganización popular. Como complemento indispensable, agrega Svampa, el Estado desplegó una estrategia de reforzamiento del sistema represivo para contener la protesta social, criminalizando a las clases populares que se rebelaban contra el clientelismo político en los barrios.

En la segunda parte, el análisis de Svampa da cuenta de la dialéctica entre los cambios estructurales acaecidos y las prácticas sociales de las diferentes clases. La conclusión es inequívoca: el régimen neoliberal conllevó, para las diferentes clases sociales, una modificación profunda en la distribución del poder social: la pérdida del peso relativo

de las clases medias y populares y la consiguiente concentración de los poderes económicos y políticos en las clases altas. El período se caracteriza por una fuerte concentración, centralización y extranjerización de la economía, signada por la alianza entre empresas transnacionales y grandes grupos económicos locales. Esta alianza sostuvo una relación privilegiada con el Estado, encontrando nuevas posibilidades de generación de beneficios a través de la privatización de los servicios públicos y el desguace de las empresas estatales. En este punto, coincidimos con la autora cuando afirma que el “nuevo perfil empresarial” presenta rasgos de continuidad con etapas anteriores de la historia argentina, caracterizado por su dependencia del Estado y un comportamiento estratégico de corto plazo.

Para las clases subalternas, por su parte, la tendencia general a la pauperización de las condiciones de vida de la población se tornó mucho más dramática. Los trabajadores se vieron especialmente afectados por los procesos de desindustrialización, la precarización de las relaciones laborales y el incremento del desempleo. Esta orientación estructural de la economía argentina produjo, según la autora, una separación entre el mundo popular urbano y el mundo del trabajo formal, proceso representado en la territorialización de las clases populares. “El pasaje de la fábrica al barrio” significó la ruptura de los marcos sociales e identitarios de los trabajadores, así como la mutación de los tradicionales lazos políticos y culturales

que los ligaban con el movimiento peronista. En este sentido, es importante destacar, junto con la autora, que la centralidad del territorio como espacio de oportunidades para las estrategias de supervivencia popular fue reforzada por la descentralización y la focalización de las políticas sociales. Las relaciones de las clases populares con el Estado estarán condicionadas, de aquí en más, por las redes asistenciales del clientelismo político y por la figura del “militante social”, mediador en la gestión de las necesidades básicas populares. Esta matriz asistencial de dominio encontrará sus límites a partir de la emergencia de las organizaciones de trabajadores desocupados, construidas al margen y contra las estructuras clientelares del partido Justicialista.

En cuanto a este proceso de territorialización de las clases populares, merece ser subrayada la tensión que señala Svampa en torno a la autonomía. La autonomía no sólo representa los intentos de construcción de poder popular desde los barrios; manifiesta, también, ciertas estrategias de *empowerment* fomentadas por los organismos internacionales de crédito, que procuran transferir el costo del ajuste a las comunidades locales. Al tiempo que damos cuenta del potencial anticapitalista de algunas experiencias de poder popular, debemos considerar la manera en la cual el capitalismo contemporáneo interpela a un individuo activamente responsable y a una comunidad autogobernada. Como lo resalta la autora, cada vez más se apela a la “autonomía” del sujeto ciu-

dadano, a su capacidad de elaborar directamente las herramientas que le permitan competir y sobrevivir en el mercado. El vaciamiento de las capacidades estatales, especialmente aquellas vinculadas a la esfera de la reproducción (servicios públicos, salario indirecto, programas de ayuda social, etc.), dio paso a una estrategia basada en el *empowerment social* de los sujetos colectivos e individuales, anteriormente “asistidos” por las regulaciones estatales. Es así como los organismos de crédito internacionales están dispuestos a solventar y fortalecer los activos de la sociedad civil para que gestionen su propia pobreza, al tiempo que se les exige el ejercicio de una especie de “control ciudadano” sobre la aplicación de los ajustados presupuestos públicos.

Sin pretender haber agotado todas las aristas interesantes que presenta el libro de Svampa, debemos terminar reflejando la manera en la cual la autora argumenta sobre la resultante social de este período neoliberal. En este sentido, Svampa afirma que llegamos al fin de la “excepcionalidad argentina” en el contexto latinoamericano. La matriz social fundada en el Estado benefactor –en su versión nacional popular y nacional desarrollista–, gobernada por una lógica igualitaria que promovió el desarrollo de una importante clase media y la integración progresiva de sectores significativos de las clases populares, llegó a su término. De esta manera, se constituyen los contornos de una *sociedad excluyente*, cuya dinámica estructural disociará de manera permanente el cre-

cimiento y la modernización económica del bienestar del conjunto de la sociedad. Este corolario, en fin, no sólo habla de nuestro pasado reciente, caracteriza un presente en que la euforia con la que se exhiben los indicadores de cre-

cimiento de la economía argentina no logra ocultar la trágica fractura de una sociedad que no puede desarrollarse sin excluir y marginar a la mayor parte de su población.

Ariel Fontecoba

CONCURSO PERIFERIAS

LA PARTICIPACIÓN COMO EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA.

Construcción y organización alternativa a la hegemónica. Experiencias y propuestas

FUNDAMENTACIÓN

En el marco de la celebración del décimo aniversario de la revista *Periferias*, es una preocupación central de quienes la hacemos el promover la investigación y el intercambio de ideas entre las nuevas generaciones de intelectuales y militantes de izquierda.

En este contexto, buscamos que la revista sea un espacio de debate crítico, donde se puedan dar a conocer nuevas ideas y reflexiones, proponer alternativas, aportar al cambio de las relaciones sociales dominantes.

Por lo dicho es que el concurso está abierto a la participación de todos aquellos que tengan reflexión crítica acerca de ideas, experiencias de lucha y organización, para compartirlas en aras de la profunda transformación estructural, económico-política y social que necesitamos, y la puesta en marcha del socialismo.

BASES Y REGLAMENTACIÓN

1. TEMA

El tema propuesto para este concurso es **La participación como ejercicio de la democracia. Construcción y organización alternativas a la hegemónica. Experiencias y propuestas.**

En el contexto político actual, y teniendo en cuenta lo acontecido en nuestro país luego del levantamiento popular de Diciembre de 2001, creemos fundamental el debate sobre la participación político-social en sentido transformador, así como de las propuestas de construcción de una sociedad alternativa.

Dado que no se puede pensar la realidad argentina escindida del contexto latinoamericano, donde se han multiplicado los escenarios de lucha, este concurso

está orientado a pensar y repensar la variedad de experiencias –nuevas y no tan nuevas– que dan vida hoy a la realidad de los países de América Latina, a sus propuestas y trascendencia. Al mismo tiempo, el concurso se orienta a reflexionar sobre todas aquellas experiencias pasadas que ayudaron, de distintas maneras, a la transformación o a la búsqueda de la subversión del orden establecido. La necesaria reflexión sobre nuestra praxis y modos de “hacer” cotidianos se vuelve imprescindible si creemos que la práctica revolucionaria se nutre de teorías dinámicas pensadas acorde con la realidad que las circundan.

2. PARTICIPANTES

2.1 Los trabajos serán agrupados en dos categorías, definidas de acuerdo con la edad de los autores:

- a) Hasta 25 años inclusive a la fecha de cierre de recepción de trabajos (31 de Agosto).
- b) Mayores de 25 años.

2.2 Los trabajos pueden ser individuales o grupales.

2.3 Quedan excluidos de este concurso todas las personas vinculadas a la revista *Periferias*.

3. REQUISITOS DEL ENSAYO

3.1 El ensayo deberá ser inédito, y no deberá estar bajo referato en otros concursos.

3.2 Formato:

a) Los trabajos serán enviados en formato de hoja A4, letra Times New Roman tamaño 12, interlineado a espacio y medio, en una extensión de 10 (mínimo) a 20 carillas (máximo).

b) Las citas bibliográficas se indicarán en el texto, al final del párrafo correspondiente, de la siguiente forma: entre paréntesis, con apellido del autor, año de la edición, y página/s citada/s si corresponde. En el caso de que se cite a más de tres autores, se incluirá el apellido del primero seguido por *et al.*

(Ej. (...) sociedad, y con un decidido apoyo popular” (Gambina *et al.*, 2002: 119).

c) La bibliografía deberá ser incluida al final del artículo. Es imprescindible constatar que todas las referencias citadas en el texto aparezcan en el listado de Bibliografía. Los esquemas para las citas bibliográficas serán:

Libro: Apellido y nombre del autor, título completo en itálica, editorial, ciudad

y año, si se trata de un libro. [Ej. Vilar, Pier, *Historia marxista, historia en construcción*, Anagrama, Barcelona, 1954.]

Capítulo de libro colectivo: Se mencionará al inicio el nombre del autor y el título entre comillas, especificando el carácter de compilador del responsable de la publicación. [Ej. Amatriain, Ignacio, “La eterna crisis. Vida Privada, Vínculos afectivos y sociabilidad” en Murillo, Susana (Comp.), *Sujetos a la incertidumbre: transformación social y construcción de subjetividad en la Buenos Aires actual*, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2002].

Artículo de publicación periódica: Deberá consignarse título completo del artículo entre comillas, nombre de la publicación periódica en itálica, número, volumen y año de la misma.

4. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN

4.1 Deberán presentarse cinco copias impresas del trabajo en sobre cerrado y con seudónimo y título del trabajo en el sobre y en la carátula del trabajo.

Cada sobre, asimismo, deberá contener otro sobre cerrado con los datos del autor correspondientes al seudónimo:

- Nombre y apellido
- Fecha de nacimiento
- DNI
- Dirección
- Pertenencia institucional (optativo)
- Teléfono
- Correo electrónico (quienes no tengan correo electrónico, deberán consignar un teléfono alternativo)

4.2 El trabajo deberá entregarse, además, en soporte digital (disquete o CD) consignando solo el seudónimo y el título de la obra.

5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

5.1 Los trabajos deberán presentarse en la FISYP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas): Av. Corrientes 1543, 5° piso, Capital Federal.

5.2 Se recibirán trabajos hasta el 31 de Agosto de 2007 inclusive.

6. JURADO

6.1 Los trabajos de evaluarán en dos instancias.

a) La primera selección estará a cargo del colectivo de redacción de la revista *Periferias*.

b) Los trabajos preseleccionados serán evaluados luego por un jurado integrado por: Atilio Borón (Facultad de Ciencias Sociales – UBA), María Celia Cotarelo (PIMSA- Programa de Investigaciones del Movimiento Social en Argentina), Oscar Martínez (TEL- Taller de Estudios Laborales), Pablo Pozzi (Facultad de Filosofía y Letras - UBA) y Mabel Thwaites Rey (Facultad de Ciencias Sociales – UBA).

6.2 La decisión del jurado será final e inapelable.

7. RESULTADOS

7.1 Los resultados se darán a conocer en Noviembre de 2007.

8. PREMIO

8.1 Todos los trabajos recibidos serán publicados en un CD, y presentados luego en una Jornada a realizarse en el mes de Noviembre de 2007.

8.2 El trabajo ganador del primer premio de cada categoría recibirá una orden de compra en libros por \$350 en la librería “Julio Cortázar”. Asimismo, estos dos trabajos serán publicados en la revista *Periferias* durante el transcurso del año 2008. El jurado podrá hacer observaciones/correcciones para que los trabajos ganadores sean publicados en la revista.

8.3 El concurso podrá ser declarado desierto por el Jurado.

9. CONTACTO

Cualquier consulta sobre el concurso dirigirse a: periferias@rcc.com.ar

NOTA PARA COLABORADORES

Las colaboraciones deberán ajustarse a las siguientes características de presentación:

- 1) Las colaboraciones serán enviadas por correo electrónico a periferias@rcc.com.ar, en formato de hoja A4, letra Times New Roman tamaño 12 o Arial tamaño 11. Se agregará una página con nombre del autor, domicilio, dirección de e-mail, teléfono y breve información sobre su pertenencia institucional. En lo posible, se hará llegar una copia en papel.
- 2) Los artículos tendrán una extensión máxima de 40.000 caracteres (con espacios), las notas y comunicaciones, 20.000, y las reseñas bibliográficas, 10.000.
- 3) Los artículos de investigación incluirán *abstracts* de no más de cien palabras, en español e inglés.
- 4) Las citas y notas bibliográficas se incluirán al pie del texto, con el siguiente formato: Apellido y nombre del autor, título del libro en cursiva, ciudad de edición, editor, año de publicación. En caso de ser artículos de revista, se entrecomillará el título del trabajo y se consignará en cursiva el nombre de la publicación, agregando número, volumen, serie, año y páginas. Criterio similar deberá asumirse con los capítulos de libros u obras colectivas.
- 5) Las Reseñas Bibliográficas irán encabezadas en el siguiente orden: nombre y apellido del autor o autores de la obra comentada, título, lugar de publicación, editorial y año de edición, nombre y apellido del autor de la reseña.
- 6) Todas las colaboraciones recibidas serán examinadas por el Consejo Asesor de la revista.

A LOS LECTORES

La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
cuenta con un espacio radial: **PUENTE 1**,
los viernes de 18 a 20 hs. por FM La Tribu,
88.7 del dial.